

Anuario de Investigaciones

Buenos Aires, diciembre de 2010

**Carolina Allievi, Alejandro Gambina, Rodolfo Gómez,
Carolina Molió, Germán D. Pinazo,
José Francisco Puello-Socarrás, Adrián Pulleiro,
Micaela Ronconi, Gastón Angel Varesi**

Anuario de Investigaciones

FISyP, Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas

Av. Corrientes 1515, 6to “B”

(CP1042AAB) Buenos Aires - Argentina

Tel Fax:

4371-0538

mail:

fisyp@fisyp.org.ar

web:

www.fisyp.org.ar

Diseño y producción editorial:

José Luis Bournasell

Publicación anual

La Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas es una entidad sin fines de lucro, dedicada a la actividad de investigación, docencia y difusión en diversas áreas de Ciencias Sociales.

Promover la edición de *Anuario de Investigaciones*, es una iniciativa asumida como parte integrante de su actividad académica.

ISSN: 1853-6689

ÍNDICE

El rol de los medios masivos de comunicación comerciales en el proceso de recomposición de la hegemonía dominante en la Argentina (2001-2003) <i>Micaela Ronconi, Alejandro Gambina, Rodolfo Gómez</i>	5
Los sentidos de la recomposición <i>Carolina Allievi, Carolina Molió y Adrián Pulleiro</i>	13
Escribiendo un “Nuevo Neo-liberalismo” <i>José Francisco Puello-Socarrás</i>	31
Las políticas fundacionales del modelo post-convertibilidad <i>Gastón Ángel Varesi</i>	43
Algunas reflexiones sobre la cuestión del neodesarrollismo y la alternativa política al neoliberalismo <i>Germán D. Pinazo</i>	67

EL ROL DE LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN COMERCIALES EN EL PROCESO DE RECOMPOSICIÓN DE LA HEGEMONÍA DOMINANTE EN LA ARGENTINA (2001-2003)

*Micaela Ronconi**, *Alejandro Gambina***, *Rodolfo Gómez****

INTRODUCCIÓN

En este breve texto pretenderemos explorar, en un sentido provisorio, el rol que los medios masivos de comunicación comerciales (que a nuestro entender configuran un “subesfera” dentro del conjunto de la sociedad capitalista) jugaron en el proceso de recomposición de la “hegemonía dominante” en la Argentina, a posteriori de la crisis económica y del sistema político que se desarrolló en nuestro país luego de los sucesos del 19 y 20 de diciembre de 2001.

Cabría definir en este sentido qué es lo que se entiende por “recomposición de la hegemonía dominante”. Tomamos la definición de lo que Antonio Gramsci comprende por “hegemonía” en el denominado período “carcelario”, momento en el que el autor se preguntaba cómo fue posible –cuando antes parecía inminente una expansión hacia Europa de la Revolución Rusa- el surgimiento del consenso que las masas proletarias le prestaron a los fascismos –tanto italiano como alemán- como clara expresión de las clases dominantes en la sociedad capitalista de ese momento (recordemos que tanto Gramsci como Trotsky o aún Marcuse, Adorno o Benjamin caracterizaron al fascismo como un exponente “radicalizado” de la cultura y las prácticas políticas burguesas).

Deberíamos agregar que también a nuestro entender, en el sentido que Gramsci refiere a la hegemonía, esta no supone la configuración de un “falso” consenso sino más bien que dicho consenso se establece considerando ciertos elementos ideológicos pero sustentados en bases materiales concretas.¹ Lo económico, lo político, ideológico o cultural se encuentran así unidos en la configuración de una hegemonía dominante en un determinado momento de la historia.

Así un autor como Bonnet, siguiendo en parte a Laclau (aunque sin duda yendo en la aplicación del concepto de hegemonía mucho más allá de este), refiere a la configuración de una “hegemonía memenista” (que refiere en realidad a la hegemonía económica de las fracciones más concentradas del capital industrial y sobre todo del capital financiero expresadas políticamente en esa opción) en la Argentina en el período que va desde 1989 a 1999 (las dos presidencias de Carlos Menem) basándose en

* Lic. En Ciencia Política (UBA). Coordinadora académica y técnica del Centro de Estudios de la Federación Judicial Argentina (CEFJA). Investigadora de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas (FISYP) Grupo de Cultura e Ideología. Proyecto: “Recomposición hegemónica post 2001 en Argentina”. [micaelaronconi@yahoo.com.ar]

** Estudios completos en Ciencias de la Comunicación, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires (FSOC-UBA) [Tesina en proceso de elaboración]. Becario Departamento de Política y Sociedad del Centro Cultural de la Cooperación “Floreal Gorini” (CCC). Investigador de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas (FISYP) Grupo de Cultura e Ideología. Proyecto: “Recomposición hegemónica post 2001 en Argentina”. [alejandrogambina@gmail.com]

*** Mg. Docente e investigador Facultad de Ciencias Sociales (FSOC) de la UBA. Asistente Académico del Programa de Grupos de Trabajo de CLACSO. Docente Adjunto de la Facultad de Ciencias de la Educación y de la Comunicación Social (USAL). Becario del Departamento de Política y Sociedad del Centro Cultural de la Cooperación “Floreal Gorini”. [rodolfo@clacso.edu.ar]

1 Cfr. al respecto Thwaites Rey, M., “La noción gramsciana de hegemonía en el convulsionado fin de siglo. Acerca de las bases materiales del consenso”, en Logiudice, E., Ferreyra, L., Thwaites Rey, M. (Comps.), *Gramsci mirando al sur. Sobre la hegemonía en los noventa*, Buenos Aires, K&ai Editor, 1994.

la vigencia y legitimidad social del llamado Plan de Convertibilidad pergeñado por Domingo Cavallo; de modo que puede sostener que dicha hegemonía (reiteramos política, económica, cultural) se extiende más allá de 1999 hasta 2001; momento de caída del gobierno del radical Fernando de la Rúa.

De modo que en el uso que este autor hace del término, lo hegemónico se configura en lo económico (la “estabilidad” macroeconómica que generó ese plan), lo político (nuevamente la “estabilidad” que brindaba un gobierno como el justicialista basado en un liderazgo fuerte, en el marco del funcionamiento de las instituciones democráticas) o en lo cultural (la noción de “orden” y “estabilidad” que reclamaban muchos sectores de las clases dominantes en nuestro país, pero que también reclamaban gran parte de los sectores medios y bajos)²

Esto implica que para cualquier caso que estemos analizando no sería correcto decir que los medios masivos de comunicación –como “únicos” actores- dan forma a la “hegemonía”, pero sí lo sería afirmar que dichos medios masivos juegan un rol en la configuración de dicha hegemonía. Y en lo que a nosotros respecta trataremos de indagar en el vínculo posible que pudo establecerse entre el funcionamiento de estos medios y la configuración de una hegemonía en el plano ideológico-cultural (siempre plasmado por supuesto en prácticas que son bien concretas).

BREVES CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS

A tales fines, para cumplir con los objetivos delimitados en la investigación, se decidió en primer lugar, llevar adelante un proceso de relevamiento de diversos sucesos políticos y/o sociales considerados importantes para poder establecer la relación entre “la realidad” configurada por los medios masivos y como la misma puede producir un sentido “hegemónico”. El primero de los sucesos relevados tiene que ver con el fin del mencionado “Plan de Convertibilidad”. Motivo por el que se inició el relevamiento de diciembre de 2001 en diferentes medios gráficos de alcance nacional como son los diarios *La Nación*, *Clarín* y *Página 12*; intentando avanzar a la vez en la caracterización de ese período, considerando además las primeras semanas de enero de 2002 y todos los fines de semana.

En segundo lugar, y siguiendo un itinerario histórico, también se realizó un relevamiento en los mismos medios gráficos mencionados del período correspondiente a las movilizaciones piqueteras desarrolladas en el mes de junio de 2002 en la semana previa al asesinato de Kosteki y Santillán, consumado por la Policía bonaerense y que culminó con la renuncia adelantada de Eduardo Duhalde y la convocatoria a elecciones para el mes de mayo de 2003.

La caracterización lograda de los períodos considerados a partir de estos relevamientos, puede ser en cierto sentido incompleta y debiera complementarse con el relevamiento de otros tipos de soportes radial y audiovisual; pero en la medida que en nuestro país nos encontramos con un “sistema de medios” donde el “peso” de la gráfica es notablemente importante a la hora de fijar la “agenda” política y social (y donde se observa una fuerte monopolización de la producción informativa a partir del funcionamiento de multimedios, donde tal vez sea *Clarín* el más importante de ellos), podemos entonces decir que el relevamiento escogido nos brinda una serie de indicadores confiables que pueden ayudarnos a esbozar algunas hipótesis provisionarias.

Otra cuestión metodológica que quisiéramos aclarar respecto de los momentos de la historia reciente que estamos considerando (diciembre de 2001, enero 2002 y junio 2002), es que los mismos refieren a períodos donde se verifica una presencia pública importante de hechos de protesta, vinculados a diferentes movimientos sociales. La decisión fue justamente relevar esos hechos de protesta de modo de poder observar como estos eran tratados por los medios masivos de comunicación comerciales. Sin embargo, en tanto que nuestra hipótesis de funcionamiento respecto de estos medios es que los mismos funcionan como instituciones tendientes a reforzar el “control social”³, ello redundó

2 Cfr.al respecto Bonnet, A., *La hegemonía menemista*, Buenos Aires, Prometeo, 2008.

3 No nos estamos refiriendo aquí a la noción foucaultiana respecto del “control social”, o no solamente a esta, sino más bien al conjunto de investigaciones empíricas (desarrolladas en general en los Estados Unidos durante las décadas de los cuarenta y cincuenta) que le permitieron a diversos autores funcionalistas –sociólogos para ser más precisos- demostrar por qué los medios masivos de comunicación tendían con sus mensajes a reforzar las normas y valores vigentes dentro

en que entonces tomáramos la decisión de relevar no solamente los hechos de protesta social (analizando su tratamiento por parte de estos medios) sino también todo un conjunto de hechos noticiosos que suelen ubicarse en las secciones de “servicios” y/o “sociedad” dentro de la diagramación de los periódicos y que refieren en su mayoría a hechos policiales o bien delictivos; para realizar la comparación –incluso cuantitativa– entre los distintos tipos de noticias.

LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN Y LA CONFIGURACIÓN DE LA “HEGEMONÍA” DURANTE EL MENEMISMO

Gramsci definía en sus escritos “carcelarios” la noción de “hegemonía” de la clase capitalista dominante como “consenso acorazado de coerción”; esto es, como una forma de dominio en cierto modo “imperceptible” para el dominado al contar incluso con el “consenso” de este a la hora de llevar adelante un tipo de práctica, pero en la medida que a veces ésta práctica puede fallar –lo que se daría si se produce una suerte de “percepción” del carácter no fundamentado del dominio– debe incluir al mismo tiempo la posibilidad de la –en última instancia– coerción directa del dominador.

Por cierto en esa definición de “hegemonía”, estaba también Gramsci pensando en una noción de “estado” que ampliaba a “clásica” caracterización marxista de “estado” como pura represión.” El otro importante aporte de Gramsci remite entonces también a una concepción de “estado” que se considera “expande” su hegemonía más allá de lo que solía considerarse usualmente como “el estado” (aparato administrativo, empresas del estado, aparato represivo, etc.) y se extendía al ámbito de la denominada “sociedad civil”. Esto es, se desarrolla también en aquellas instituciones que parecieran ser de carácter “privado” como las escuelas, las iglesias, los clubes e instituciones culturales, o –lo que nos interesa particularmente a nuestra investigación– los medios masivos de comunicación.

Desde esta perspectiva entonces, los medios masivos de comunicación, que en la actualidad podríamos caracterizar como una suerte de “subesfera” –dentro de una “totalidad” social– de medios masivos comerciales (por su articulación tanto con una parte importante del poder político-estatal como con otras poderosas empresas de producción industrial); podrían considerarse como un entramado institucional ligado a ese “estado ampliado” que definía Gramsci (o en un sentido diferente también Althusser) y por lo tanto constructores de hegemonía.

Como mencionamos previamente, en la Argentina de los años noventa –esto es en la Argentina todavía “menemista”– la construcción hegemónica se encontró ligada a una idea de “orden” (económico, financiero, político, cultural, etc.) sustentada en el llamado “Plan de convertibilidad”⁴.

Dicho “plan” (en el discurso un plan de disciplina fiscal y financiera) tuvo su correlato con un proceso de privatizaciones que llevó adelante el gobierno justicialista de Carlos Menem y con un fuerte proceso de concentración tanto del ingreso como de la propiedad productiva, también consolidado durante ese gobierno. Lo que tuvo su expresión en el campo de los medios masivos de comunicación, con las privatizaciones de todos los medios en manos del estado como así en la suspensión de la cláusula –presente aún en una ley sancionada durante la dictadura militar que fue de 1976 a 1983–

de sus “grupos –primarios– de pertenencia” y permitiendo un proceso de “institucionalización” tendiente a promover la resolución pacífica –e institucionalizada– de los diferentes conflictos sociales. El ejemplo “clásico” de este tipo de posturas en relación con los medios masivos de comunicación resulta de la investigación que hacia mediados de los años cuarenta realizaron Lazarsfeld, Berelson y Gaudet respecto del uso de los medios masivos por parte de los partidos Demócrata y Republicano en periodo de elecciones en el condado de Erie; donde –concluían los investigadores– el “efecto” principal que producían los medios era el de “reforzamiento” de las normas y valores vigentes al interior de los grupos “primarios” (grupos familiares, de amigos, religiosos, etc.). Esta conclusión estaba en perfecta sintonía con las investigaciones realizadas también en los Estados Unidos allá por las décadas del treinta y cuarenta, por sociólogos laboristas como Elton Mayo y Jacob Moreno. Como luego Lazarsfeld, Berelson y Gaudet; Mayo y Moreno observaron en el ámbito del trabajo que la existencia de “grupos de amistad” entre los trabajadores tendía a fomentar el intercambio amistoso y por ende la “buena” (institucionalizada, sindicalizada) resolución de conflictos al interior de las fábricas. Cfr. al respecto Lazarsfeld, P.; Berelson, B. y Gaudet, H., *El pueblo elige. Estudio del proceso de formación del voto durante una campaña presidencial*, Buenos Aires, Ediciones 3, 1962; también Cambiasso, N. y Grieco Y Bavio, A., *Días Felices. Los usos del orden: de la Escuela de Chicago al Funcionalismo*, Buenos Aires, Eudeba, 1999, especialmente caps. 4 y 6.

4 Cfr. al respecto Bonnet, A., *La hegemonía menemista*, Buenos Aires, Prometeo, 2008.

que no permitía la posibilidad de constitución de empresas multimediáticas en Argentina (aunque las mismas funcionaran de “hecho”).

Cabe agregar que el diseño y la configuración de la “convertibilidad” implicaron además un supuesto escalonamiento del proceso de pagos de la llamada “deuda externa” que concretamente implicaron un aumento importante del volumen de dicha deuda; pero que sin embargo era el punto nodal en el que descansaba dicha “convertibilidad”.

De modo que ese “plan” –como nuevo “patrón” de acumulación en el país– supuso al mismo tiempo una “legitimación” de un “clima cultural” donde era impensable cualquier crítica al proceso de privatizaciones y de reforma –y desguace– del estado implementado por el gobierno.

En ese “primer momento” (del primer gobierno de Menem, que fue desde 1989 a 1994), los “nuevos” multimedios masivos de comunicación comercial, acompañaron el proceso implementado por ese gobierno justicialista, aún en la existencia de ciertas “voces” críticas al interior del “subesfera” mediático (como ser las de aquellas que podían encontrarse en el diario *Página 12*).

La crítica desde algunos medios masivos comerciales comenzó a provenir, iniciado ya el segundo gobierno de Menem (1995-1999), focalizando en el modo en que se realizaron las privatizaciones como así en las características “prebendarias” y/o “corruptas” en las que tuvo lugar la implementación del proceso, pero no en el proceso “en sí” (justamente allí es donde se puede observar concretamente el accionar de la “hegemonía”).

Esto implica que las “voces críticas” provenientes del “campo periodístico” profesional⁵ inserto en estos medios masivos de comunicación comercial en general –con algunas salvedades- no cuestionaban al “modelo” en sí, sino al “modo” en el que dicho modelo fue implementado por el gobierno menemista. Por eso es que la paulatina “ruptura” del consenso respecto de las políticas neoliberales llevadas adelante por el menemismo no implicaron necesariamente una crítica respecto del Plan de Convertibilidad en sí.

Y ello quedó claro con la llegada al gobierno de la denominada “Alianza”, la efímera coalición centrista conformada por la Unión Cívica Radical (UCR) y el Frente para un País Solidario (FREPASO); que llevó a la presidencia al radical Fernando de la Rúa. Ya que el planteo político desarrollado por este gobierno fue el de sostener la “convertibilidad” pero “sin corrupción”.

El resultado fue la continuidad de las políticas “aliancistas” con las neoliberales llevadas adelante antes por el gobierno de Menem, que no lograron reducir ni el enorme “ejército de desocupados” (el índice se encontraba en el orden del 12% para el desempleo estructural, pudiendo ascender a un 30% si se contaba también el desempleo temporario y el llamado empleo precario) ni la enorme desigualdad social producida al interior de la masa poblacional empleada.

Por último pudo observarse finalmente, promediando el gobierno de De la Rúa, la escalada de la protesta sindical y a posteriori las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, que provocaron la caída de dicho gobierno y ella el fin del “consenso” logrado en torno a las políticas neoliberales.

Discursivamente hablando, los gobiernos posteriores (tanto el de Rodríguez Saá como el de Duhalde) tuvieron que utilizar algún otro tipo de retórica (por ejemplo en el caso de Rodríguez Saá el plantear la entrada en el “default” y el “no pago” de la deuda externa; en el caso de Duhalde la confrontación entre un discurso “productivista” enfrentado a uno “neoliberal” basado en los “sectores” financieros) que buscara intentar recuperar la pérdida de legitimidad que desde la crisis de 2001 se instaló en torno al “sistema” político como en torno a las políticas económicas neoliberales vigentes hasta entonces.

5 Que abarcaba un “amplio” espectro ideológico, ya que iba desde las manifestaciones de un periodista ligado a la derecha argentina e incluso a sectores golpistas como Mariano Grondona, pasando por las de periodistas del Grupo Clarín –el multimedios más poderoso del país- como Magdalena Ruiz Guiñazú o Eduardo Van der Kooy, de las del periodista del diario conservador –representante de los intereses de la oligarquía agropecuaria argentina- *La Nación* Joaquín Morales Solá, de Alfredo Leuco o bien del grupo de periodistas ligados al diario de centroizquierda *Página 12* como Jorge Lanata, Horacio Verbitsky, Martín Caparrós, Román Lejtman, Raúl Kollmann, José María Pasquini Durán o Ernesto Tenenbaum; muchos de ellos hoy parte también del “Grupo Clarín”.

En la actualidad, muchos ven al gobierno de Eduardo Duhalde como una suerte de “piloto de tormentas” que permitió “encauzar” al país tras la crisis que se prolongó desde el 19 y el 20 de diciembre de 2001 hasta mediados de 2002 y que culminó con el proceso electoral de mayo de 2003 que coronó a Néstor Kirchner como presidente electo de la Argentina.

Es nuestra intención tratar de analizar cuál fue el rol que jugaron en todo este proceso los medios masivos de comunicación comerciales, sobre todo de aquellos que por su importante estructura productiva poseen fuertes ligazones con el sistema político.

EL 19 Y EL 20 DE DICIEMBRE DE 2001 EN ARGENTINA Y LA “CONSTRUCCIÓN” DE LAS “NOTICIAS DE LA CRISIS” POR PARTE DE LA PRENSA GRÁFICA

Presupuestos teóricos

Hipotéticamente se están tomando una serie de presupuestos que funcionan además en términos de marco teórico, para el análisis de los medios gráficos mencionados.

a) En primer lugar se está suponiendo que si bien la hegemonía tiene un sustento material, el mismo se articula con una serie de procesos simbólicos construidos en términos del accionar de un “sentido común” discursivo, presente dentro del “sistema” mediático comercial en Argentina.

b) En segundo lugar, que este “sentido común” práctico-discursivo, operante dentro del mencionado “sistema de medios” implica que esos discursos presentes en los medios se despliegan en términos de existencia de un “control social”. Esto es, que el discurso prevaleciente dentro de los medios masivos comerciales busca siempre “institucionalizar”, “identificar” a los diferentes actores, de modo de promover la “funcionalización” de las acciones dentro del marco democrático institucional establecido.

Diario La Nación

Análisis a partir del relevamiento noticioso realizado

En los días previos a los sucesos del 19 y 20 de diciembre La Nación (LN) identifica la existencia de una crisis. La cual es caracterizada como una crisis económica, que sin embargo es simultáneamente una crisis “política”. Una vez ocurridos los hechos del 19 de diciembre, el diario señala que estos fueron actos “irracionales” y de “violencia organizada”. En las crónicas se relatan “ataques a la propiedad privada y comercios” y se reclama protección jurídica y social. (20/12/01) En relación al gobierno de la Alianza, destaca la falta de autoridad y de liderazgo político para enfrentar lo sucedido. (21/12/01)

“Caos”, “guerra”, “barbarie”, “vandalismo”, “saqueos” (22/12/01). Para este medio el desafío de la clase política (golpeada y desprestigiada) es reconstruir la autoridad perdida a partir de la búsqueda de consensos así como del diseño de políticas de Estado al margen de los intereses partidarios. Ya consumada la renuncia de De La Rúa, el diario identifica un “vacío de poder” donde la peor opción es una convocatoria inmediata a elecciones. Se debe construir un gobierno de “unidad nacional”, “fuerte”, que ordene el país y de solución a los problemas esenciales. La idea de “que se vayan todos” es imposible e ingenua, la salida debe ser dentro de las instituciones existentes. (23/12/01) Mariano Grondona manifiesta que “el potro argentino es magníficamente rebelde. Sólo el domador que una la seducción de la caricia a la firmeza del pulso podrá calmarlo”. (30/12/01)

Ya con la asunción de Duhalde, que en su primer discurso señala que “este gobierno que empieza hoy se propone alcanzar tres objetivos básicos: reconstruir la autoridad política e institucional, garantizar la paz social y sentar las bases para el cambio del modelo económico y social” (02/01/02) el diario LN manifiesta que “ahora la Plaza de Mayo y el Congreso estuvieron custodiados con un despliegue de fuerzas policiales y de seguridad que, si algo denotó para el asombro, es por qué no se habían hecho las cosas de la misma manera cuando la violencia organizada se abrió paso en la calle, primero contra el gobierno de De la Rúa y después contra el de Rodríguez Saá”.

La Nación esgrime la necesidad de “frenar la protesta social” para conseguir la “paz social”. La protesta social es asociada a la “irracionalidad” y al “vandalismo organizado” (Caos, guerra, barbarie, vandalismo descontrol y saqueos). Actos ilícitos y “orquestrados”, algunas veces por la izquierda y sus partidos, y en otras por el PJ.

Diario Clarín

Características operativas del discurso de *Clarín*

A lo largo del relevamiento realizado –que, como mencionamos, incluye tanto los momentos previos como posteriores al 19 y 20 de diciembre de 2001, las primeras semanas de 2002 y los fines de semana de enero de 2002- pudo observarse, en términos de un análisis empírico interpretativo realizado en las fechas indicadas:

- a. que en *Clarín* los hechos de protesta se construyen en tanto que hechos de “violencia” o bien “delictivos” (saqueos); con el consecuente llamamiento al “orden” que de ello se desprende;
- b. que en las fechas previas al suceso encontramos una gran cantidad de informaciones, tanto en tapa como en el cuerpo del diario, referidas a los hechos que hemos denominado de “control social” (robos, secuestros, hechos delictivos y otros que suponen una “desviación” de la norma social establecida);
- c. que en las fechas donde se producen los sucesos (19 y 20 de diciembre de 2001, 26 de junio de 2002) puede verse un aumento de las noticias referentes a hechos de “protesta”, pero que las mismas también se combinan –en menor grado en esas fechas- con las noticias denominadas de “control social”;
- d. que en el diario *Clarín* la construcción noticiosa desde donde se promueve un llamamiento al “orden” implica –en mayor medida- el recurso básico a la “objetividad” periodística, a partir del uso de “crónicas” (antes que la opinión vertida en un “editorial”, aunque esto también se encuentra en menor medida).

Diario Página 12

En *Página 12* se reivindica la insurrección popular y se condena la represión. Bonasso habla incluso de “gesta popular” y narra los hechos como un participante más. Pasquini Duran habla de una movilización espontánea y masiva que “por fin” salió a intentar terminar con la crisis social y económica. De todas formas, es éste último quien deja planteadas algunas cuestiones que van más allá de la emergencia de la “muchedumbre” en la calle. Pasquini Duran advierte que “tienen que surgir nuevas fuerzas políticas”, que “el destino colectivo no puede ser dejado en manos de un puñado de políticos profesionales” y que se necesitan más política y más definiciones ideológicas.

Página 12 no está tan preocupado por la cuestión de la legitimidad, sino en dilucidar el significado del estallido social. Remarca el carácter burocrático de la salida aprobada por el PJ. Habla de que hay encuestas que afirman que la gente quiere que haya elecciones (22/12/01). Pero llama la atención en que las elecciones con lemas agudizarían el problema de la legitimidad (23/12/01). Hay en Verbitsky una cierta expectativa con Rodríguez Saá que no existirá con Duhalde: “El presidente provisional Adolfo Rodríguez Saa (...) promete medidas de austeridad que, por una vez, no recaerían en los más postergados” (23/12/01).

En *Página 12* empiezan a tener una presencia importante las fuerzas de centroizquierda e izquierda. En este diario aparece el entonces diputado de “Autodeterminación y Libertad” Luis Zamora tocando un tema espinoso: “Los peronistas usurpan un poder por el que no pelearon” (*Página 12* 24/12/01).

En *Página 12* predominan las dudas y las advertencias para un lado y para el otro. Por un lado, en relación a una devaluación que puede seguir maltratando a los trabajadores, por otro, el peligro del copamiento de la calle y la represión (Verbitsky, Kollmann). Pasquini Duran va más allá y pone el eje en las posibilidades reales de lograr un cambio político, social y económico que deberá estar sustentado en otras coaliciones sociales y debe ir en contra de las minorías privilegiadas. Duhalde no expresa esa posibilidad e incluso para el autor está en duda que pueda encauzar la crisis.

Breve análisis comparativo de la construcción noticiosa y de contenido en el discurso de Clarín, La Nación y Página 12

En términos comparativos, puede observarse que en términos del modo de construcción de la noticia:

- Tanto en *La Nación* como en *Clarín* nos encontramos –frente a los sucesos de diciembre de 2001, pero también frente a la “masacre de Puente Pueyrredón”- con un llamamiento de “regreso” al “orden”, pero
 - En *Clarín* este se construye a partir básicamente de “crónicas”.
 - En *La Nación* se observa un peso mayor en las “editoriales”.
- Tanto en *La Nación* como en *Clarín* como en *Página 12* se observa un llamamiento a mantener la “institucionalidad democrática”, sin embargo.
 - Nuevamente en *Clarín* y *La Nación* esto se construye a partir de la postulación de un “orden democrático” (institucional) opuesto a una “violencia” (para-institucional).
 - En *Página 12* –a pesar de la existencia de cierta ambigüedad al respecto- el “orden democrático” (institucional) se construye con un carácter más inclusivo de la “disidencia”.
- En cualquiera de los tres casos, sin embargo, a pesar de las diferencias, se sostiene la defensa del ordenamiento democrático-formal constituido.
 - frente a la transgresión al mismo que supuso la dictadura, en *Página 12*.
 - frente a la violencia “de todos los bandos”, en *Clarín* y *La Nación*.

CONCLUSIONES PROVISORIAS

En este breve artículo, en el que por un lado esbozamos nuestra perspectiva teórica de análisis respecto de la función que cumplieron –y cumplen– los medios masivos comerciales en vínculo con el “sistema” político (constituido por los partidos políticos que ocupan puestos ejecutivos de gobierno y en algunos casos legislativos; como así por el conjunto de “aparatos” y dependencias que dan forma al estado capitalista) y por el otro resumimos las actividades de relevamiento realizadas sobre los sucesos indicados de diciembre de 2001, enero de 2002 y junio de 2002; podemos decir que encontramos –partiendo de las hipótesis antes mencionadas– motivos y elementos empíricos como para sostener que en estos momentos históricos relevados puede observarse que los medios masivos de comunicación comerciales (sobre todo los considerados):

5. Operaron como instrumentos de “control social” tendientes a reconstituir el discurso hegemónico bajo el contenido de cierta “ideología” de la clase dominante (la de la “convertibilidad” durante los noventa; la de la “producción” luego de diciembre del 2001 y la de la “normalización institucional” y la de la “seguridad”). Esto puede verse en los tres medios en:

a. la defensa de cierta institucionalidad “democrático-formal” (aún en un diario como *Página 12*, donde podría decirse que opera dicho discurso de la llamada “transición democrática”);

b. en la caracterización de los “hechos de protesta” como hechos que bordean la “legalidad” y que pueden ser tildados de “ilegales” y por lo tanto condenados (sobre todo en *Clarín* y *La Nación*, no tanto en *Página 12*);

c. en la presencia, compensatoria de los hechos de protesta, de una gran cantidad de sucesos “delictivos” durante estos momentos históricos (también aquí tenemos que hacer la salvedad de que esto es mucho más importante en *Clarín* y *La Nación* que en *Página 12*);

4. Sin embargo, esta caracterización no es novedosa y puede observarse en diferentes relevamientos y análisis realizados al respecto. De modo tal que nuestra propuesta se dirige aquí a pensar el funcionamiento de los medios, como instrumentos de “control social”, pero en un sentido más “estructural”, esto es, nos lleva a preguntarnos por su funcionamiento más allá de la coyuntura política que estamos analizando puntualmente.

Nos basamos en esto a partir de:

a. una investigación realizada a lo largo de todo 2007 que complementa el relevamiento que aquí hemos realizado;

b. un análisis comparativo del funcionamiento de los medios masivos comerciales en su interrelación con el funcionamiento del “sistema” político y la economía (vinculados dentro de una “totalidad” capitalista).

Nuestra interpretación sostiene, considerando la perspectiva de Miquel Rodrigo Alsina, que los medios masivos de comunicación comerciales funcionan como una suerte de “subesfera” vinculada y dependiente de lo “político” y lo “económico”. En primer lugar porque como puede observarse empíricamente en Argentina pero también en otros países latinoamericanos y europeos, la conformación de grupos multimediales implicó que las grandes empresas monopólicas mediáticas hayan expandido notablemente sus negocios hacia otras ramas productivas (y a la inversa que haya capitales inversores en estos grupos provenientes de otras ramas de la producción). En el segundo mencionado porque es inevitable la relación con el “sistema” político en la medida que el propietario legal del canal (por ejemplo el “aire”) a través del que pueden transmitir su señal los medios de comunicación es precisamente el estado nacional; lo que más allá de la posición política de un cierto gobierno de turno implica que no pueden obviarse los vínculos políticos (en el estado, en el parlamento, etc.).

Desde esta posición consideramos que si bien los medios pueden representar decir distintas tendencias y perspectivas ideológicas, lo cierto es que:

- se ubican en general dentro de una suerte de “ideología intermedia” (homologables a lo relevado por algunos sociólogos funcionalistas en una sociedad norteamericana autoconsiderada una “mesocracia”; no pueden ser ni “extremadamente de derecha” ni “extremadamente de izquierda”) más allá de las variantes particulares, traccionados por una noción histórica de “objetividad periodística”;

- lo que implica que esta “subesfera” de medios masivos comerciales tenga una gran incidencia en la configuración ideológica en justamente los sectores medios de la población (cuya balanza oscila entre un “conservadurismo políticamente correcto” y un “progresismo moderado”);

- en tanto que empresas comerciales ligadas al mercado, por lo general –salvo en el caso de los medios “públicos”– sus críticas se despliegan en gran medida hacia el “sistema” político antes que al económico (con la excepción que se desarrolle una suerte de “guerra comercial”);

- que en esta mencionada tendencia, y en eso incluye al “mainstream” del campo periodístico, suele ubicarse “gradualmente” hacia la izquierda o hacia la derecha de los gobiernos, según la orientación político-ideológica de estos últimos (gradualmente a la “derecha” de Alfonsín, a la “izquierda” de Menem, a la “derecha” de De la Rúa, en el “centro político” –con algunas salvedades en este caso tanto por derecha como por izquierda- de Duhalde⁶ y a la “derecha” de Kirchner);

- que por último esta “ubicación” (“topografía” como sostendrían algunos autores estructuralistas) posee límites establecidos por el “sistema” político (en el sentido de nunca subvertir la legalidad burguesa, lo que puede constatar en el mencionado análisis de los sucesos de diciembre de 2001 y el posterior abroquelamiento de los medios comerciales en la defensa del conjunto de ese mismo “sistema político”) y por la “estructura” económica (en el sentido de que difícilmente, y estamos hablando de los sistemas de medios comerciales básicamente presentes en las sociedades capitalistas contemporáneas, estos medios puedan llamar a un alzamiento “revolucionario”; a lo más podrán difundir notorios hechos de protesta o bien denunciar hechos de violencia parapolicial o paraestatal).

⁶ Este tal vez sea el caso más interesante a ser estudiado, que motivó también nuestro interés al pensar la cuestión de la “recomposición hegemónica”. Lo que pareciera ser claro es que el subsistema de medios masivos comerciales jugó un rol en el proceso de recomposición del “subsistema” político durante el período duhaldista y a posteriori de este.

LOS SENTIDOS DE LA RECOMPOSICIÓN

*Carolina Allievi, Carolina Molió * y Adrián Pulleiro ***

INTRODUCCIÓN

En este trabajo nos proponemos dar cuenta de los principales significados (o más bien, los sentidos) que en medio de la crisis Argentina de 2001-2003 los actores sociales y políticos más relevantes fueron generando para imponer sus lecturas y sus posicionamientos con el objetivo de orientar determinada salida económica y política al proceso histórico en cuestión.

El análisis se centra, aunque no exclusivamente, en los contenidos de los tres diarios de tirada nacional con más ejemplares vendidos: *Clarín*, *La Nación* y *Página 12*. A partir de esos materiales nos propusimos indagar específicamente el modo en que actuaron en aquel escenario las entidades empresarias, los partidos políticos, los movimientos sociales, las centrales sindicales, los mismos diarios como actores culturales de envergadura, los intelectuales y la Iglesia. ¿Cómo leyeron la insurrección del 20 de diciembre y la caída del gobierno de la Alianza? ¿Cómo reaccionaron ante la profundización de la crisis de legitimidad que atravesaron las instituciones de dominación política? ¿Qué relatos construyeron para orientar la salida de la crisis?

En ese marco, con este análisis exploratorio pretendemos dar cuenta de la conformación de un clima cultural que acompañó y actuó como fundamento de las tácticas y estrategias de los actores que orientaron el proceso de recomposición hegemónica que terminó imponiéndose en el marco de la crisis. Es decir, asumimos que la conformación de ese clima cultural por parte de determinados actores sociales y políticos, que expresan intereses y visiones del mundo particulares (de clase y de fracciones de clase), actuó como componente necesario de la reconstrucción hegemónica y, a su vez, como consecuencia de la crisis económica, social y política en curso. En otras palabras nos referimos a un tipo de producción cultural que abarcó no sólo al plano estrictamente simbólico (el de las explicaciones, los programas, las teorías, los conceptos y nociones puestas en juego), sino también el de la acción política, social y económica concreta, desplegada desde el Estado y las distintas organizaciones de la sociedad civil, en una situación específica dada por un momento particular de la lucha de clases.

Finalmente, es útil dejar planteadas algunas precisiones conceptuales que actúan como punto de referencia para nuestro análisis y posibles conclusiones. En primer lugar, entendemos a la producción cultural como un proceso productivo particular que supone la generación, la circulación y la recepción de formas simbólicas; un proceso que constituye sistemas significantes específicos (las artes, las ciencias, las ideologías, etc.), al tiempo que conforma un sistema signifiante reconocible en todas las prácticas sociales. De este modo, trabajamos con un enfoque que considera a la producción de formas significantes (en nuestro caso particular nociones, ideas, imágenes) siempre en función de un orden social global, pero que a su vez concibe a las prácticas significantes como constitutivas de dicho orden (Williams; 1981: 12-13). Del mismo modo, en las sociedades de clase esa cultura debe ser conside-

* Carolina Allievi y Carolina Molió son estudiantes avanzadas de Ciencias de la Comunicación (UBA)

** Licenciado en Ciencias de la Comunicación, docente de Teorías y Prácticas de la Comunicación II, coordinador del Equipo de Cultura e Ideología (Fisyp). Becario de CONICET.

rada como un espacio conflictivo en el que se puede reconocer un sistema de prácticas, significados y valores que se impone como dominante y que opera permanentemente tratando de incorporar y/o neutralizar los elementos que pueden emerger con un potencial alternativo u oposicional (Williams; 2000: 130). Tenemos así productos significantes que poseen su especificidad, pero que sólo son comprensibles cabalmente en la medida en que se los concibe como parte de las disputas y los mecanismos que hacen a la construcción y reconstrucción de la hegemonía (García Canclini: 73). De esta manera, la cultura siempre es un “sistema signifiante realizado” (Williams; 1981: 193), producido a partir de condiciones más o menos específicas, pero atravesado por las desigualdades, las relaciones de poder y las determinaciones sociales, por lo que puede ser concebida como un “instrumento para la reproducción social y la lucha por la hegemonía” (García Canclini: 77).

En segundo lugar, el ejercicio de la hegemonía por parte de la clase dominante en las sociedades capitalistas modernas supone diversos mecanismos y niveles de acción. Pero, como aquí nos preocupa lo ocurrido en un período histórico caracterizado por una profunda crisis económica y de legitimidad, en este trabajo hacemos particular hincapié en la manera en que las significaciones puestas en juego por los distintos agentes sociales y políticos aportan –o no, según el caso- a organizar a las distintas fracciones de la burguesía en torno a un bloque de poder y a desarticular a las clases subalternas, tarea en la que la mediación del Estado asume un rol crucial (Bonnet: 275). En este sentido, daremos cuenta de los principales fenómenos ideológicos que son funcionales a ese proceso, entendiendo por éstos a los significados que funcionan legitimando o reforzando relaciones de dominación a partir de operaciones fundamentales como la universalización, la naturalización o la unificación (Thompson; 1998).

1. EL CUESTIONAMIENTO A “LOS 90”

A la hora de intervenir en una crisis de magnitud como la que nos ocupa, y en el momento de definir lecturas y posibles salidas una operación fundamental pasará por definir un pasado con el cual contrastar el futuro que se propone. En este caso veremos cómo desde los distintos actores –incluso muchos de los cuales tuvieron una participación activa- se va construyendo una idea de la década del '90 que operará como “lo que no hay que hacer”. De algún modo esto hace a las repercusiones del movimiento de protesta que se potenció a partir de la insurrección del 20 de diciembre de 2001.

Veamos lo que ocurre, en este sentido, entre los intelectuales que componen la fracción liberal del campo intelectual.

En una nota publicada en La Nación el 22 de diciembre de 2001, Tomás Eloy Martínez asegura:

Cuando se lee que Menem asoma en las encuestas como uno de los candidatos para suceder a De la Rúa, se hace difícil creer que los argentinos tengan una memoria tan flaca. ¿Qué podría vender Menem para salvar a la patria si ya lo ha vendido todo, salvo a sí mismo? Ninguno de los protagonistas del pasado inmediato parece adecuado para rescatar a un país que se hunde.

Luego de calificar a Domingo Cavallo como un “alquimista” que había transformado los pesos argentinos en pesos virtuales, el escritor Abel Posse –a quien no podemos adjudicar una trayectoria demasiado progresista- sostenía en febrero de 2002 que:

Nadie veía en aquellos tiempos de fiesta que detrás de las privatizaciones se privatizaban las ganancias y se socializaban las pérdidas: el país más armónico y culturizado de nuestra América terminaría por tener la mitad de su escasa población bajo el nivel de pobreza (LN 23/2/02).

El filósofo y columnista de La Nación, Santiago Kovladoff, extiende la mirada crítica un poco más para referirse al período democrático. En una nota publicada en ese diario el 22 de febrero de 2002, y titulada sutilmente “Nunca Más”, Kovladoff asegura que:

En estas últimas dos décadas, podría argumentarse, no se produjeron, como en los años del Proceso, treinta mil desapariciones. Es cierto. Sólo hay catorce millones de personas arrasadas por la marginación, el desempleo y la miseria. No puede decirse que estén muertas. Sus vidas no han perdido más que sentido...

Luego, nuestro autor pone el ojo en la dirigencia política para añadir:

Los partidos políticos, sin los cuales ciertamente no podremos sobrevivir en democracia, volvieron para seguir avasallando a la República. La rifaron en aras de intereses a los que llamar mezquinos es poco pues son, en sentido estricto, criminales y ameritan que se los califique como manifestaciones de traición a la patria.

Por su parte, Osvaldo Guariglia, profesor plenario de ética de la Universidad de Buenos Aires e investigador superior del Conicet, no escatima palabras para definir el momento del capitalismo:

si las regulaciones que deben asegurar el desempeño honesto del sistema financiero o de las compañías permite que sus directivos conduzcan a la quiebra al primero mediante la ejecución de enormes transferencias de fondos a bancos *offshore* o a sus casas matrices (...), entonces el nuevo libertarismo (mal llamado neoliberalismo) ha definitivamente triunfado, porque el capitalismo ha dejado de ser la combinación indisoluble de la economía de mercado con las instituciones de la democracia para convertirse en la tiranía arbitraria de las elites de financistas y ejecutivos que, encaramadas en los sitios más privilegiados para acumular información y capacidad de decisión, la usan cínicamente en propio provecho (LN 6/2/02).

En la misma dirección, el escritor Marcos Aguinis le pone nombre y apellido a la crítica y simboliza una etapa a la que según su opinión no hay que retornar:

Es impresionante que en menos de dos décadas casi toda América latina consiguió erradicar las dictaduras y establecer democracias. Pero en ese mismo tiempo fue zangoloteada por latrocinios de espanto, encabezadas por los mismos presidentes, como fue el caso de Carlos Andrés Pérez en Venezuela, Salinas de Gortari en México, Collor de Mello en Brasil, Alberto Fujimori en Perú y Carlos Menem en la Argentina (LN 27/1).

En cuanto a los medios de comunicación masivos comerciales, un rápido recorrido por los diarios analizados nos permite ilustrar la manera en que se imponen lecturas críticas respecto del “modelo” neoliberal. En el editorial del 19/12/01 *Clarín* llama la atención sobre los problemas que atraviesan las empresas ferroviarias y señala el fracaso del modelo de privatizaciones de ese sector. La misma temática y la misma posición se repite diez días después. Por su parte, al analizar la movilización de la noche del 19 de diciembre y los saqueos, el editorialista de ese diario, Eduardo van der Kooy pone el foco en dos cuestiones. Por un lado en lo que parece ser “el derrumbe del principio de autoridad”. Y por otro, en un gobierno que “debe entender que su política de ajuste permanente parece haber encontrado un límite en la sociedad”.

En el mismo diario, Ernesto Semán es más contundente. Crítica explícitamente a la convertibilidad y al modelo político que propone gobernar sin esfuerzos y sin apelar al electorado. Asegura que “la Alianza subió con el mismo imaginario de los noventa respecto a la economía y a la política: convertibilidad y “modelo prolijo”” (Clarín 21/12/01). Tres días después, el propio Semán publicará una nota en la que relaciona directamente a las víctimas de la represión del 20 de diciembre, a los que define como “jóvenes víctimas del modelo”. La mirada crítica acerca de las políticas neoliberales también se puede encontrar en otras notas publicadas el día 22 de diciembre, en donde el modelo neoliberal es presentado como menos poder del Estado, más desocupación y más corrupción¹. También se trabaja la idea del “modelo” impuesto por Menem y la Alianza como culpables del estallido y responsables de las muertes en la represión (Clarín 24/12/01).

Desde *Página 12*, el 20 de diciembre de 2001, Horacio Verbitsky, refuerza la idea de que no hay más margen para las políticas de ajuste. Asegura que “el presupuesto reclamado por el FMI para autorizar un desembolso no tiene la menor posibilidad de aprobación legislativa”. Luis Bruschtein resalta que Menem “dejó tierra arrasada”.

Es en *La Nación* donde encontramos una posición distinta. No hay una crítica frontal, hay un intento por diferenciar la política económica y los principios “liberal-democráticos” de la manera en que fueron aplicados. En sus dos editoriales del 21 de diciembre, por ejemplo, intenta salvar al ex ministro Cavallo (se habla de una crisis económica que “pese a los esfuerzos del ministro Domingo Cavallo no pudo ser revertida”), al tiempo que se centran las responsabilidades en los “políticos” por su incapacidad para

1 <http://edant.clarin.com/diario/2001/12/22/p-330284.htm>

llevar a cabo acuerdos. Así la crítica a “los 90” pasará ya no por ciertos rasgos de un modelo económico social que supone una variante histórica de la sociedad capitalista, producto de una correlación de fuerzas determinada, sino por los rasgos de un grupo social, es decir de una fracción de la clase dominante que ejerció la conducción del Estado en aquel momento. En este punto, encontramos una variante de la operación metonímica que de por sí implica la creación de la expresión “los ‘90”. Una operación que supone reemplazar el todo por la parte, o sea para no discutir el sistema (en este caso, ni siquiera un modelo económico) se pone el foco en una parte: en este caso la dirigencia política, a la que se caracteriza como corrupta e incapaz. No obstante, se aporta de algún modo a construir un pasado al que no hay que volver y en el que se van señalando los problemas que habrá que abordar.

Entre las fuerzas políticas el panorama es otro. Dentro del justicialismo, al calor del estallido social el duhaldismo ratificaba su plan económico, aunque se quedaba afuera del acuerdo que llevó a Rodríguez Saá al Gobierno. Por un lado, plantea la necesidad de que el plan consiga el aval del FMI, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y de la Unión Europea. Postulaba la pesificación de la economía, la salida de la convertibilidad y la reestructuración de la deuda externa con una quita del 50 %. Hay allí un acuerdo con lo que sostienen los sectores críticos de la UCR, encabezados por el por entonces senador Raúl Alfonsín, que venían cuestionando la política de ajuste sistemático del Gobierno (LN 21/12/01)

Por aquellos días el Encuentro de Economistas Argentinos, vinculado al PJ y a entidades empresarias presentó un plan alternativo, que consistía básicamente en promover “una salida ordenada de la convertibilidad”. Según su diagnóstico, la actual crisis no se soluciona “con más convertibilidad”, como dice Domingo Cavallo, sino que es producto de ella. Hablan de devaluación y de recuperar competitividad (Clarín 19/12/01).

Si hacemos un salto en el tiempo nos encontraremos con el lugar que este tópico ha ocupado en el discurso kirchnerista. Se ha dicho y escrito bastante sobre el tema, pero vale la pena advertir que es un elemento que tiene un peso importante desde el recorrido previo a las elecciones de 2003. Por aquellos días Néstor Kirchner no dudaba en decir: “los argentinos tendríamos que mirarnos a los ojos y preguntarnos cómo puede haber un 18, un 17 o un 20 por ciento de votos para los que le robaron a la Argentina”. Y subía la apuesta, con un discurso que no se queda en el tema de la corrupción o el despilfarro: “Menem propone un país aliado al capital concentrado, de relaciones carnales con Estados Unidos” (P12 13/4/02). Es ilustrativo, también cómo ante la necesidad de explicar su relación con el Gobierno saliente y con Duhalde en particular, a quien criticó en sus inicios, Kirchner habla de un gobierno de “supervivencia nacional”, y luego rescata la política llevada adelante por el ministro de Salud, Ginés González García porque con la política de genéricos “les ganó a los lobbies de los laboratorios, y ningún gobierno se animó antes” (P12 16/4/03). Por aquellos días, el ministro de Economía, Roberto Lavagna, se suma al balance crítico de las políticas aplicadas por los gobiernos de Menem y de De la Rúa en la década anterior. Según el por entonces ministro, la convertibilidad es “un caso de estudio para no repetirlo”, “fue un chaleco de fuerza” para la economía argentina. También advertía que si bien hubo “un primer momento de euforia”, lo que dejó esa política fue “la destrucción de la industria y los puestos de trabajo” (P12 20/4/03).

Si pasamos al ámbito empresarial, veremos cómo es la Unión Industrial Argentina la entidad que despliega una política más clara en este aspecto. Esto no debería llamar la atención en la medida en que desde esa organización surgen las primeras fisuras que la gran burguesía había empezado a tener respecto de la continuidad de la convertibilidad. En el año 2000, la UIA había impulsado la creación del Grupo Productivo junto con la Cámara de la Construcción (CAC) y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), desde donde alentado la devaluación y la orientación de la economía hacia el mercado interno. El plan, que contaba con el apoyo de los bancos nacionales, consistía en la pesificación, la devaluación, la reestructuración de la deuda y la aplicación de retenciones a ciertas exportaciones. Sin embargo, por aquellos días de diciembre un sector de peso del empresariado local mantenía una posición más bien precavida y no se decretaba tan abiertamente el fin de la convertibilidad, la medida económica por excelencia que había estructurado la hegemonía neoliberal en la sociedad argentina. Es que para un sector de las elites dirigentes de la clase dominante –y más aún entre quienes ocupan

posiciones dominantes-, cualquier propuesta que incluya una orientación más o menos abarcativa del Estado en la economía merece un llamado de alerta. Por dar un caso, mientras que el 18 de diciembre industriales y trabajadores (CGT) se movilizaron a la Cancillería para reclamar por la defensa de la industria nacional (Clarín 19/12/01), unos días después el titular de la CAC, Jorge Di Fiori, advertía que el Gobierno (por el de Rodríguez Saá) “da más importancia a los que protestaron el 20 de diciembre que la mayoría silenciosa que votó el 14 de octubre o salió a las calles el 19 de diciembre”. Y advertía que “hay un retorno a la imagen del peronismo de los setenta” (LN 28/12/01).

2. ¿LA CRISIS DE QUÉ?

Como vimos, en términos generales la expresión “los 90” o incluso del “modelo”, implica una operación discursiva que tiene que ver con ubicar la crisis en una parte para evitar referirse a los fundamentos del orden social, económico y político, en tanto sistema y totalidad. Según el actor que se trate, la parte sobre la que habrá que actuar podrá ser el sistema político y los dirigentes políticos, la corrupción o la falta de rigurosidad en los manejos de los fondos públicos².

Hay un núcleo compuesto por los editorialistas de *La Nación* y los intelectuales que actúan como colaboradores más o menos estables y aquellos que se desempeñan en consultorías y universidades privadas que componen la fracción liberal de la intelectualidad, que por un lado, hacen hincapié en la crisis de representatividad y de credibilidad. De allí sostienen la necesidad de concretar una profunda renovación en la dirigencia política, a la que definen como “clase política” y a la que se refieren con una serie de calificativos degradantes. Esto es sin dudas un arma de doble filo, porque también alimenta el descrédito y el repudio, y de esa manera no contribuyen a descomprimir la situación³. Al mismo tiempo, adjudican la crisis económica a la incapacidad del Estado y de los gobiernos sucesivos para llevar a cabo una política fiscal austera.

Por dar algunos ejemplos, Abel Posee (LN 11/2) asegura: “O Duhalde se inscribe como verdugo de la vieja política o se condenará con ella. La Argentina no aguanta más la corporación politiquera”.

En el mismo sentido, Aguinis dice:

En efecto, si los políticos son irredimibles, entonces no podrá existir la democracia. Sin democracia vamos a la anarquía o la dictadura. Preferimos la democracia, desde luego. Preferimos la institucionalidad, aunque tenga fallas. Pero necesitamos que muera la vieja política y nazca una nueva (LN 27/1/02).

También las demandas de las movilizaciones son un terreno de controversia en sí mismo. Santiago Kovladoff se refiere a esa cuestión tratando de despejar las dudas acerca de la supuesta radicalidad de los reclamos:

Apuntaron, en cambio, al multiforme corazón de quienes corrompen la democracia teniendo, paradójicamente, el deber de afianzarla entre nosotros. Si es así, habrá que convenir también en que la ciudadanía no descrea del sistema en el que vive sino de la idoneidad de muchos de los que lo representan. Tampoco, me parece, esa ciudadanía descrea de la política sino que cuestiona y repudia a los malos políticos (...) La confianza ciudadana en sus legítimos representantes sufre una merma sin igual... (LN 9/1/02)

De este modo, en *La Nación* encontramos en diferentes momentos notas que proponen un análisis sesgado de la crisis y del proceso de movilización social. Por dar un caso, pasados algunos días de la insurrección del 20 de diciembre uno de sus editoriales plantea: “será fundamental que el actual presidente de la República y el Congreso de la Nación sepan interpretar los reclamos de la ciudadanía independiente”, “lo que se pide es la drástica disminución de los altísimos costos de la política y la entronización de una nueva manera de concebir el manejo de los asuntos públicos” (LN 26/12/01).

2 El caso de LN es paradigmático, en un editorial del 6 de enero de 2002 sostiene que “la adjudicación de los males al llamado modelo neoliberal y no a las inconsistencias en su aplicación constituye un error de diagnóstico del mismo tenor que suponer que la convertibilidad es intrínseca a ese modelo y que, por lo tanto, también es un mal por erradicar”.

3 Hacia fines de febrero de 2002 tanto en Clarín como en LN aparecen notas que llaman la atención sobre el nivel de rechazo que tienen los políticos y comienzan a intentar distinguir “la paja del trigo”.

Esta lectura sesgada se traducirá en una constante demanda para que se restrinja el gasto público, a partir de una reducción de los gastos superfluos de “la política”. Lo que demuestran estas interpretaciones es que una vez lanzado el movimiento de protesta, un movimiento ambiguo y multisectorial, el sentido de sus demandas se transforman en un campo fundamental de disputa. Es decir, no sólo se tratará de deslegitimar esa movilización, sino también incidir sobre su carácter.

Junto con lo anterior, desde estos agentes, también se plantea la tarea de llevar a cabo una reforma institucional del sistema político para poder contener y encauzar las demandas sociales. De hecho, las reformas implementadas al régimen electoral durante el gobierno de Duhalde y el intento de éste de impulsar un régimen parlamentario –apoyado por intelectuales de fracciones que van más allá de la liberal como Eugenio Zaffaroni (Clarín 14/1/02)- son iniciativas que podemos ubicar en esa línea.

En otro orden, que tiene que ver con la manera en que es tratada la crisis, los medios aparecen como verdaderas tribunas de interpelación a los dirigentes políticos acerca de la gravedad de la crisis y de la necesidad de dar cuenta –de un modo u otro- de las demandas puestas en juego por las distintas manifestaciones populares.

En el Editorial del 20 de diciembre, *La Nación* asegura que la primera tarea es “frenar la violencia”. Hay una búsqueda de responsabilidades en una clase política a la que se caracteriza como “despilfarradora”. Y un llamado de atención a toda la clase dirigente: “no es la suerte de un gobierno la que está en juego, sino la del país”. Asimismo, otras notas destacan que en los cacerolazos hay mensajes que van más allá de lo económico. En esta línea Morales Solá (LN 23/12/01) señala con alarma que los dirigentes políticos siguen metidos en disputas internas. Remarca que la clase media está sublevada y que hay rasgos de una “guerra civil”. Por eso se necesita un gobierno fuerte. Así en *La Nación* se combina una intervención que intenta imponer una caracterización de la crisis, de sus causas y por tanto de qué medidas hay que tomar, con un llamado permanente para que los dirigentes políticos del bloque dominante estén a la altura de las circunstancias, dejen de lado los particularismos y convoquen a acuerdos de largo alcance. En los convulsionados últimos días de 2001, uno de sus editoriales aseguraba que las dirigencias no parecen haber comprendido del todo la gravedad de “la crisis institucional” y no son capaces de percibir que el “fenómeno de la corrupción” debe ser “drásticamente eliminado de la vida pública nacional” (LN 30/12/01).

Por su parte, *Clarín* se diferencia sensiblemente de *La Nación*, pero comparte la caracterización de la agudeza de la crisis. Para *Clarín* no es difícil advertir que el “cuadro de crecientes necesidades básicas sin satisfacer, más la ausencia de horizontes conforman un explosivo caldo de cultivo para el estallido social, e impiden el despegue económico anhelado por el conjunto de la sociedad” (Editorial 27/12/01). De allí se deriva lo que sería la tarea primordial del nuevo gobierno, que deberá “establecer como prioridad nacional, a la par de promover la creación de puestos de trabajo sustentables, asumir la gravedad de la emergencia social y cumplir con los propósitos de reducir la pobreza”. En este sentido, *Clarín* asume una perspectiva más ligada con los análisis críticos acerca del modelo neoliberal que venimos retomando, con una mirada que se orienta más hacia la economía real interior y no tanto hacia las cuestiones financieras. Sin embargo, es digno de destacar que en el otro editorial de ese mismo día aparece la preocupación por la implementación de “nuevas políticas para mejorar la seguridad”.

En este sentido vale llamar la atención acerca del tratamiento que recibe el problema de la “institucionalidad”. El término en realidad aparece ligado a una utilización ambigua y oportunista. En este caso *La Nación* aparece como un garante de las leyes y la institucionalidad, pero no duda en acomodar sus definiciones respecto de la manera de afrontar la transición presidencial hasta 2003, según los ritmos de la protesta social. Del mismo modo, si bien se preocupa por la incapacidad de las instituciones políticas (partidos, parlamento) para dar cuenta de las demandas ciudadanas e incluso postula la necesidad de reformas en ese orden, al tiempo que alza la voz para indicar la necesidad de desterrar la corrupción, también se encarga de aminorar los ánimos cuando de cuestionamientos a las instituciones se trata. El editorial del 4 de enero, muestra preocupación ante la inminente renovación de la Corte Suprema de Justicia. Según el diario la renovación es necesaria, pero no debe significar que se pisoteen las modalidades institucionales. “La pretensión que expresaron públicamente políticos de distinto signo para remover a todos los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin respetar el procedimiento

previsto por la Constitución Nacional, debe merecer el más absoluto rechazo, pues el fortalecimiento de las instituciones de la Constitución, y en particular del Poder Judicial, requiere que los magistrados sean preservados de los avatares de la vida política partidaria”, se asegura en el texto.

3. EL PESO DE “LO NACIONAL”

Ya en su discurso de asunción Duhalde se apropió de la idea de que el suyo debía ser un Gobierno de “salvación nacional”. Allí apuntó a “la elaboración de un programa de salvación nacional” y afirmó que “no son horas de festejos las que corren; son horas de esperanza: asistimos al proceso inédito a la formación de un gobierno de unidad nacional. No hay nada que celebrar, ni aplaudir. No es momento de cánticos ni de marchas partidarias. Es la hora del Himno Nacional” (LN 2/1/02)

Unos días más tarde, el por entonces presidente le enviaría una carta al titular de la Conferencia Episcopal Argentina, Estanislao Karlic, en la que ratifica aquel enfoque relacionado con la “salvación nacional”. En esa misiva Duhalde les ratificó a los obispos su decisión de aceptar el ámbito ofrecido por la Iglesia Católica con la asistencia del PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo) para “transitar un proceso de diálogo nacional” que permita de manera concertada con todos los sectores sociales “la elaboración inmediata de un programa de salvación nacional” tal como expresó en su discurso ante la Asamblea Legislativa (P12 5/1/02).

Aunque con un matiz, la presencia del término ocupa un lugar importante en la manera en que Néstor Kirchner analiza el escenario que dejó la insurrección y los objetivos de su gobierno, días antes de las elecciones de 2003:

En la Argentina que implosionó el 20 de diciembre los valores que se están discutiendo son otros. Primero, creo que hoy estamos ante un gobierno de supervivencia nacional con aciertos, con asignaturas pendientes y con errores. Pero los espacios alternativos que se van construyendo tienen apoyos diversos. A nosotros nos apoya gente del oficialismo, independientes, frepistas y radicales. Porque lo nuestro es un proyecto de *reconstrucción nacional* (P12 13/4/03).

Lo que aparece con toda claridad es una operación ideológica que busca construir una comunidad imaginaria, o en todo caso, recomponerla para intentar construir un horizonte de referencia que ponga los intereses comunes por encima de los particulares. En este caso recurrir a la idea de “lo nacional” no sólo va a operar en el plano de la disimulación de los conflictos, las desigualdades y los antagonismos propios de una sociedad que se estructura en relaciones de explotación y dominación, sino que también intenta contactar con un imaginario muy potente en donde la idea de la construcción de la Nación ocupó un papel central en la acción cultural de la clase dominante en nuestro país, amén de la relación directa que en este caso particular ciertos actores van a intentarse construir con un período histórico en el que “lo nacional” se refería a la posibilidad de desarrollar un capitalismo relativamente autónomo sustentado en el papel jugado por la burguesía nacional.

Entre los intelectuales de la fracción liberal esta operación será recurrente. Veamos uno de los casos paradigmáticos. Desde su espacio en *La Nación* Santiago Kovladoff no duda en señalar que “al justicialismo se le brinda hoy la oportunidad de demostrar que hay algo que le interesa más que el poder. Y así prometió hacerlo Eduardo Duhalde. Y ese algo es la Nación. No la patria peronista: la Nación. No la patria sindical: la Nación” (LN 9/1/02).

En cuanto a los medios, observamos un acuerdo entre *Clarín* y *La Nación*. El 31 de diciembre de 2001, luego de la renuncia de Rodríguez Saá, *La Nación* publica un editorial titulado “La hora de la unidad nacional”, en donde considera que la sociedad reclama cambios en “la política” y que la salida está en la conformación de un “gobierno con autoridad moral” que sea producto de, y busque, “acuerdos sólidos” para recomponer la confianza. Y que implemente “un modelo económico sustentable que respete la seguridad jurídica”. *La Nación*, en tanto, se muestra conforme con la asunción de Duhalde. José Claudio Escribano titula su nota de análisis “Triunfó la política del acuerdo” y sostiene que la Argentina ha comenzado a desfilarse hacia la primera definición realista (2/1/02). El autor habla de una “combinación alentadora de gestos de grandeza, de deposición de egoísmos”. En uno de los editoriales de ese día, la idea de un gobierno de unidad nacional también aparece en el diario de los Mitre:

“éste debe ser un verdadero gobierno de unidad nacional. Ha llegado el impostergable momento de que esa intención sea cristalizada”.

Asumido Duhalde, en *Clarín* Roberto Guareschi sostiene que “el país, el Estado y la ley están en peligro” y que frente a esa situación lo único que cabe es “comprometer a todas las fuerzas políticas en un verdadero gobierno de unión nacional con un proyecto nacional y viable, un proyecto de cambio económico, basado en una visión del mundo más humana y solidaria, y un gabinete de personas representativas y limpias”.

En los momentos de mayor incertidumbre, el empresariado no duda de recurrir a la misma operación. Ante la renuncia de Rodríguez Saá, el Grupo Productivo reclamó un “un gobierno de unidad nacional” que lleve adelante un plan económico sustentable y lo presente en Estados Unidos para requerir el apoyo de los organismos multilaterales de crédito. Además consideró imperioso “restaurar la credibilidad” (LN 31/12/01).

Asimismo, desde REPSOL se pone en juego una mirada muy sensata: “Las privatizadas deberemos aceptar que ganaremos menos. Como dijo Duhalde, se terminó el modelo. El país está mal y hay que salvarlo”. “Nosotros pensamos en el largo plazo”.

4. LA REESTRUCTURACIÓN DEL ROL DEL ESTADO

En medio de la crisis económica muchas de las miradas se centran en el papel reorganizador e impulsor que puede jugar el Estado a partir de diferentes políticas. Salvo posiciones muy fundamentalistas, el discurso del Estado pequeño que cumple funciones mínimas va perdiendo fuerza y quedando refugiado en todo caso en los institutos de investigación neoliberales, algunos consultores, ciertos voceros periodísticos y el grueso de la fracción liberal del campo intelectual. El tamaño de la crisis y de la recesión es tal que, aunque no se plantee explícitamente –habrá que prestar atención a las presiones más que a los discursos–, todos los sectores empresarios buscan en el Estado el agente que compense las pérdidas y la merma en las ganancias. Desde distintos lugares y posiciones se interpela a los dirigentes políticos para que se implementen cambios en las políticas, pero también reformas en los mecanismos de funcionamiento institucional.

4.a) *Un Estado con políticas para la producción, el empleo y la pobreza*

En este punto, si la reestructuración del Estado y la modificación de su función en la década anterior tendió a garantizar la desregulación y la apertura económica, ahora sectores de la industria, una parte de los partidos tradicionales, de los medios masivos y del campo intelectual plantearán una especie de programa que se centra en configurar un tipo de Estado que promueva la producción y el empleo y se haga cargo de las urgencias sociales⁴. Esta línea de intervención se complementará con la que hace al modelo “productivo”, que analizaremos en el apartado siguiente.

La señal más importante que da el Gobierno de Duhalde en este sentido es la creación del Ministerio de la Producción. Aunque esa cartera quedará vaciada en pocos meses, la impronta de un Estado que interviene para alentar la producción y generar mejores condiciones para insertar los productos propios está a la orden del día. Asimismo, en esa dirección, ante industriales y demás empresarios, Duhalde se comprometerá a que el Estado se dedique a cuidar y potenciar la capacidad productiva que sigue en pie luego del proceso de desindustrialización. También dirá que uno de los objetivos primordiales de su gobierno pasará por “garantizar los derechos humanos básicos a los argentinos,

4 Vale señalar que este horizonte discursivo no es ajeno a las propuestas que hacia principio de la década empezaron a elaborar los organismos multilaterales de crédito. En el caso del Banco Mundial, los resultados sociales y económicos de las políticas neoliberales y los procesos de resistencia popular obligaron a introducir modificaciones en sus programas. Esta readecuación fue conocida como “reformas de segunda generación”. Las mismas suponen una serie de medidas publicadas en el “Informe del Banco Mundial sobre el Desarrollo en el Mundo, 2000-2001”. En el prefacio, de ese documento el presidente del organismo planteaba un objetivo orientador: “Fotalecer la aceptación de las reformas y de los procesos de estabilización”, con el fin de “impedir los conflictos vinculados a la distribución de los recursos, que con frecuencia traen consigo bloqueos, agravan las crisis económicas y pueden incluso hacer caer a los gobiernos” Para ello será necesario impulsar la creación de “redes de seguridad” sociales.

la alimentación y la salud” (P12 5/1/02). Los economistas del PJ, por su parte, hablan de un plan keynesiano⁵.

Página 12, es el diario que con más claridad asume un llamado para modificar el rol del Estado. Julio Nudler grafica el espíritu que comparte todo el equipo de editorialistas de ese medio, al plantear la necesidad de implementar un programa económico que:

“devalúe, maneje con prolijidad la política monetaria y fiscal, enfatice la mejora del tipo de cambio exportador con cargo a ciertas importaciones, repare la regresividad del régimen impositivo, reduzca la ineficiencia de la administración fiscal, ataque específicamente algunos precios oligopólicos (...), declare el default con una propuesta dura y realista a los acreedores, tome algunos pasos concretos para la reforma del Estado, establezca una red de protección social en base a medidas de redistribución progresiva del ingreso y persiga por lo menos algunos casos emblemáticos de corrupción”

Esta posición respecto al papel del Estado en relación a la producción abarca a un arco amplio entre las fracciones intelectuales. Señalemos un caso. En una nota titulada “Nuestro problema es el Estado” (Clarín 18/2/02), el consultor Carlos Magariños y el profesor de la UCA, Hugo Dalbosco, parten de una caracterización similar:

Si algo queda claro luego de la crisis argentina es la patente debilidad del Estado, que, después de más de una década de reformas estructurales y múltiples ajustes, se encuentra incapacitado para ejercer su poder. Por eso se puede decir que el problema de la Argentina es el Estado, pero no por el peso relativo de su gasto, sino por su debilidad para promover el crecimiento del producto nacional.

Los autores completan esa caracterización haciendo referencia al papel del Estado en otras sociedades contemporáneas. Aseguran que “en todas las economías capitalistas modernas, el Estado y el mercado se combinan en una relación más o menos tensa. Difícilmente se encuentre alguna economía próspera en la cual el Estado no pueda imponerse sobre los demás grupos sociales y, llegado el caso, pueda resolver los “fallos” del mercado sin desacreditar la economía capitalista”. De esta manera, no dejan dudas acerca de que el fortalecimiento del Estado no es contradictoria con la dinámica de acumulación del capital, sino todo lo contrario, los autores piensan en políticas e instituciones que apunten al funcionamiento del mercado y posibiliten su expansión. El artículo de Magariños y Dalbosco es esclarecedor porque pretende tranquilizar y generar consenso, sobre todo entre el empresariado. Por eso afirman que es necesario definir y poner en práctica “un modelo de desarrollo para lo cual es preciso armar un plan de negocios rector, que implica una política industrial y tecnológica determinada que defina la inserción de la Argentina en el mundo”. “Todo esto –agregan- requiere de un esfuerzo mayor de gobierno y de administración”. Porque en ese modelo “el Estado tiene que poder imponerse sobre los intereses sectoriales, recuperar su capacidad de sanción y su papel de promotor del bien común; incluso, tiene que poder desarrollar ciertas actividades por sí mismo cuando la realidad lo requiera”.

Vale la pena remarcar la manera en que aparece el papel del Estado en la campaña electoral de Néstor Kirchner. Por un lado define su propuesta de gobierno como estructurada a partir del objetivo de construir un capitalismo nacional. A su vez, habla de la necesidad de superar el pasado en base a la “subordinación del poder económico al poder político nacional, en acatamiento de la capacidad regulatoria del Estado”. Junto con ello, dirá que hay que apunta a una “sociedad equilibrada” y llamará la atención sobre el aprendizaje que ha significado asumir que “el mercado organiza económicamente pero no articula socialmente”. En esa perspectiva, según Kirchner “el Estado debe poner igualdad, actuar como reparador de las desigualdades sociales a través de una tarea constante de inclusión social” (P12 23/4/03).

5 <http://www.pagina12.com.ar/2001/01-12/01-12-22/pag07.htm>

4.b) La reforma del Estado y del sistema político

Para los editorialistas de *La Nación*, la necesidad de volver más “eficiente” al Estado es un tema recurrente. En un editorial del 6 de enero, se asegura con alarma que en el plan anunciado por el gobierno no se estiman medidas “que apunten a una mayor eficiencia del Estado y a una reducción genuina, sostenible y significativa del gasto público”.

Luego de definir los grandes ejes de un plan económico que supone salir de la convertibilidad y apostar a “los sectores productivos”, *Clarín* no deja de lado una demanda que parece contar con el respaldo popular: “igualmente importante es reformular el aparato del Estado en función de una mayor eficiencia y transparencia, desactivando los viejos resortes del clientelismo político” (20/1/02).

Respecto del repudio sufrido por los políticos, en un editorial, que lleva de título la consigna “Abrir el corralito político”, *La Nación* se posiciona de la misma manera aspirando a que el Gobierno y la dirigencia política perciban la gravedad de la crisis y hagan gestos que permitan descomprimir la situación. Luego de reconocer el “rechazo de vastos sectores de la población hacia los partidos políticos”, afirma que es imprescindible “considerar la urgente necesidad de que ciudadanos independientes, desconectados de toda fuerza partidaria, puedan participar como candidatos en las contiendas electorales y puedan, así, acceder a los principales cargos públicos de origen electivo”. Para el diario “el Gobierno debería impulsar de inmediato una reforma legal que abriera el escenario electoral a los ciudadanos de todos los orígenes, sin exigirles la pertenencia a una fuerza partidaria (24/2/02).

Tomemos dos casos significativos entre los intelectuales. Uno es el de Oscar Oszlak, docente e investigador de la UBA especialista en temas vinculados al Estado y referente de un espacio crítico respecto de las políticas neoliberales. En una nota publicada a principios de febrero de 2002 Oszlak analiza la situación del Estado en nuestro país:

Argentina ha sido un modelo para los organismos multilaterales de crédito respecto de qué tipo de cambios tendrían que producirse en el aparato estatal y en la relación entre el Estado y la sociedad. Se puso en marcha un proceso de transformación estatal que implicó un desguace (...) En los ‘90, el Estado redujo su aparato institucional aunque no su intervención. El Estado modificó la naturaleza de los destinatarios, retirándose de algunas funciones esenciales que fueron asumidas por otras instancias (...) En los últimos años el Estado puso el piloto automático. No tuvo prácticamente ninguna intervención decisiva respecto de salvaguardar las fuentes de trabajo ni alentar la producción nacional (P12 4/2/02)

Luego de dejar sentada esta caracterización, en otra nota publicada por esos días, Oszlak plantea su concepción del Estado al analizar la crisis argentina:

El Estado ha dejado de ser el cemento que amalgama a la sociedad, la principal instancia de articulación de relaciones sociales, el garante de la reproducción de un sistema de reglas de juego bajo las cuales se desenvuelven esos vínculos. Cuando renuncia a cumplir su papel cohesionador, se rompen los pactos, se disuelven las reglas (*Clarín* 2/2/02)

Por eso, para nuestro autor, la crisis se caracteriza por un movimiento en la sociedad que “exige al Estado un papel mucho más protagonista”. Para Oszlak, en este contexto, la tan mentada “reforma del Estado” “no puede limitarse a un nuevo torniquete sobre el gasto”, sino que debe incorporar un tipo de gestión pública que pugne por defender derechos adquiridos, rever buena parte de las decisiones tomadas en el pasado inmediato, juzgar a los corruptos, reconstruir el poder judicial y definir reglas de juego claras y estables, “únicas aptas para la convivencia civilizada y el desarrollo material y moral de sus miembros”.

Para cerrar, analicemos una intervención que sintetiza la posición de la fracción liberal de la intelectualidad. Desde su espacio habitual en *La Nación*, el politólogo Natalio Botana despliega su análisis asumiendo principios liberales y republicanos. En medio de las convulsionadas jornadas del verano de 2002, Botana asegura que el régimen democrático ha entrado “en zona de riesgo por dos causas principales: porque no responde a la crisis como la opinión espera y porque se ha puesto en tela de juicio el sistema representativo” (LN 28/2). Ante ese panorama, sostiene la necesidad de llevar a cabo una reforma del Estado y de los partidos orientada a implementar una marcada renovación

del sistema político que ponga freno a la crisis de legitimidad de las instituciones. La reforma política que vislumbra Botana se refiere a una renovación de la dirigencia y a la recuperación de la capacidad recaudadora del Estado. En ese sentido, en una nota anterior nuestro autor asegura que:

La dirigencia política, que padece en carne propia la crisis de representación, debe generar, en el orden nacional y provincial, un excedente fiscal capaz de remontar la pendiente de la disolución social. Si a una necesaria reestructuración de la deuda no se suma una drástica reforma del Estado, y si a este imprescindible esfuerzo no se le añade la exigencia de contribuir al esfuerzo común mediante un renovado concepto de la ciudadanía fiscal, entonces es probable que las condiciones empeoren y el descenso continúe (LN 17/1).

Hay que decir, finalmente, que el propio Duhalde llegó a plantear la necesidad de una reforma constitucional e impulsó el pasaje a un sistema parlamentario. Elisa Carrió, por su parte, desde su condición de presidenciable, promovió una “Constituyente que refunde todos los poderes del Estado”. Según Carrió para salir de la crisis “necesitamos una matriz constituyente. Una nueva Constitución, una nueva representación política que conduzca a un sistema semiparlamentario al estilo de la V República en Francia. Una reforma del estado que no sea un simple ajuste sino un rediseño estatal” (P12 24/1/02).

5. UN MODELO “PRODUCTIVO”

Luego de la insurrección y asumido Duhalde se instalará un discurso que intenta imponer la idea de que se está llevando a cabo un cambio rotundo en el modelo económico. Desde el Gobierno se hablará de una nueva alianza social que gobernará el país, basada en la “comunidad productiva”. Este gesto inaugural se apoyará en reuniones públicas y en el acercamiento a las entidades industriales. Como ya señalamos, una de las primeras medidas del Gobierno de Duhalde fue crear el Ministerio de la Producción y asignar como titular al presidente de la UIA Ignacio De Mendiguren. En esta cruzada por imponer la idea de que se estaba dando vuelta una página en las políticas económicas, habrá una operación constante que busca perfilar un “modelo productivo” como la contracara del modelo basado en el capital financiero y la especulación, propio de la década anterior.

Repasemos algunos gestos fundacionales emprendidos por Duhalde. En su discurso de asunción habló de “terminar con un modelo agotado”, de recuperar el mercado interno y la producción (Clarín 2/1/02). Partió de una caracterización contundente con reminiscencias a las políticas aplicadas en los gobiernos anteriores: “La Argentina está quebrada. La Argentina está fundida. La propia esencia de este modelo terminó con la convertibilidad. Arrojó a la indigencia a dos millones de compatriotas, destruyó la clase media, quebró nuestras industrias y pulverizó el trabajo de los argentinos”. A su vez, definió tres tareas fundamentales para su gobierno: “reconstruir la autoridad política e institucional, garantizar la paz social y sentar las bases para el cambio del modelo económico y social”. Y aseguró que su compromiso es “sentar las bases de un nuevo modelo capaz de recuperar la producción, el trabajo, el mercado interno y promover una distribución más justa de las riquezas” (LN 2/1/02).

Unos días después de asumir su cargo, Duhalde encabezó una reunión con industriales, empresarios de la construcción, dueños de hipermercados y dirigentes de la CGT. Allí dejó un mensaje contundente. Dijo sin medias tintas: “vengo a decirles que debemos terminar con la alianza que perjudicó al país, que es la alianza del poder político con el poder financiero”. Luego admitió que, debido al “proceso de desnacionalización” de la economía, el Estado deberá “proteger lo que nos queda” (P12 5/1/02). Luego, el por entonces presidente comentó: “quise tener este primer encuentro con la gente de la producción, porque la comunidad productiva es la que debe gobernar en el país”. Y añadió: “sé que a algunos esta clase de afirmaciones les parecerá una exageración, pero la comunidad productiva debe ser la semilla de la nueva alianza que construyamos en la Argentina” (Clarín 5/1/02).

La fórmula que define al modelo en oposición al capital financiero no es patrimonio único del sector del PJ que asume el Gobierno con Duhalde. En el sistema político, la figura de Carrió aparece como una figura central por su imagen positiva y su carácter de dirigente no desprestigiado. En ese marco, Carrió sale a cuestionar las medidas económicas del Gobierno asegurando que el paquete

diseñado por el equipo de Duhalde “no toca los intereses del sistema financiero” y que, aunque tiene aspectos positivos, “deja tranquilos a los bancos” (P12 6/1/02). El posicionamiento de la por entonces líder del ARI se acerca al clima de movilización que se vive por aquellos días. Alienta las movilizaciones, pide elecciones de todos los cargos, la renovación de la Corte Suprema y un plan económico que haga eje en el combate a la pobreza y en la distribución del ingreso. Acorde con esas definiciones no duda en afirmar que “el Gobierno se está rindiendo ante el establishment financiero”. Puntualmente dice Carrió:

El modelo es el mismo. En estos momentos el Gobierno se está rindiendo a los miembros del establishment económico y financiero. El modelo se mantiene en la medida en que se trata de recomponer a los grupos dominantes que fueron copartícipes de la fiesta. Se puede apreciar en la reforma de la carta orgánica del BCRA y la facultad de los bancos para pedir redescuentos (P12 24/1/02).

La crítica se complementa con la postulación de una serie de medidas que permitan construir una “nueva matriz económico-social a partir de la moneda nacional, una reforma tributaria profunda. Un seguro de desempleo como el propuesto por el Frenapo. Un replanteo de las economías regionales” (P12 24/1/02).

Kichner, por su parte, hará del modelo productivo una bandera desde los días de la campaña electoral en 2003. En un mensaje pronunciado a una semana de las elecciones, el por entonces gobernador de Santa Cruz aseguraba: “No podemos dar más saltos al vacío a contramano de la historia, hay que profundizar el modelo de la producción y el trabajo” (P12 20/4/03). En los días previos a las elecciones, el santacrucense redoblaba la apuesta y sentaba las bases para una dicotomía que se iba a quedar instalada. Aseguraba que “en las próximas elecciones se juegan dos proyectos de país: el de la concentración económica y el hambre y el de la producción y el trabajo genuino para la gente”. Más concretamente, afirmó que “en la Argentina se están poniendo a consideración de la ciudadanía dos modelos: el de la concentración económica, de la especulación financiera, de corrupción y de hambre, frente al proyecto nacional progresista, popular y racional, donde queremos volver a sentar las bases de un nuevo país con crecimiento, producción y trabajo digno”. En la misma línea enfatizó que “los grupos concentrados de la economía no quieren un presidente, quieren un gerente, pero conmigo: ‘de acá’, porque yo voy a ser el presidente del pueblo”. Y agregó que su fórmula representaba un proyecto “nacional y popular” (P12 22/4/03). A esto hay que sumarle la forma en que cerró su campaña gritando que había llegado la hora de terminar con los ajustes y de que ¡paguen los que más tienen!” (P12 25/4/03).

Si el eje de la crítica para la mayoría de los actores que adhieren a ella, se centra en el menemismo será Cristina Fernández la que incorpora la idea de que el comienzo fue mucho antes, dejando planteado el papel histórico de la dictadura militar. En una entrevista realizada luego de las elecciones del 27 de abril de 2003, la por entonces senadora por santa Cruz, aseguraba que los argentinos están ante “la posibilidad de clausurar un ciclo histórico que podríamos situarlo en 1976, que se profundizó hasta la exasperación durante la década menemista y que consistió básicamente en adherir a un modelo en el que el trabajo, la producción y la idea de lo nacional debía ser dejada definitivamente de lado en pos de un pretendido ingreso a la globalización” (P12 4/5/03).

En el caso del empresariado, más allá de que la UIA es el sector que, en los momentos previos a la insurrección, más intentó imponer un plan económico con definiciones claras, que incluye como ya señalamos la devaluación, la pesificación, la reducción de impuestos como el IVA, la reestructuración de la deuda y la aplicación de planes de asistencia social, nos interesa analizar la manera en que ese plan es presentado públicamente. Su titular, De Mendiguren aparece como una de las figuras menos desprestigiadas de las elites dirigentes de la clase dominante y por tanto tiene una exposición superlativa.

Antes de la asunción de Duhalde que significará el prólogo para la implementación de varias de las medidas reclamadas por su sector, De Mendiguren aseguraba que “hay que darle a la gente un proyecto que demuestre que es posible crecer y dejar de vivir ajustándonos y sufriendo” (LN 21/12/01).

Una vez asumido su puesto en el Gabinete de Duhalde, De Mendiguren propuso restringir las importaciones y encabezó la línea dura en favor de la devaluación. “Nosotros, como Unión Industrial

que llega al Ministerio de la Producción, lo que vamos a hacer es presentar un plan productivo para la Argentina”, dijo en una nota publicada en el diario Clarín (4/1/02). Por aquellos días, su entidad hizo circular una propuesta que incluía la creación de un nuevo banco, al estilo del desaparecido Banco Nacional de Desarrollo, el incremento de las exportaciones, por la vía de moderar la apertura de la economía y la implementación de ayuda social. Un directivo sintetizaba así la posición de la organización: “En la Argentina pasamos de una economía cerrada hasta el absurdo, con Falcon de 48 años, a importar porotos desde la India. El mundo está en el medio de esas dos posturas y Argentina debe imitar al mundo” (Clarín 3/1/02).

Si bien el dirigente industrial ocupó ese cargo solamente hasta mayo de 2002, por aquellos días de enero aparecía como uno de los voceros más buscados para dar a conocer los planes del gobierno. En una nota publicada en *La Nación*, De Mendiguren asegura: “es preciso construir una Argentina moderna y abierta al mundo, pero no se puede competir si su economía no es competitiva”. Luego señala que las principales líneas de acción serán la competitividad, las Pyme, las inversiones, las economías regionales, la recapitalización de las unidades productivas y el comercio exterior (4/1/02).

Casi un año después, la UIA se mostraba satisfecha por la llegada de Kirchner a la presidencia. La entidad hizo saber a los medios que el nuevo presidente “cuenta con el absoluto respaldo y legitimidad” y que espera un impulso a la industria nacional, el consumo y las exportaciones. Por su parte, en Repsol-YPF, estimaron —a modo de elogio— que su programa de gobierno “coincide con las organizaciones multilaterales”, en alusión al FMI y el Banco Mundial. En esa línea, el presidente de Fiat, Cristiano Rattazzi, dijo que Kirchner “va a hacer una buena gestión”. En tanto, Luciano Miguens, titular de la Sociedad Rural, dijo que el nuevo presidente “es un hombre al que la gente de campo no conoce”, pero comprometió el apoyo de la Rural, “porque la Argentina no tiene ganas de suicidarse” (Clarín 15/5/03).

Respecto de los medios de comunicación, con la asunción de Duhalde consumada, Julio Blanck, editorialista de Clarín, caracteriza al nuevo Gobierno como un intento por cambiar el esquema de beneficiados en el bloque de poder, a favor del sector mercado-internista (2/1/02). En el editorial del 3 de enero, Clarín sostiene que el nuevo gobierno deberá presentar “una estrategia económica adecuada” y mantener “el consenso político”. Ratifica el acierto que significó no llamar nuevamente a elecciones y resalta el discurso de asunción del dirigente justicialista, en el que “formuló una severa crítica al modelo económico que rigió en la última década, proporcionó datos sobre la crisis fiscal y financiera y se comprometió a trabajar para reconstruir la autoridad política e institucional, garantizar la paz social y recuperar la producción, el trabajo y el mercado interno”. Objetivos que para el diario “son ampliamente compartidos, sin duda, por la gran mayoría de la población”.

Al delinear lo que debería ser un plan económico a llevar a delante desde el gobierno, Clarín parte de dos grandes proposiciones. La primera es que “la crisis de la convertibilidad es, también, la crisis de un estado de cosas que, en muchos sentidos, desalentó las actividades productivas y el capital nacional y estimuló la búsqueda de ganancias en actividades financieras o especulativas”. La segunda: ese modelo “tampoco prestó atención a objetivos como la diversificación y tecnificación de las exportaciones o la construcción de instituciones adecuadas para reducir las imperfecciones de funcionamiento de los mercados”. Así se posiciona en una línea bastante afín al discurso gubernamental: modelo productivo e intervención estatal. Así las cosas, no pierde de vista los intereses particulares, asegura que tanto el Gobierno como la dirigencia política, económica y social, “tiene la oportunidad de avanzar hacia un orden diferente, en el cual las empresas puedan sanear sus finanzas, volver a capitalizarse, crecer y proyectarse al exterior” (20/1/02).

En sintonía con el nuevo horizonte de sentido que desde el gobierno y sus aliados se intenta imponer, el 6 de enero de 2002, o sea en las horas previas a que el nuevo gobierno anuncie sus primeras medidas importantes en materia económica y monetaria, *La Nación* hace saber su preocupación respecto de la “inserción internacional del país”. En el mismo sentido, en una nota de opinión firmada por Jorge Oviedo, advierte que el borrador da cuenta de un plan que “no parece mejorar la situación”. Además señala que “Duhalde parece querer hacer la alianza con el sistema productivo, generándole un subsidio por la vía de tipos de cambio elevados que lo protejan de la competencia extranjera”. Para

el columnista se pondrá en pie “un esquema con mucha intervención estatal y con amplia discrecionalidad en manos de los funcionarios”⁶.

Los intelectuales no quedarán al margen del avance de este discurso “productivista”. Abel Posee asegura:

Es imprescindible volverse hacia adentro, hacia la política, y alcanzar el epicentro de la realidad: producción, trabajo, recuperación de los negocios argentinos, mercado interno y regional, apoyo total al productor argentino (...) Ahora es el tiempo político: la urgencia ante el hambre y la marginalidad; lograr el ingreso de dos millones de jóvenes en la cultura del trabajo y del estudio (nuestro problema, mucho más grave que el del corralito: hay que crear brigadas de trabajadores juveniles, que vivan la mística de ayudar a la Patria en su peor pasaje histórico) (LN 11/2/02).

Más allá de los gestos y de algunas medidas que pudieron haber beneficiado sobre todo a los sectores productivos del agro y de la industria, el Gobierno de Duhalde se caracterizó por favorecer con medidas puntuales a los grandes bancos (congeló los depósitos y aprobó un salvataje por la pesificación a 1,40), a las exportadoras a quien les liquidó una deuda a principios de enero al dólar libre, y con las privatizadas que negoció importantes ventajas después de una década de bonanza. A su vez, aún en los planes presentados por la UIA, y en las acciones mismas de gobierno, nunca estuvo en los planes llevar a cabo un programa económico que no cuente con el visto bueno de Washington y el FMI. Cosa que es avalada por los sectores que respaldan las medidas adoptadas en aquellos meses críticos. En febrero el gobierno atravesaba un momento clave. Sin acuerdo con el FMI avanza con la liberalización del dólar, en ese marco, Clarín destaca el apoyo recibido por el G7, que le pide al gobierno seguir trabajando con el Fondo⁷. Para Eduardo Van Der Kooy es “un tiempo de vida o muerte para el Gobierno”, según la reacción que tengan “la gente y los mercados depende el éxito del plan de pesificación”⁸.

De este modo, el discurso “productivista” se plasmó en algunas medidas, pero su mayor aporte en el plano de la recomposición fue en términos de la construcción de un horizonte de acción que se distanciaba de los rasgos centrales de las políticas que estaban en la raíz de la crisis económica y social. Del mismo modo, ese “productivismo” no recibió la crítica estricta que se merecía, ya no en relación a su nivel de plasmación en las políticas o como mecanismo utilizado para construir consenso, sino en lo que implicaba en cuanto a un proyecto económico que expresaba el reacomodamiento entre las fracciones de la burguesía que la salida de la convertibilidad había originado.

Por lo tanto, en términos ideológicos, el discurso productivista merece un análisis—ya no en cuanto a un posible “engaño”—sino en relación a lo que deja de decir: qué sectores se benefician y cuáles no, sobre qué derechos laborales se aplicará el proyecto, en función de qué matriz distributiva, etc. En la medida en que obtura esos debates, el “discurso productivista” tiene un efecto claro sobre el régimen de lo decible y lo no decible.

6. LA INTEGRACIÓN REGIONAL

En medio de la crisis, la política exterior del gobierno aparecerá como un tema esencial. En el marco de las críticas generalizadas al “modelo” aplicado en la década anterior y a raíz de la entrada en default, la reconsideración del papel del Mercosur y de la relación con EEUU se presentan para los diferentes actores como un tema obligado. Por eso, más allá de los matices obvios habrá una línea general de coincidencias.

En su edición del 28 de diciembre, *Clarín* publica una nota del economista de la Cepal, José Antonio Ocampo, en donde destaca la necesidad de avanzar en la integración regional y la competitividad. Esta perspectiva se refuerza en el editorial. Allí se asegura que la situación económica no “se modifica

6 http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=364272

7 <http://edant.clarin.com/diario/2002/02/10/e-01501.htm>

8 <http://edant.clarin.com/diario/2002/02/10/o-02415.htm>

solamente con medidas cambiarias ni, mucho menos, con la dolarización”. Según *Clarín* “además de un sistema de precios relativos más favorable, la exportación necesita una política más abarcativa y de más largo plazo tendiente a mejorar el volumen y la calidad de las ventas externas y a la diversificación de los mercados de destino”. De este modo, la propuesta en materia económica queda establecida en términos de devaluación, impulso de las exportaciones y búsqueda de nuevos mercados.

La Nación sigue con su tesitura de señalar la gravedad de la crisis de legitimidad de las instituciones y de dejar sentadas las críticas respecto del plan económico. Insiste con el cuestionamiento a lo que considera medidas que llevan al país a aislarse del resto del mundo⁹, festeja las conversaciones con el gobierno estadounidense “porque abre una esperanza para que la Argentina comience a ser vista en el mundo como una nación que no está encerrada en sí misma”¹⁰ y pide más gestos desde el gobierno para que la dirigencia política encare el ajuste que la sociedad viene haciendo¹¹. También acude al temor cuando vincula períodos de hiperinflación a la devaluación¹².

Por otra parte, asumido como nuevo canciller, Carlos Ruckauf buscó diferenciarse de la política exterior del menemismo. Ningún país del mundo puede encerrarse en una sola relación, dijo. Y planteó que buscará un mismo nivel de relación con EE.UU. y la UE y recuperar el vínculo con Brasil. La estrategia tiene el sello de Duhalde (*Clarín* 4/1/02).

En este punto, nos interesa destacar, una vez más, los planteos de intelectuales provenientes de espacios institucionales que expresan fracciones de la burguesía y que han jugado un papel de usinas de pensamiento de las políticas neoliberales. En este caso nos referiremos a una nota publicada el 20 de febrero de 2002 en el diario *Clarín* y escrita por José Paradiso, Roberto Russell y Juan Gabriel Tokatlian, docentes e investigadores de las universidades del El Salvador, la Di Tella y la de San Andrés, respectivamente. En aquella nota, los autores parten de una caracterización de la etapa histórica definida por una configuración fuertemente asimétrica del poder internacional y la disposición de la administración Bush a plasmar su avance imperial. El panorama es calificado como “realmente crítico”. En ese marco, aseguran que “es imperativo que la Argentina encuentre un equilibrio entre las políticas que definan su inevitable inserción en el mundo y aquéllas que la protejan de los efectos nocivos de ese proceso”. Así las cosas, remarcan que el modo en que se intentó adaptar el país al sistema internacional durante el último tramo del siglo XX “es una de las principales causas de las dificultades que nos abruman e inmovilizan al comienzo del siglo XXI”.

Luego de esta revisión crítica, Paradiso, Russell y Tokatlian plantean que el país tiene una serie de opciones que deben ser jerarquizadas. En primer lugar, sostienen que es fundamental reconocer que “nuestra mejor carta es el Mercosur” y, dentro del mismo, el vínculo con Brasil. Incluso, agregan, si hemos de negociar el ALCA, “lo debemos hacer juntos con nuestros socios del Mercosur”. Respecto de la relación con EEUU, sostienen que el vínculo “debe fundarse en nuestros principios, valores e intereses. Se trata, en suma, de ser socios y no satélites”.

A MODO DE CIERRE

Cuando nos referimos a la recomposición, estamos hablando de la recomposición de la hegemonía. El recorrido que realizamos por los sentidos o significados fundamentales que formaron parte de ese proceso no debe llevarnos a perder de vista la complejidad de la construcción y reconstrucción de la hegemonía. En todo caso, dar cuenta de ese proceso de producción de sentidos particulares debe contribuir a generar mejores condiciones para aprehender esa complejidad.

Por un lado, tal como aparece en la concepción gramsciana, los sentidos construidos en torno a “lo nacional” y en relación al papel del Estado hacen a la universalización de intereses que toda construcción de hegemonía supone. Lo mismo podemos decir de cómo “el modelo productivo” y el

9 http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=366168

10 http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=367872

11 http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=366254

12 http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=371313

cuestionamiento explícito de las políticas desplegadas durante los gobiernos de Menem y De la Rúa reconocen parte de las demandas de los sectores subalternos movilizados. Sin embargo, es indispensable articular la definición de hegemonía, entendida como el ejercicio de la dominación de clase en función del despliegue no sólo de la coerción sino fundamentalmente de la capacidad de dirección ético-política, con la noción de estrategia de acumulación y el análisis de la reconfiguración del Estado sin la cual no es posible pensar el ejercicio de la hegemonía en las condiciones creadas por la crisis. No hay duda de que los Gobiernos encabezados por Duhalde y Kirchner enfatizaron y operaron en relación a un horizonte de sentido diferente del impuesto como hegemónico en la década anterior. Los sentidos asociados con la producción, el empleo, la industria nacional, el papel activo del Estado y el acercamiento a los países de América Latina actuaron con una eficacia comprobada en la reconstrucción del consenso a partir de remitirse a todo un imaginario vinculado con el primer peronismo, pero también emergiendo como opción frente a un modelo económico más que cuestionado por sus consecuencias desde diversos espacios y grupos sociales, incluyendo una parte de la clase dominante. Pero para no caer en simplificaciones que plantearían la relación entre clases hegemónicas y subalternas en términos de engaños conscientes, es necesario no sólo tener en cuenta los alcances de los cuestionamientos y los cuestionamientos mismos, sino también la reconfiguración en la estrategia de acumulación y la reestructuración de un Estado que debieron llevarse a cabo para regenerar las condiciones para la valorización del capital y cumplir con la necesidad básica de articular a las fracciones de clase en un bloque de poder y operar para desorganizar a los sectores populares.

En otras palabras, el análisis específico de la dinámica cultural, o sea de la manera en que el sistema de prácticas, valores y significados dominantes se fue configurando y reconfigurando en relación con los elementos arcaicos, emergentes y residuales, y pugnando por la integración (neutralización) de lo potencialmente alternativo, debe enmarcarse sí o sí en los alcances de los procesos de reconfiguración política y económica en curso en una etapa de cambios producto de la crisis.

Por otra parte, el recorrido realizado también nos permite no idealizar ese proceso de rearticulación de la clase dominante como bloque en el poder. Como vimos, hay diferencias, críticas y disputas entre los actores y sectores de la burguesía a lo largo de todo el proceso. El ejemplo más claro es *La Nación*. Pero en todo caso hay que ver cómo la crítica se relaja en los momentos más tensos y difíciles (el respaldo a Duhalde al momento de asumir), y al mismo tiempo, como las críticas son más bien en relación a cuestiones de forma. Por dar algunos ejemplos: por cómo se hizo la devaluación, por los gestos más contundentes que habría que hacer hacia el exterior, etc.

Esto habla de una impotencia de proyecto propio por parte del movimiento popular que le hubiese permitido disputar realmente la salida de la crisis.

El otro punto fundamental que permite pensar el trabajo de indagación que realizamos es comprender sobre qué significados, valores y prácticas se puede ejercer esa integración por parte de lo hegemónico. Podemos preguntarnos en todo caso, ¿qué cuestionó la crisis de 2001? O mejor dicho, qué nivel de alternativa generó el movimiento popular en aquel contexto.

Es aquí donde creemos que es fundamental introducir la noción de fenómeno ideológico que aquí pusimos en juego. En buena medida el cuestionamiento del accionar de las organizaciones que responden a los intereses de la clase dominante y en función de ello desplegaron tácticas para superar la crisis por parte del campo popular ha consistido en su falta de coherencia o en su condición de discurso que no se evidenciaba en prácticas concretas. La crítica ideológica entendida ya no como la denuncia de la falta de correspondencia entre discurso y realidad, sino como actividad sistemática que permite reconstruir la relación entre formas simbólicas y relaciones de dominación en contextos determinados permitiría echar luz de una manera más productiva a la dimensión simbólica de la hegemonía, en tanto delimita un campo de acción constituido por los significados (y acciones) que refuerzan o legitiman determinado orden social. Definiendo así una línea de acción simbólica que define una zona mucho menos proclive a ser integrada y neutralizada por lo hegemónico y ofrezca las bases para desarrollar una visión del mundo autónoma (Campione).

En definitiva, se trata de aportar a construir acciones políticas eficaces, puesto que -como señala Theotonio Dos Santos (2006)-, de lo que se trata no es que las clases disputen proyectos dentro del

sistema, sino de que las clases subalternas disputen la hegemonía en la medida en que sean capaces de imponer la lucha entre sistemas. Volviendo al proceso que estudiamos, podemos decir entonces que al no haberse generado las condiciones para que ese nivel de enfrentamiento se desarrolle, la alternativa frente al agotamiento de la convertibilidad y la crisis de legitimidad de las instituciones políticas, provino de la propia clase dirigente.

BIBLIOGRAFÍA

Campione, Daniel (2007); "Gramsci en la América latina actual: hegemonía, contrahegemonía y poder popular", AAVV; *Reflexiones sobre poder popular*, Buenos Aires, Editorial El colectivo.

Dos Santos, Theotonio (2006); *Concepto de clases sociales*, Caracas, El perro y la rana.

García Canclini, Néstor (2002); *Culturas populares en el capitalismo*, México, Grijalbo, (1ª Ed. 1982)

Thompson, John B. (1998); *Ideología y cultura moderna*, México, Universidad Autónoma Universitaria.

Williams, Raymond (1981); *Cultura, Sociología de la comunicación y del arte*, Barcelona, Paidós.

Williams, Raymond (2000); *Marxismo y literatura*, Barcelona, Península, (1º Edición 1977).

ESCRIBIENDO UN “NUEVO NEO-LIBERALISMO”

*José Francisco Puello-Socarrás **

*Tenemos conciencia antes,
Tomamos conciencia después*
Oscar Wilde

Los análisis más acertados en torno a la actual crisis del capitalismo han destacado el carácter complejo, multidimensional y de largo plazo que ésta encarna.

Mientras tanto, las opiniones más difundidas a través de los principales *mass media* alrededor del planeta insisten en la idea que la crisis es simplemente un desarreglo “financiero” (un problema que atañe algunos bancos e instituciones financieras) que sólo afecta a algunos países (los Estados Unidos y Europa).

En la gran mayoría de los casos, estas declaraciones intentan desinformar y, por lo menos, generan la falsa impresión entre la población que la crisis sería ya una cuestión del pasado y que estaríamos *ad portas* de retornar felizmente a “tiempos normales”, en una especie de período post-crisis.¹ Incluso, la tesis cabalgante para América Latina y el Caribe es que aquí prácticamente no ha pasado nada.

Los hechos día a día muestran, por el contrario, el carácter *estructural* de esta crisis y su cuestionamiento integral –aunque no definitivo– al capitalismo como sistema. Tampoco es una coyuntura momentánea. Sus orígenes pueden rastrearse, y sus consecuencias deben proyectarse, en el *largo plazo*. Y, además, habría que analizar la crisis contando con las diferentes dimensiones que ella expresa tanto como la pluralidad de factores interdependientes que siguen convergiendo en su evolución a escala *global*.²

Bajo esta última perspectiva y a pesar de contar con diagnósticos completos y acertados que nos permiten confirmar de estar en presencia simultáneamente de una crisis: a) *económica*, b) *ecológica y ambiental*, c) *energética*, d) *alimentaria*, e) *política* y, desde luego, f) *social*, de largo aliento y que, tal vez como nunca antes en su historia, la profundización de las contradicciones del capitalismo muestra límites infranqueables, en lo que algunos denominan una *crisis civilizatoria o de la civilización*, aún es posible seguir actualizando el panorama.

Dos elementos adicionales convergen hoy por hoy en el escenario más amplio de la crisis pero hasta el momento –pensamos– no han sido lo suficientemente articulados.

* Politólogo de la Universidad Nacional de Colombia, MA en Administración Pública y actualmente estudiante del Doctorado en Ciencia Política de la Universidad Nacional de San Martín (Buenos Aires, Argentina). Miembro investigador del Grupo Interdisciplinario de Estudios Políticos y Sociales, Theseus (Universidad Nacional de Colombia); la Corporación para el Desarrollo de la Investigación Social y la Formación Política, ConCiencia Política (Colombia); la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP (Argentina). Email: josephco@yahoo.com.

1 Krätke, Michael, “Dos años después de la caída de Lehman Brothers: la mano invisible hace señales de despedida” (2010) [disponible en línea: www.sinpermiso.info].

2 Benoit, Bertrand, “US ‘Will Lose Financial Superpower Status,’” *Financial Times* (25 September 2008).

El primero y que ha tenido una relativa mayor difusión en los últimos meses, se refiere a las emergentes crisis de g) las *finanzas públicas*. Aquí los protagonistas son las principales economías y potencias mundiales, de los Estados Unidos al Japón, pasando -como es mundialmente conocido- por los países europeos.³ Los desafíos en este campo profundizan aún más la crisis especialmente en su dimensión económica pero seguramente tendrán efectos determinantes en la evolución de los aspectos políticos y sociales en el corto y mediano plazo (Grecia y Francia, por acercarse a los ejemplos más paradigmáticos).

El segundo, aparentemente menos convocado pero que resultaría tener una importancia crucial para explicar el rumbo futuro de estos acontecimientos es la crisis h) *epistémica*.

Esta última apunta a los estatutos hegemónicos hoy por hoy presentes en la concepción de las ciencias sociales, específicamente los interrogantes que surgen actualmente al interior de la “ciencia económica” (convencional) y que están fuertemente asociados a la crisis del neoliberalismo como referente ideológico y en tanto pensamiento dominante en general del capitalismo contemporáneo.

Por lo menos durante las tres últimas décadas del siglo pasado, las élites globales defensoras del “libre mercado” y de la mal-llamada “globalización” (la expansión capitalista neoliberal) habían disfrutado de una posición cómoda y relativamente indisputada en el marco de la economía política global, más allá de sus lamentables resultados. No hay que olvidar que desde mediados de la década de los 70s y en adelante, el neoliberalismo y sus políticas son la estrategia clave con la cual las clases dominantes han hecho frente a la crisis capitalista de finales de siglo, una situación que – insistiendo en la temporalidad de largo plazo de *esta* crisis - se extiende hasta el presente.

Sin embargo, hoy por hoy, el proyecto neoliberal parecería atravesar por varias dificultades.

El desprestigio en que ha caído el neoliberalismo en los últimos tiempos, primero entre el sector popular pero igualmente entre las clases dirigentes del mundo, parecería indicar que, en principio, los márgenes y sus posibilidades de acción para continuar hacia adelante – y sin mayores tropiezos – con los objetivos que venía buscando a nivel global son cada vez más cuestionables. A pesar de la crisis ideológica del neoliberalismo, sus efectos no serían demasiado contundentes ni tampoco ofrecería mayores argumentos para pronosticar un final de los finales definitivo de su hegemonía. Su destitución en términos concretos y reales aún resulta ser una interrogante y, por el momento, una expectativa demasiado ambigua.

El proyecto neoliberal se ha puesto mejor “entre paréntesis” y se mostraría – dijéramos – “aplazado”, en su versión original, sin llegar a desvirtuarse ni interrumpirse.⁴

Ciertamente, el neoliberalismo actual vendría transitando hacia una versión de nuevo cuño: un *nuevo neoliberalismo* que, en lo fundamental, registra menos rupturas que una continuidad consistente frente a su versión anterior ortodoxa: el viejo y (para hoy) anacrónico “fundamentalismo de mercado”.

De esta manera, las clases hegemónicas esperan estar “mejor preparadas” para asumir las contradicciones propias de *esta* crisis aunque con la esperanza de que las cosas se resuelvan no sólo dentro del mismo marco del capitalismo contemporáneo sino, incluso, sin extralimitar la estrategia neoliberal vigente.

¿EL FINAL DE UNA (FALAZ) DICOTOMÍA? *El Estado y el Mercado como referentes en la crisis*

En primer lugar, la evolución de la crisis ha contribuido a desatar una verdad velada desde hace tiempo pero que durante el período de hegemonía del neoliberalismo ortodoxo, especialmente desde la década de los 80s, había permanecido intacta y se había convertido en una máxima de uso corriente y, hasta cierto punto, casi irrefutable: la irrelevancia del Estado -como institución e institucionalidad- para el funcionamiento del sistema capitalista.

3 Citado por Steger, Manfred y Roy, Ravi, *Neoliberalism. A very short introduction*, New York, Oxford University Press, 2010, p. 1.

4 Thornhill, John, “Sarkozy Sets Out Bigger State Role”, *Financial Times* (25 September 2008).

Durante varios años, la idea de hacer incompatibles y mutuamente excluyentes *Estado* y *Mercado* parecía colonizar políticamente el sentido común de la época en los discursos y en las prácticas.

Las grandes controversias públicas y los debates académicos más sonados del momento fueron ilustrativos. El pensamiento político y económico dominante intentó sistemáticamente ocultar y reproducir alrededor de una dicotomía, en sus propios términos, “insalvable”, la relación: Estado *versus* Mercado. Bajo este credo, el Estado más que contribuir al desarrollo económico (como en la época del industrialismo desarrollista latinoamericano) era un “elefante blanco” –tal como se escribía en el tristemente célebre *Consenso de Washington* de 1989–, es decir, un enorme obstáculo para el crecimiento.

En América Latina y el Caribe este tipo de ideas tuvieron una gran difusión y fueron además de fácil adopción e irreflexivamente acogidas. Se sostuvo por entonces que el primer paso para salir definitivamente del subdesarrollo requería un Estado “mínimo”; desde luego, no se omitieron posiciones que sugerían incluso ir más allá con la idea de un Estado “ultra-mínimo” y la existencia “máxima” de los Mercados.

Aún sin conocer a ciencia cierta qué significaron *los mínimos* (o “ultramínimos”) estatales y si se trataba de reducir el tamaño de las burocracias o disminuir el “intervencionismo” del Estado y la injerencia del Gobierno o evitar una presencia – para algunos - “asfixiante” de las instituciones públicas en el desenvolvimiento de diferentes campos económicos y sociales, las convicciones anti-estadistas estuvieron a la orden del día.⁵

Las tesis anteriores nunca se fundamentaron seriamente. Ni por parte de las teorías y los “científicos” sociales (en su mayoría economistas seguidores de las escuelas neoclásicas anglosajonas y estadounidenses) que animaban ir hasta el fondo del asunto. Tampoco fue demostrada por las dirigencias políticas de la región, varias de las cuales rápidamente se alinearon con el discurso neoliberal como una oportunidad para consolidar el poder político y su poderío económico en la “nueva etapa” globalizadora.

La oleada anti-estadista bajo el eufemismo del *Estado (ultra)mínimo* pretendía, entre otras cosas, la reducción del Estado como la forma más conveniente para garantizar el menor protagonismo estatal y lograr imponer una menor *intervención* de las funciones directivas públicas e institucionales más básicas y acceder finalmente a un espacio de mayor acción para los agentes privados y del mercado, nacionales e internacionales aunque, especialmente, transnacionales.

Pero los últimos acontecimientos de esta crisis y, principalmente, la oleada estatista provocada por los *salvatajes* parece haber destrozado definitivamente la falaz idea y la falsa dicotomía que mantenía la incompatibilidad entre el Estado y el Mercado en el marco del sistema, tesis –dicho sea de paso– que continúa siendo estratégicamente ensalzada por los hoy viejos, anacrónicos y ortodoxos neoliberales como una forma de imponer la superioridad innata y virtuosa de las libertades del mercado. No obstante y muy rápidamente la emergente euforia “pro-estadista” sólo resulta ser tal en su superficie. El fondo del asunto previene que en lo sustancial, las cosas poco han cambiado.

El absolutismo del Mercado sigue siendo central como referente de la organización social dominante en general y, por ahora, las reivindicaciones (incluso, en algunos casos en la forma de reclamos) sobre una “mayor presencia” del Estado deben ser interpretados cuidadosamente y tomando en cuenta este dato primordial.

Ir más allá de lo genérico en este asunto obligaría esclarecer a qué se refiere y qué significa, en medio de esta crisis recordemos, los presupuestos sobre un “regreso de Estado” tanto como el “abandono del Mercado (y sus lógicas)”.

Ante la sensación de caos e incertidumbre fruto de la anarquía de los mercados financieros globales, las acciones realizadas por diferentes gobiernos –inclusive, muchas de ellas coordinadas interestatalmente– parecen haber invertido la antigua percepción negativa sobre el Estado patrocinada por la antigua dicotomía. Ahora, la impresión sobre el Estado sería la de ser un elemento inexcusable para el “orden” y “buen funcionamiento” del capitalismo. Y con seguridad, en medio del paroxismo

5 Scheherazade, Daneshkhu, “IMF Welcomes Step to Reform”, Financial Times (28 September 2008)..

provocado por la crisis el concepto viene revestido de un peligroso sentido soteriológico que no se podría desestimar. Mucho menos cuando hoy por hoy y desde allí se vienen articulado las propuestas de “superación” y “salida” a la crisis, en el esperado relanzamiento de las economías capitalistas.

La explosión del sistema financiero y de las hipotecas subprime en los Estados Unidos entre el 2007-2008, el posterior estallido de la crisis en las finanzas públicas globales en las naciones europeas desde 2009 y la consolidación del recambio doctrinal al interior del pensamiento neoliberal durante el nuevo siglo, son datos que ofrecen una oportunidad para introducir un análisis alrededor de los posibles nuevos presupuestos económico-políticos del proyecto dominante.

LA EMERGENTE CRISIS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS. *Consecuencias económicas y políticas en la relación Estado-Mercado*

La enorme inyección de recursos hacia el sector financiero con la famosa oleada de salvatajes (dirigida casi exclusivamente a poderosos bancos como City Bank y Goldman Sachs, y distintas aseguradoras de la escena global), contabiliza al día de hoy aproximadamente 15 billones de dólares.

Estos hechos –como lo ha puntualizado, entre otros, Michael Krätke– resultan ser “los mayores y más costosos paquetes de rescate, los mayores programas de coyuntura de todos los tiempos capitalistas”⁶ – ratificando contundentemente algo sabido desde siempre pero que estratégicamente había sido ocultado en tiempos más recientes: que sin Estado la lógica de mercado por sí sola sencillamente no funciona.

Paralelamente, la evolución de la crisis en las finanzas públicas –situación estructural que involucra prácticamente a todas las potencias económicas del mundo “desarrollado”-, ha permitido desentrañar en lo concreto cómo los gobiernos en general y los Estados en particular son instrumentos al servicio de las élites financieras y del capital global. Aunque esto ha sido invariablemente así, lo novedoso ahora es la exposición que ha mostrado este ocultamiento, el cual resulta públicamente autoevidente.

Los medidas anunciadas por la Unión Europea, tanto las impuestas por el Fondo Monetario Internacional como las adoptadas motu proprio, respecto a las acciones para enfrentar “los problemas fiscales críticos” en los llamados PIIGS (Portugal, Irlanda, España, Italia y Grecia), en Francia e Inglaterra, situación que muy probablemente se extenderá más allá de las fronteras europeas, resultan ser en este sentido contundentemente reveladoras.

En los casos más publicitados, empezando por el griego - paradigma por excelencia sobre el tipo de acciones “soberanas” y que los gobiernos seguirán como fórmula global para “superar” la crisis⁷ - o el español, dejan notar el dramático contraste existente entre los multimillonarios salvatajes otorgados por los Estados al sistema financiero (que representaría un 25% del PIB mundial circa según el FMI) y el rescate selectivo de poderosos bancos privados vis-à-vis el salvaje ajuste fiscal impuesto a los pueblos a través de los “planes de rescate” –como eufemísticamente los llama el FMI a los “ajustes”- y que no significan otra cosa que la pulverización de las condiciones sociales, de suyo históricamente ya deficientes pero aún más deterioradas después de más de tres décadas de hegemonía neoliberal y más recientemente con los efectos inmediatos de la crisis vía “reducción del gasto social, degradación de las garantías de empleo, descausalización y abaratamiento del despido y freno del gasto público”, entre las consecuencias más conocidas.⁸ Lo anterior sin llegar aún a hablar de la criminalización de la

6 Pronunciamento del vicepresidente chino. Anderlini, Jamil, “China Says West’s Lack of Market Oversight Led to Subprime Crisis”, Financial Times (28 May 2008).

7 Así lo expresaba Edwin Truman del Instituto Peterson de Economía Internacional (recordemos, la institución donde trabaja como investigador John Williamson y que en 1989 organizara las reuniones que dieron luz al Consenso de Washington) a propósito del rol del FMI en Europa ante el Congreso de los Estados Unidos (mayo 20/2010): “El FMI puede ser llamado a cooperar con el ESM [Nota: European Stabilization Mechanism, Mecanismo de Estabilización Europea], utilizando el programa griego como patrón” [Nota: “plantilla”, template] (resalto).

8 Las famosas “reformas estructurales” en este caso incluyen mínimamente “recorte de sueldo de los funcionarios, aumento de la fiscalidad regresiva a través de la subida de impuestos indirectos, rebaja en las pensiones, reducción drástica de organismos administrativos, recorte de la inversión pública, venta al por mayor de empresas públicas y privatización generalizada en la energía y el transporte, liberalización de los servicios”. Baylos, Antonio, “El sindicalismo europeo co-

protesta social y de la represión sistemática desde el aparato estatal, como también lo ilustran hasta la saciedad los acontecimientos de los últimos tiempos en Grecia.

Si se conjugan entonces estos hechos con la magnitud que registra en general la crisis social (desempleo, empobrecimiento y miseria), el panorama resulta ser axiomático sobre las modalidades de gestión de la crisis por parte de las clases dirigentes nacionales y del orden internacional aún imperante.

Aquí la fórmula claramente es doble: por un lado, más Estado para un capitalismo de salvataje y en función del capital financiero y de sus poderosas minorías; y, por el otro, más Estado y un capitalismo salvaje en disfunción de la mayoría de la población. En uno y otro caso, el rol (políticamente selectivo) del Estado resulta indiscutible: parcial y diferenciable a la hora de aplicar las modalidades previstas de “rescates” y justificar su presencia activa, evidentemente, en ambos casos bajo diferentes signos.

La crisis de las finanzas específicamente ha permitido aclarar las diferencias teóricas y, especialmente prácticas, más allá del paroxismo generado por los recientes llamados “pro-estadistas”.

Pero hay que aclarar que - en definitiva - la simpatía pro-estatal nunca ha sido una demanda por la intervención del Estado. Se trata en realidad de meros reclamos por una mayor regulación estatal, cuestiones muy distintas pero que generalmente se confunden.

Así “el (supuesto) regreso al Estado” como referente económico-político, desde este punto de vista, no implicaría la convicción de reinstalar la “acción del Estado” en la economía política global actual, una suerte de intervencionismo estatal en detrimento del decaído “libertinaje” de los mercados. Hay que interpretarlo, mejor, como la institucionalización de la no-acción estatal (ésta última difiere de la simple inacción estatal), si se quiere, la presencia quirúrgica, selectiva y “complementaria” del Estado que evite a toda costa que su eventual protagonismo reemplace u obstruya la mayor libertad para los mercados.

CONTRA LA ORTODOXIA Y EL ‘LAISSEZ-FAIRE’. *Del libertinaje a la libertad de los mercados*

Como lo proponemos, los debates que se desarrollan actualmente en torno a las convulsiones financieras tienen efecto sobre el sentido común frente a las décadas anteriores.

Las creencias más convencionales defensoras de la lógica de mercado como una “panacea” aparentemente habrían caído en desuso. Pero esta impresión que hace carrera en buena parte de los discursos actuales resulta ser todavía muy prematura o, en todo caso, demasiado superficial como para confirmarla categóricamente. Aunque bien es cierto que en alguna medida la base ideológica del “liberalismo de mercado” atraviesa hoy por un trance y presenta fisuras.

El señalamiento de los vicios in pectore del mercado y las reivindicaciones emergentes sobre las “virtudes” del Estado, sin embargo, han contribuido a generar varias confusiones. Empezando por las posibilidades realmente disponibles para superar efectivamente la crisis pero, sobre todo, en relación con la idea del progresivo e irreversible desmonte del neoliberalismo, universalmente asociado al dogma del libre mercado y, en particular, aquella “versión” que lo identifica con un capitalismo de *laissez-faire*.

Para 2009 y casi sin excepciones, ningún representante de los Estados o de los Gobiernos en el planeta había evitado hacer algún tipo de declaración en contra del neoliberalismo, aun cuando la mayoría de ellos fungieron como asiduos defensores y fieles gestores de esa dogmática. La retórica que emergía había identificado al neoliberalismo como el culpable de los problemas derivados de la caída del sistema financiero a nivel global y sus consecuencias.

Algunas declaraciones de ese momento resultaron ser bastante dicientes.⁹ Veamos.

Peter Steinbrück, Ministro de Finanzas de Alemania planteaba por esos días que la creencia de los Estados Unidos en “el capitalismo de *laissez-faire*” –un sistema que en su opinión estaba “colap-

mienza a sacar sus propias conclusiones del caso griego” (2010) [disponible en línea: www.sinpermiso.info; visita del 9 mayo 2010].

9 Todas ellas citadas por Chwieroth, Jeffrey, *Capital ideas. The IMF and the rise of financial liberalization*, Princeton, Princeton University Press, 2010, pp. 263 y ss.

sando”- y “la noción según la cual los mercados deberían ser liberados de la regulación tanto como *fuera posible*” eran “*argumentos errados y peligrosos*”.¹⁰ Convergiendo con varias opiniones de altos funcionarios del FMI, como Horst Kohler, para quien los mercados financieros globales se habían convertido en una especie de “monstruos”, Steinbrück proponía “civilizarlos” a través de la decidida acción de los gobiernos.

Por su parte, el primer ministro británico, Gordon Brown, proponía que el año 2008 “finalmente marcaba el final de la vieja época del dogma del libre mercado desenfrenado”, cuestionando las asunciones intelectuales prevalecientes y las teorías sobre la eficiencia y la racionalidad de los mercados.¹¹ El Presidente de los Estados Unidos lo secundaba aunque ambiguamente. Barack Obama proponía en su discurso inaugural: “La pregunta que hay ante nosotros no es si el mercado es una fuerza benéfica o enferma. Su poder para generar riqueza y ampliar la libertad resulta incomparable. Pero esta crisis nos ha recordado que sin un ojo vigilante, el mercado puede salirse de control...”.¹²

El presidente francés, Nicolás Sarkozy, decía en el mismo sentido: “la idea del mercado omnipotente sin reglas ni intervención política es descabellada. La autorregulación se acabó. El *laissez-faire* se acabó. La omnipotencia del mercado que siempre tiene la razón, se acabó”. El premier francés convocaba enseguida a los líderes mundiales hacia la construcción de un “capitalismo regulado... de una manera tal que permita a las ideas de Europa florecer”.¹³ Su compatriota, Dominique Strauss-Kahn, quien suena como posible sucesor de Sarkozy y hoy director del Fondo Monetario Internacional, entidad identificada con el neoliberalismo ortodoxo reconocía en ese mismo año (2008): “Es gracias a que no hubo regulaciones o controles, o no hubo suficientes regulaciones o controles que esta situación afloró. Tenemos que... regular, con gran precisión, las instituciones financieras y los mercados”.¹⁴ Este año (2011) en una conferencia dictada en la Universidad George Washington, Strauss-Kahn proponía algo herético para el sentido común de un par de década atrás: “el Consenso de Washington es ahora historia”. Antes de abandonar el auditorio sentenciaba que el péndulo en las nuevas políticas económicas giraría “del mercado hacia el Estado”.¹⁵

Incluso se escucharon voces señalando que “el consenso occidental en la relación entre el mercado y el gobierno debería ser revisada. En la práctica, ella tiende a sobreestimar el poder del mercado y subvalorar el papel regulador del gobierno y esta concepción distorsionada está en la raíz de la crisis subprime”.¹⁶

En contraste con la sabiduría convencional del pasado, la mayoría de líderes globales “censuraban” los vicios de los mecanismos de Libre Mercado. Pero también - y al mismo tiempo - denunciaban la inevitable necesidad del Estado y/o del Gobierno (dos cuestiones que son conceptualmente diferentes), sin embargo, siempre bajo el argumento de la regulación estatal.¹⁷

10 Benoit, Bertrand, “US ‘Will Lose Financial Superpower Status,’” Financial Times (25 September 2008).

11 Pickard, Jim, “Brown Promises Stability in Difficult Year”, Financial Times (January 1, 2009).

12 Citado por Steger, Manfred y Roy, Ravi, *Neoliberalism. A very short introduction*, New York, Oxford University Press, 2010, p. 1.

13 Thornhill, John, “Sarkozy Sets Out Bigger State Role”, Financial Times (25 September 2008).

14 Scheherazade, Daneshkhu, “IMF Welcomes Step to Reform”, Financial Times (28 September 2008).

15 FMI, “Global Challenges, Global Solutions”. Discurso pronunciado por Dominique Strauss-Kahn, Director del FMI en la Universidad George Washington (Washington, Abril 4, 2011), en <<http://www.imf.org/external/np/speeches/2011/040411.htm>>.

16 Pronunciamiento del vicepresidente chino. Anderlini, Jamil, “China Says West’s Lack of Market Oversight Led to Subprime Crisis”, Financial Times (28 May 2008).

17 Susan Watkins ha caracterizado actualmente un tránsito hacia un “liberalismo regulado”, una inflexión pero no una ruptura del neoliberalismo (ortodoxo). Watkins, Susan, “Arenas movedizas”, *New Left Review* No. 61, 2010. Aquí reconocemos esta tendencia concreta bajo el nombre de nuevo neoliberalismo, continuidad (heterodoxa) pero de nuevo cuño frente a su versión ortodoxa. Cfr. Puello-Socarrás, José Francisco, “¿Reescribiendo el Neoliberalismo? Déficits, Ajustes, Hegemonía entre otras novedades de la actual Crisis Capitalista”, VI Coloquio de la Sociedad Latinoamericana de Economía Política y Pensamiento Crítico (SEPLA). Montevideo (Uruguay), 29-30 de septiembre y 1º octubre de 2010.

El Estado y/o los gobiernos fueron efectivamente los instrumentos por excelencia para enfrentar los acuciantes problemas financieros de la crisis, la vía determinante para acceder al funcionamiento “normal” del sistema hacia el futuro, en lo que interpretan muchas voces como un “nuevo período”.

Ahora bien, ¿cuál puede ser el significado de todas estas declaraciones, realizadas –queremos remarcarlo– por la mayoría de los principales líderes del mundo capitalista? ¿Se trata de un giro ideológico que supone el tránsito hacia una nueva época distinta de aquella del dogma del mercado?

Algunas de las posibles respuestas sólo son accesibles cuando se examina la virtual metamorfosis del neoliberalismo, ideológica y teóricamente hablando, en medio de la actual crisis.

¿VINO VIEJO EN NUEVOS ODRES? *El resurgimiento del neoliberalismo bajo una versión heterodoxa*

Decíamos que en esta crisis confluye adicionalmente otra relacionada con la redefinición del campo intelectual en los referentes para el conocimiento y prácticas sociales en general y en la ciencia económica en particular que hemos denominado crisis epistémica.

Diferentes círculos académicos vienen insistiendo en la obsolescencia anacrónica y la incapacidad de la ciencia económica estándar para aproximar la compleja realidad del mundo social con algún tipo de verosimilitud. Uno de los hechos más dicientes al respecto tiene que ver con el debate académico a propósito de la incapacidad de los economistas (convencionales) para anticipar esta crisis. Para hoy, la denuncia en torno al estilo dominante de la ciencia económica resulta muy común, a diferencia del pasado donde declaraciones de este tipo podían resultar heréticas y, en el marco del pensamiento único, hasta inconcebibles.

Huelga decir que el formato de esta “ciencia económica” es la que establece fuertes lazos de hermandad con el paradigma de conocimiento proveniente de las escuelas de pensamiento neoclásicas. Su papel protagónico no se ha limitado a una cuestión intelectual o erudita en la producción de conocimiento. Más importante aún ha sido el papel jugado en las conceptualizaciones sobre los diferentes programas de políticas públicas (económicas y sociales) a nivel global y local, y como clave para la dirección ideológica de las visiones dominantes sobre el orden social alrededor del proyecto político á la neoliberal, por lo menos, durante el último cuarto del siglo XX.

Bien es cierto que esta crisis epistémica, por una parte, “inaugura un nuevo ciclo de crítica intelectual y política” y “reabre con fuerza la discusión sobre las alternativas al capitalismo” confrontando al pensamiento único instalado por el imperialismo ejercido por la ciencia económica tradicional en buena parte del conocimiento social.¹⁸ Pero también, y por otra parte, las críticas al paradigma de mercado y sus principios básicos más axiomáticos coexisten -tal vez muy cómodamente- con la opción de una reformulación estratégica en un horizonte intelectual al interior del neoliberalismo mismo.

Las “alternativas” hegemónicas siguen corroborando que sus salidas serán necesariamente con más de lo mismo, tal y como sucede con los repertorios expuestos para las otras dimensiones de la actual crisis.

Si esto se analiza en detalle y en perspectiva teórica, epistemológica e histórica, el ambiente de rechazo generalizado que parecía visibilizarse con la explosión de la crisis financiera desde 2007 y el cual, por lo menos en su retórica –veíamos-, denigraba del “capitalismo salvaje” y del modelo neoliberal –debates ya difundidos ampliamente en diferentes círculos académicos e intelectuales, inclusive, entre aquellos que se consideran “neoliberales críticos al neoliberalismo”-, indicaría que se trata de críticas hacia un tipo de neoliberalismo, el “ortodoxo”, versión típica de las formulaciones de los 90s, no frente a las realidades hoy emergentes que siguen siendo ensambladas por posturas tan o más neoliberales que en el pasado (aunque “heterodoxas”, en el sentido de una heterodoxia neoliberal).

18 Estrada Álvarez, Jairo, “El significado de la crisis” en Op. Cit., 2009, p. 11.

Peor aún: en esta “controversia anti-neoliberal”, paradójicamente el saldo para el paradigma en general parece haber salido relativamente fortalecido.¹⁹

El “retorno al Estado”, celebrado espectacularmente y mediatizado a raíz de los *salvatajes* realizados por diferentes gobiernos, empezando por el de los Estados Unidos, anticipaba -muy prematuramente, insistimos- la capitulación de la era neoliberal. Y, en ciertos casos, prevenía sobre el resurgimiento de *otras* formas institucionales en la conducción económica o un nuevo modelo de Desarrollo económico. La idea de que el neoliberalismo pasaba a la Historia se difundió con bastante fuerza.²⁰

Desafortunadamente los sucesos más recientes prueban exactamente lo contrario.

Los datos *contrario sensu* siguen validando la consolidación de un giro *al interior* del neoliberalismo, adoptado en los años recientes y que logra adaptarse magistralmente a los nuevos sucesos que plantea esta época.

Este tránsito hacia una versión renovada en la hegemonía neoliberal posee diferentes antecedentes tanto en lo teórico como en lo práctico.

Sin embargo, el hecho más significativo en este desdoblamiento hacia un *nuevo neoliberalismo* observa una circulación entre las élites dominantes que insisten en consolidar sus posiciones bajo una crítica “en positivo” del mercado, a diferencia de las décadas anteriores cuando las tesis promovidas por la - hoy considerada - “ortodoxia neoliberal”, circulaban fluidamente profesando sin mayores apostillas la infalibilidad de los automatismos del mercado en detrimento de la acción estatal.

Vale la pena recordar que este tipo de “críticas” ya habían sido formuladas tiempo atrás por el mismo pensamiento y teoría neoliberales aunque bajo una versión “heterodoxa”.

Las generaciones de las escuelas neoclásicas austriacas (Hayek y Mises) y los llamados ‘ordoliberales’ del neoliberalismo alemán (como Röpke) principalmente, enfrentadas al pensamiento convencional del *laissez faire*, fundamentaron los peligros que representaría llevar al extremo el *principio de la competencia* (pura o perfecta), denunciando cómo la *competencia* resultaba ser más bien una fuerza des-unificadora que aglutinadora en términos sociales y un elemento que eventualmente podría poner en riesgo al sistema (capitalista). Inclusive, teóricamente hablando, ponían en duda la superioridad abstracta del mercado frente a la acción estatal. Eso sí, nunca avalaron que en términos de la realidad concreta fuese posible encontrar una burocracia estatal tal que pudiera aplicar una planificación desde el Estado con mejores resultados de los que se derivarían de los mecanismos de mercado.

Hoy las concepciones comprometidas con el mercado “a ultranza” parecerían extinguirse. Incluso - en su franco declive - son tildadas de anacrónicas. Mientras tanto circulan vigorosamente aquellas que se sintonizan con la perspectiva de “las imperfecciones del mercado” pero que no discuten su preeminencia como dispositivo de organización social.

En este panorama, la cuestión estatal, puesta en entredicho solamente un par de décadas atrás, encuentra una oportunidad para re-significarse.

Pero aún en plena crisis este proceso no se da en abstracto ni en el vacío. Se desarrolla adquiriendo un mínimo de consistencia, en medio de la relación de fuerzas efectivas en la sociedad actual. Tanto la retórica como los factores reales de poder neoliberales, si bien se encuentran ante el hecho de estar cada vez más cuestionados (¡por la realidad misma y no sólo por la teoría!), aún ocupan un lugar privilegiado para imponer ciertos criterios. Es un error pretender que la espontaneidad de esta crisis conducirá inevitablemente hacia algún resultado, mucho menos previamente establecido.

19 Esto incluiría parte del denominado “giro a la izquierda” en América Latina y los modelos “neo-desarrollistas”, en nuestro concepto, giros heterodoxos en el neoliberalismo, nuevos neoliberalismos en el cual Brasil – entre otros - resulta un caso paradigmático así como las decisiones que han venido implicando la intervención gubernamental en los países centrales.

20 Me refiero, por ejemplo, al “neokeynesianismo” o la nueva síntesis neoclásica y, en general, a los fundamentos esencialmente neoliberales (de núcleo duro) de propuestas que algunos conciben como “post” neoliberales – además de ciertas visiones sobre el neodesarrollismo - tales como el Post-Consenso de Washington o el Consenso de Barcelona de Stiglitz, incluida la propuesta de Bresser-Pereira. Cfr. Puello-Socarrás, José Francisco, Nueva Gramática del Neo-liberalismo. Itinerarios teóricos, trayectorias intelectuales, claves ideológicas, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, 2008.

Por ello, como lo desarrollamos anteriormente, la “activa” presencia del Estado y de los gobiernos en la crisis y especialmente con ocasión de los salvatajes es un claro ejemplo de cómo la presencia estatal (en su versión regulativa), actualmente favorable, tiene como fin garantizar el “buen funcionamiento” de los mercados -para el caso, el mundo financiarizado- animando la creación de nuevas estructuras (mercados) y, fundamentalmente, fomentando las fuerzas de mercado; un énfasis en la reproducción sin restricciones de las lógicas mercantiles más que en la producción –siempre limitada- de este tipo de “espacios”.

Estas situaciones vienen siendo traducidas contemporáneamente de manera muy consistente en diferentes realidades concretas, institucionales y sociales.²¹

La arquitectura del régimen neoliberal además de permanecer relativamente intacta desde la década de los 90s (sobre todo, en lo que hace referencia al régimen monetario), se ha venido reforzando con las nacientes asociaciones público-privadas ó también denominadas “públicas no-estatales” y el “tercer sector”, la propagación del *entrepreneurship* (espíritu empresarial, emprendimiento) en las políticas públicas (especialmente, en las sociales); el papel empresarial del Estado; y la instalación de cuasi-mercados en la provisión de bienes públicos, entre otras tantas versiones emergentes queazonadas con argumentos de “tercera vía” pretenden superar las antiguas rígidas - y ahora incómodas - dicotomías: “Estado ó Mercado”, “Público ó Privado”, girando expresamente hacia el eje de lo público y estatal, sin que ello signifique poner en peligro el ensamblaje del proyecto neoliberal ni de la preponderancia del mercado.²² Al contrario.

Debe quedar en claro que ninguno de los neoliberalismos, ortodoxo o heterodoxo, viejo o nuevo, son anti-estadistas por definición. Sí, declarados anti-intervencionistas y en contra de la posibilidad de una economía planificada (centralmente). Nunca han discutido la necesidad de una economía dirigida, si se quiere regulada, cuestiones que desde luego difieren.

Estas “nuevas ideas” formuladas y auspiciadas en las prácticas institucionales recientes tienen origen a partir de teorías económicas y políticas vinculadas con la renovación de las viejas posturas del ideario neoliberal en las esferas intelectuales dominantes.

En *economics*, el nuevo institucionalismo económico (NIE) á la Douglass North hasta la nueva microeconomía y, en versión latinoamericana, el neo-estructuralismo del tipo Bresser-Pereira e igualmente en la *political science* usamericana convencional, influyentes pensadores y corrientes académicas no ocultan su desconfianza frente al “extremismo doctrinario” de las posturas ortodoxas del neoliberalismo en estos temas pero tampoco disimulan su fidelidad igual de dogmática hacia la ideología neoliberal, si bien “heterodoxa”, y siguen animando sus referentes intelectuales sin que para ello haya sido necesario replantear radicalmente el horizonte de la mediación intelectual y política visto en las últimas décadas.²³

21 “(...) esta forma de reconocimiento del rol de las instituciones no cambia en nada la repetida tesis que postula a la política de liberación de los mercados como la que permite el crecimiento económico y la reducción de la pobreza. Este tipo de planteo... teórico (...) significa una renovación del pensamiento ortodoxo que completa la ‘renovación neoclásica’ iniciada en los años setenta...”. Marques Pereira, Jaime, “Teoría económica y credibilidad de la política anti-cíclica. La distribución del ingreso y los límites al crecimiento económico” en Lo Vuolo, Rubén, La credibilidad social de la política económica en América Latina. Buenos Aires, Miño y Dávila Editores, 2006, p. 146.

22 Si se vinculan las declaraciones que hemos seleccionado por parte de algunos de los principales líderes políticos mundiales y las declaraciones representativas del Foro de Davos de los últimos años (2010 y 2011) queda claro que se intenta forzar un tránsito hacia una alternativa que recomponga el viejo neoliberalismo e instale uno de nuevo cuño, de impronta menos usamericana y más europea, como lo dejó planteado el presidente francés Nicolás Sarkozy. Desde el punto de vista teórico, el llamamiento del nuevo neoliberalismo –entre muchas cosas- se sustenta en frases como: “Ni Estado ni Mercado” (Ostrom) que sugiere una combinación de ambas esferas pública y privada (por ejemplo, estructuras públicas no estatales) pero que en este “tercer dominio” funcionen bajo lógicas y dinámicas de mercado. Cfr. Ostrom, Elinor, “Neither Market nor State: Governance of common-pool resources in the Twenty-First Century”, Conference paper, International Food Policy Research Institute, Washington D.C., 2 de junio de 1994.”

23 La ‘cientista política’ hayekiana, Elinor Ostrom – lo decíamos - es un ejemplo sobre el particular. Ostrom fue laureada con el último premio Nobel de Economía (2009) y, además de ser la primera mujer en ganar esta distinción también es la primera “cientista social” no economista en hacerlo. No sería demasiado exagerado especular la apuesta de reconstruir un neo-imperialismo de la economía aunque ahora en torno al neoliberalismo de nuevo cuño que intenta ejercer una influen-

En rigor, el tránsito aludido no se ha logrado introduciendo matices en el pensamiento neoliberal sino por la vía de la radicalización y profundización de sus principios esenciales y, por decirlo de alguna manera, recobrando sus “raíces”.

Esta renovación propone un nuevo neoliberalismo que, en lo esencial, resultaría estar “mejor preparado” –política, ideológica y epistemológicamente– para los desafíos emergentes del nuevo milenio desde las necesidades replanteadas actualmente por la hegemonía y claramente bajo la impronta neoliberal.

A medida que se desarrolla esta crisis, el abandono de los conceptos centrales y de las convicciones ideológicas más enraizadas del neoliberalismo ha permanecido fuera de discusión. Ni siquiera en los momentos más críticos. Es más. Las recientes coyunturas han resultado propicias para que la plataforma neoliberal siga su curso, rectifique y ratifique su proyecto hegemónico. Eso sí, cada vez cuenta con menores márgenes de acción conforme las contradicciones igualmente se hacen más insostenibles.

Hablar necesariamente de un relevo paradigmático en las ideas (o teorías) económicas o una suerte de cambio sustancial en los perfiles de la conducción de las políticas globales y en los asuntos públicos bajo un nuevo tono como resultado espontáneo de la crisis no es una posibilidad ni tiene sustento alguno en las realidades que se desarrollan en esta crisis, por lo menos, desde los centros del poder.

Estos elementos de análisis desde el pensamiento convencional prevendrían sobre una metamorfosis en y dentro del neoliberalismo y el abandono (relativo) del neoliberalismo “viejo” y ortodoxo hacia otro renovado como una tesis de trabajo (intelectual y, desde luego, político).

Cualquier intento por hacer aparecer un hipotético resurgimiento keynesiano o un retorno al estatismo bajo una forma no-neoliberal carecería por el momento de validez.²⁴

BIBLIOGRAFÍA

Anderlini, Jamil, “China Says West’s Lack of Market Oversight Led to Subprime Crisis”, *Financial Times* (28 May 2008).

Baylos, Antonio, “El sindicalismo europeo comienza a sacar sus propias conclusiones del caso griego” (2010) [disponible en línea: www.sinpermiso.info; visita del 9 mayo 2010].

Benoit, Bertrand, “US ‘Will Lose Financial Superpower Status,’” *Financial Times* (25 September 2008).

Chwieroth, Jeffrey, *Capital ideas. The IMF and the rise of financial liberalization*, Princeton, Princeton University Press, 2010.

Estrada Álvarez, Jairo (comp.), *Crisis capitalista. Economía, política y movimiento*, Bogotá, Espacio Crítico – Centro de Estudios, 2009.

Krätke, Michael, “Dos años después de la caída de Lehman Brothers: la mano invisible hace señales de despedida”, 2010 [disponible en línea: www.sinpermiso.info].

Krätke, Michael, “La tercera etapa de la Gran Crisis: Grecia está en todas partes”, 2010 [disponible en línea: www.sinpermiso.info].

Marques Pereira, Jaime, “Teoría económica y credibilidad de la política anti-cíclica. La distribución del ingreso y los límites al crecimiento económico” en Lo Vuolo, Rubén, *La credibilidad social de la política económica en América Latina*. Buenos Aires, Miño y Dávila Editores, 2006.

Ostrom, Elinor, “Neither Market nor State: Governance of common-pool resources in the Twenty-First Century”, Conference paper, *International Food Policy Research Institute*, Washington D.C., 2 de junio de 1994.

cia epistémica e ideológica en el marco de las ciencias sociales contemporáneas, desde luego, incluida la Ciencia Política convencional. Puello-Socarrás, José Francisco (2009) “El NOBELiberalismo”, [disponible en línea: www.colombiadestdefuera.wordpress.com; visita del 13/05/10]. Para un análisis sobre estos aspectos en el marco de la Politología (filosofía y ciencia política), cfr. Puello-Socarrás, José Francisco, “La Miseria de la Politología. Trayectoria histórica, perspectivas políticas y proyecciones sociales”. América Latina. Revista del Doctorado en Procesos Sociales y Políticos en América Latina (Santiago de Chile: Universidad ARCIS) No. 9, 2010.

24 Lo anterior sin minimizar que, al mismo tiempo, avanzan proyectos alternativos que potencian en adelante nuevas configuraciones que no sólo enfrentan la coyuntura neoliberal sino también se contraponen a las estructuras del sistema en general, en lo que denomino preliminarmente proyectos a) anti-neoliberales (que suponen medidas de resistencia al modelo) y b) contra-neoliberales (de desmonte del neoliberalismo y construcción de alternativas).

Pickard, Jim, "Brown Promises Stability in Difficult Year", *Financial Times* (January 1, 2009).

Puello-Socarrás, José Francisco, "La Miseria de la Politología. Trayectoria histórica, perspectivas políticas y proyecciones sociales". *América Latina. Revista del Doctorado en Procesos Sociales y Políticos en América Latina* (Santiago de Chile: Universidad ARCIS) No. 9, 2010.

Puello-Socarrás, José Francisco, "¿Reescribiendo el Neoliberalismo? Déficits, Ajustes, Hegemonía entre otras novedades de la actual Crisis Capitalista", VI Coloquio de la Sociedad Latinoamericana de Economía Política y Pensamiento Crítico (SEPLA). Montevideo (Uruguay), 29-30 de septiembre y 1º octubre de 2010.

Puello-Socarrás, José Francisco, "El NOBELiberalismo", 2009 [disponible en línea: www.colombiadesdeafuera.wordpress.com].

Puello-Socarrás, José Francisco, *Nueva Gramática del Neo-liberalismo. Itinerarios teóricos, trayectorias intelectuales, claves ideológicas*, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, 2008.

Scheherazade, Daneshkhu, "IMF Welcomes Step to Reform", *Financial Times* (28 September 2008).

Steger, Manfred y Roy, Ravi, *Neoliberalism. A very short introduction*, New York, Oxford University Press, 2010.

Thornhill, John, "Sarkozy Sets Out Bigger State Role", *Financial Times* (25 September 2008).

Watkins, Susan, "Arenas movedizas", *New Left Review* No. 61, 2010.

LAS POLÍTICAS FUNDACIONALES DEL MODELO POST-CONVERTIBILIDAD

por Gastón Ángel Varesi *

1. INTRODUCCIÓN

El análisis del *modelo de acumulación* requiere, desde nuestro enfoque teórico-metodológico, el abordaje de tres núcleos fundamentales: las políticas económicas, las variables económicas (de desempeño y estructurales) y las fracciones de clases, observando sus relaciones de fuerzas. En este sentido, podemos hablar de modelo de acumulación cuando es posible identificar regularidades tanto a nivel estructural como a nivel de las políticas, que definen las “reglas de juego” y marcan el campo de acción de los agentes, encuadrados estos en una relación de fuerzas particular. En este sentido, las políticas, en tanto intervención estatal, son claves para la puesta en marcha del modelo ya que modifican las variables de desempeño de la economía (aquellas alterables en el corto plazo) y establecen modificaciones en las posibilidades de los agentes de apropiarse del valor socialmente producido. A su vez, en el modelo de acumulación se manifiestan elementos sedimentados de las lógicas previas de modelos (y regímenes) de acumulación anteriores observables en las variables económico-estructurales y por esto no puede ser reducido a las políticas. Finalmente, las fracciones de clase se encuentran enmarcadas tanto por las condiciones estructurales como por las políticas que establecen el marco en el cual desarrollarán sus estrategias de acumulación a la vez que intentan incidir y condicionar las políticas.

El presente trabajo se propone realizar una aproximación al modelo de acumulación post-convertibilidad a través de su dimensión superestructural: las políticas económicas. Esta entrada analítica nos permitirá investigar cómo la acción estatal instaaura, a través de un conjunto de políticas fundacionales, un momento de ruptura que marca el comienzo de un nuevo modelo de acumulación. En este sentido, caracterizaremos las políticas y percibiremos su impacto en las variables económicas.

En primera instancia realizaremos una síntesis de la crisis del modelo de la convertibilidad con el fin de generar el marco para la presentación de las principales políticas constitutivas del modelo de acumulación post-convertibilidad. En este camino, analizaremos un conjunto de políticas fundacionales que constituyeron un punto de inflexión dando lugar a un nuevo modelo de acumulación, que presenta rupturas y continuidades respecto del modelo de los 90, y que se vincularon a cambios particulares en la correlación de fuerzas, definiendo un reparto diferencial de cargas y beneficios. Dichas políticas conformaron un elemento central en la gestación de un sistema de transferencias de recursos que, movilizado desde el Estado, se orientó a organizar un nuevo momento de convergencia entre las distintas fracciones de clase en el marco de una nueva correlación de fuerzas.

* Sociólogo (UNLP). Profesor adjunto de “Hegemonía, intelectuales y clases sociales” FTS-UNLP. Becario del CONICET dirigido por Ana Castellani y co-dirigido por Aníbal Viguera, en el IdIHCS. Coordinador del equipo de investigación sobre Estructura de clase, modelo de acumulación y políticas económicas de la FISyP. Miembro del GT sobre Economía Mundial, Economías Nacionales y Crisis Capitalista de CLACSO. Correo: gastonvaresi@hotmail.com.

2. EL FIN DEL MODELO DE LA CONVERTIBILIDAD

El modelo de acumulación actual tiene su origen mismo en el contexto de crisis integral que marcó el agotamiento del modelo de la convertibilidad (1989-2001), el cual encarnó la forma más acabada de aplicación de las reformas neoliberales como profundización de la ofensiva del capital efectivizada a partir del golpe de Estado de 1976. Ante los crecientes signos de agotamiento del modelo de la Convertibilidad, se fue generando una fractura de intereses entre distintas fracciones del capital que buscaban mejorar su capacidad de apropiación del valor socialmente producidos en base a dos propuestas divergentes de salida (Basualdo, 2001; Castellani y Szkolnik, 2005; Schorr y Wainer, 2005). Dichas propuestas se relacionaban con las diferentes posiciones ocupadas en la estructura y con las estrategias de acumulación de las distintas fracciones del capital. Unos procuraban la devaluación, aglutinando al gran capital productivo en general, y dentro del mismo particularmente a aquellos orientados a la exportación, buscando mejorar su competitividad y capacidad de inserción en el mercado mundial, así como valorizar las ingentes masas de capitales que mantenían fugadas en el extranjero. Por otra parte, el capital financiero y las empresas de servicios privatizadas, exigían la dolarización, principalmente para mantener el valor de sus activos en dólares y garantizar la perpetuación de los beneficios de la convertibilidad de la moneda, como el envío de remesas dolarizadas al exterior y la existencia del seguro de tipo de cambio que la convertibilidad implicaba.

La capacidad de la propuesta devaluacionista de construcción de alianzas más amplias (Castellani y Szkolnik, 2005) y las limitaciones objetivas del proyecto dolarizador por las restricciones de conseguir las divisas necesarias en un contexto de crisis integral, sumado al desenvolvimiento efectivo de las variables económicas afectadas por la vulnerabilidad externa, favorecieron la salida devaluacionista. Esta salida marcó el inicio de un nuevo modelo que expresó diversas continuidades y rupturas con el anterior, rearticulando agentes y políticas de manera singular.

3. LAS POLÍTICAS FUNDACIONALES DEL MODELO POST-CONVERTIBILIDAD

La salida devaluacionista se articuló con un conjunto más amplio de políticas que fueron claves en la gestación del modelo post-convertibilidad en tanto instauraron nuevas reglas de juego delimitando variaciones en el campo de acción de los agentes económicos, los cuales se relacionaron conflictivamente con las mismas y entre sí, en la disputa del excedente económico.

El modelo post-convertibilidad comienza a configurarse a partir de *seis políticas fundacionales*¹:

1. la devaluación;
2. la implementación de retenciones a la exportación;
3. la pesificación asimétrica de deuda privada;
4. el “salvataje” al capital financiero;
5. el *default* ;
6. el congelamiento y renegociación de tarifas.

Teniendo en cuenta que el *default* ya había sido establecido el 23 de diciembre de 2001, las restantes cinco políticas fundacionales fueron perfiladas a partir de la *Ley de Emergencia Pública y Reforma del Régimen cambiario* n° 25.561 promulgada el 6 de enero de 2002. Un análisis de esta ley parece necesario para aportar a la comprensión del actual modelo de acumulación debido al profundo alcance de las políticas en ella consignadas. La ley declara en su artículo 1° “la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria” (Ley n°25561, art. 1) delegando amplios atributos al poder ejecutivo con los fines explícitos de:

1. Proceder al reordenamiento del sistema financiero, bancario y del mercado de cambios.
2. Reactivar el funcionamiento de la economía y mejorar el nivel de empleo y de distribución de ingresos, con acento en un programa de desarrollo de las economías regionales.

¹ Estas políticas aparecen presentadas, no por un orden cronológico sino por un orden lógico con el fin de estructurar la exposición de sus impactos.

3. Crear condiciones para el crecimiento económico sustentable y compatible con la reestructuración de la deuda pública.

4. Reglar la reestructuración de las obligaciones, en curso de ejecución, afectadas por el nuevo régimen cambiario.

3.1. Devaluación y tipo de cambio real

La devaluación, consignada en el artículo 2° de la Ley de Emergencia, generó un tipo de cambio internamente competitivo que dio lugar a la dinamización de las exportaciones y, a través de su gravamen mediante retenciones y el aumento de la recaudación tributaria, permitió la recomposición de las cuentas públicas. La recuperación económica ha conllevado un aumento de la producción manufacturera, impulsada por la dinámica exportadora e incluyendo un fenómeno periférico de sustitución de importaciones producto de la protección que generó la modificación del tipo de cambio al aumentar el costo de las importaciones. Por otra parte el efecto inflacionario ligado a la devaluación redujo sustancialmente el salario real, y junto al congelamiento relativo de las tarifas de servicios, los elevados precios de los *commodities* y el nuevo tipo de cambio, permitieron a los agentes productivo-exportadores generar elevados márgenes de ganancia y recuperar niveles de actividad económica. Los gobiernos post-convertibilidad han desarrollado una política activa para mantener el tipo de cambio competitivo y alentar esta vía de expansión económica a partir del crecimiento de las exportaciones.

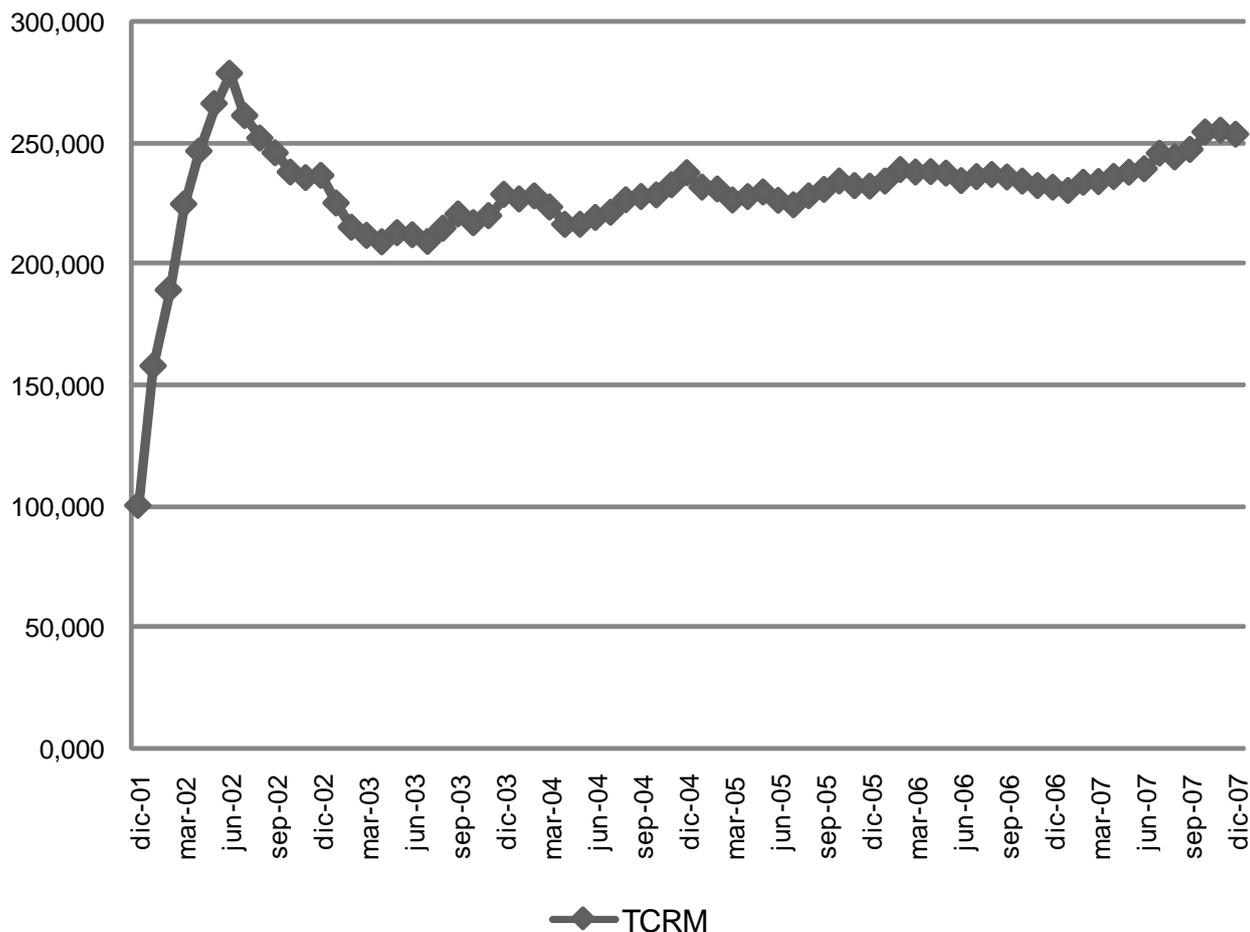
Una vía de abordaje de las modificaciones en el tipo de cambio puede realizarse a través del Tipo de Cambio Real Multilateral (TCRM). Como señala el Banco Central de la República Argentina (BCRA, 2005) el TCRM es el precio relativo de los bienes y servicios de una economía con respecto a los de un grupo de países con los cuales se realizan transacciones comerciales. Si bien comúnmente se observa la variación nominal del tipo de cambio respecto del dólar y la variación real de tipo de cambio real respecto de la moneda e inflación estadounidense, estos indicadores explican sólo una pequeña parte de los cambios en la competitividad de la economía argentina, ya que el comercio con Estados Unidos representa un porcentaje relativamente bajo del comercio total de Argentina². Por este motivo el BCRA resalta que los cambios del valor del peso contra las monedas de los restantes socios comerciales y sus respectivas inflaciones deben ser tenidos en cuenta para evaluar la competitividad de la economía Argentina. De este modo, el TCRM “es una herramienta útil para observar cómo las fluctuaciones del valor del peso en relación con las monedas de nuestros socios comerciales y la evolución de los respectivos niveles de precios influyen sobre la estructura de la demanda interna, sobre la estructura de la producción, sobre el patrón de comercio internacional y sobre la competitividad de nuestra economía” (BCRA, 2005:2).

Los últimos años del modelo de la convertibilidad evidenciaron un periodo de apreciación cambiaria que abarcó desde agosto de 1996 hasta diciembre de 2001, explicada por la apreciación de la divisa norteamericana, y por lo tanto del peso al que estaba anclado mediante la ley de convertibilidad, y la devaluación del Real brasileño en enero de 1999, aunque compensados parcialmente por la deflación experimentada por la economía argentina (3%). Como sostiene el BCRA, “esta combinación de apreciación real del peso y deflación tuvo efectos muy negativos en el nivel de actividad y de empleo en Argentina, sobre todo a partir del tercer trimestre de 1998” (BCRA, 2005:7).

Con la devaluación tuvo lugar una evolución radicalmente diferente del tipo de cambio real. Al derogar la convertibilidad de la moneda que conllevaba un tipo de cambio fijo, el Estado recuperó la capacidad de influir en el tipo de cambio a través de la política cambiaria y monetaria. La post-convertibilidad se inició a través de la *Ley de Emergencia Pública y Reforma del Régimen cambiario* n° 25561 de enero de 2002 con un régimen de flotación cambiaria. “El mantenimiento del tipo de cambio es clave, porque de eso depende el comportamiento de las exportaciones y, como consecuencia, la disponibilidad de divisas y los ingresos fiscales (por las retenciones a las exportaciones); por ende el superávit fiscal.” (Cibils, 2006:5-6) al mismo tiempo se acumulan reservas para el desarrollo de políticas anticíclicas en contextos de dificultad de acceso al crédito internacional.

2 El mismo representó el 17.6% en 2004.

ÍNDICE DEL TIPO DE CAMBIO REAL MULTILATERAL, DIC 2001-DIC 2007
 Base: dic. 2001 = 100



Elaboración propia en base a datos del BCRA

A partir del análisis del gráfico de la página siguiente, podemos discernir tres períodos según la evolución del TCRM:

a. Un primer periodo de depreciación se extiende desde la devaluación en enero de 2002 hasta el punto más elevado para el conjunto de periodos entre 2002-2007 en su conjunto alcanzado en junio de 2002. En dicho mes el índice trepa hasta acercarse a 279, representando un aumento del 179% respecto de diciembre de 2001 (tomado como año base =100). Este desarrollo se explica por la entrada en el régimen de libre flotación de la moneda y las expectativas devaluacionistas sobre la misma. Como señala Rapetti, en un primer momento,

se dispuso la creación de un mercado oficial para ciertas operaciones de comercio internacional y financieras³ a una paridad fija de 1,40 pesos por dólar, y un mercado de libre flotación para el resto de las operaciones. Poco después, la conducción del FMI hizo saber al gobierno que no iniciaría ninguna negociación hasta tanto no se unificara y liberalizara el mercado de cambios. El gobierno rápidamente cedió ante la presión multilateral. Una vez que se decidió dejar flotar al dólar, el valor de la divisa subió abruptamente, alcanzando niveles cercanos a los 4 pesos, en un ambiente de difundidas expectativas de depreciación de la moneda local (Rapetti, 2005:6).

Para evitar el desarrollo de una corrida cambiaria el Estado impulsó medidas con el objetivo de aminorar la fuga de depósitos, ya afectados por las restricciones al retiro de depósitos conocidas como

3 En lo sustancial, abarcaba a las exportaciones de bienes y servicios (de liquidación obligatoria), importaciones de bienes de capital, insumos intermedios y materias primas consideradas prioritarias por el gobierno y el pago de un pequeño conjunto de servicios reales, financieros y transferencias

“corralito” y la reprogramación forzada de los vencimientos de los depósitos (“corralón”⁴), culminando en un decreto de prohibición por 120 días de devolución de depósitos por amparos judiciales.

b. A partir de julio de 2002 se inicia un segundo periodo caracterizado por la apreciación cambiaria, alcanzando el índice más bajo del periodo post-devaluación en su conjunto en abril de 2003 llegando a 209. El principal factor explicativo se encuentra en el comienzo de una decidida política de control y gestión del tipo de cambio a partir de la intervención estatal, procurando la estabilización de un nuevo tipo de cambio internacionalmente competitivo que al mismo tiempo desaliente las especulaciones y corridas contra el peso. La acción estatal es desplegada desde el Banco Central, interviniendo en el mercado cambiario a través de la compra y venta de divisas. Esta estrategia de política cambiaria fue fortalecida a partir de la decisión de obligar a los exportadores a liquidar en el BCRA las exportaciones superiores a un millón de dólares (límite que fue variando) habilitando una mayor acumulación de reservas y amplificando la capacidad estatal de intervención en el mercado cambiario (Frenkel y Rapetti, 2007). Asimismo, Frenkel y Rapetti señalan que el fuerte incremento en las tasas de interés dotó de relevancia a los activos financieros locales que aumentaron su atractivo como sustituto del dólar⁵. En segundo lugar, debemos tomar cuenta de que el incremento de la inflación tiene efectos erosivos sobre el tipo de cambio. Si bien es en los primeros nueve meses de 2002 cuando se genera un fuerte proceso inflacionario, la continuidad, ahora más moderada del aumento de precios en este periodo caracterizado por mayores controles estatales sobre el tipo de cambio influye también en sentido de la apreciación cambiaria. En este contexto, la tendencia a la apreciación cambiaria evidenciada en este periodo ayudó a contener la expectativa devaluacionista, reforzando la capacidad de la política cambiaria de ejercer una función de regulación del tipo de cambio frente a la amenaza de corridas especulativas con el peso.

c. Observamos a partir de mayo de 2003 hasta diciembre de 2007 un tercer periodo de mayor estabilidad cambiaria tendiente a la depreciación aunque con desarrollo irregular. Desde mayo de 2003 hasta mayo de 2004 se abre un sub-periodo de leve depreciación caracterizado por su evolución irregular, de modo de mostrar oscilaciones constantes de apreciación y depreciación cambiaria que pueden percibirse prácticamente de modo mensual. En el total del sub-periodo se parte de un número índice de 212 en mayo 2003 a 216 en mayo 2004. A partir de entonces, observamos un nuevo sub-periodo de depreciación pero de rasgos más constantes, que parte de junio de 2004 (219) a diciembre de 2007 (acercándose a 254), presentando un incremento del 38% entre el último mes del sub-periodo anterior y el último mes de la serie. Este sub-periodo evidencia el desarrollo de una política activa que procura mantener el tipo de cambio internacionalmente competitivo orientado a expandir la capacidad exportadora. Junto a la intervención del Banco Central en el mercado cambiario para regular la evolución del tipo de cambio, dicha institución despliega distintos instrumentos de esterilización (como la emisión de letras y notas, encajes, cancelación de redescuentos, entre otros) con el fin de cumplir con las metas monetarias fijadas en su planificación. Por otra parte, si bien la inflación (que no puede ser explicada en la post-convertibilidad por la emisión monetaria en tanto la misma acompaña el crecimiento económico) vuelve, después de más de una década, a convertirse en una constante de la economía argentina, ésta logra ser moderada respecto de los primeros meses del modelo post-convertibilidad, permitiendo también un mayor control sobre el desenvolvimiento del tipo de cambio real.

La devaluación de la moneda y el fin de su convertibilidad respecto del dólar constituyó una política significativa en el cambio de modelo de acumulación que se extendió a través de la política de tipo de cambio competitivo e impactó principalmente en:

d. Mejora de las condiciones de comercio exterior y comienzo de una era superavitaria de la balanza comercial

4 El “corralón” estableció un cronograma para la reprogramación de los vencimientos de los depósitos a través de la Resolución 06/2002 del Ministerio de Economía que reglamentaba la directiva dispuesta en el decreto 71/2002 del 9 de enero de 2002.

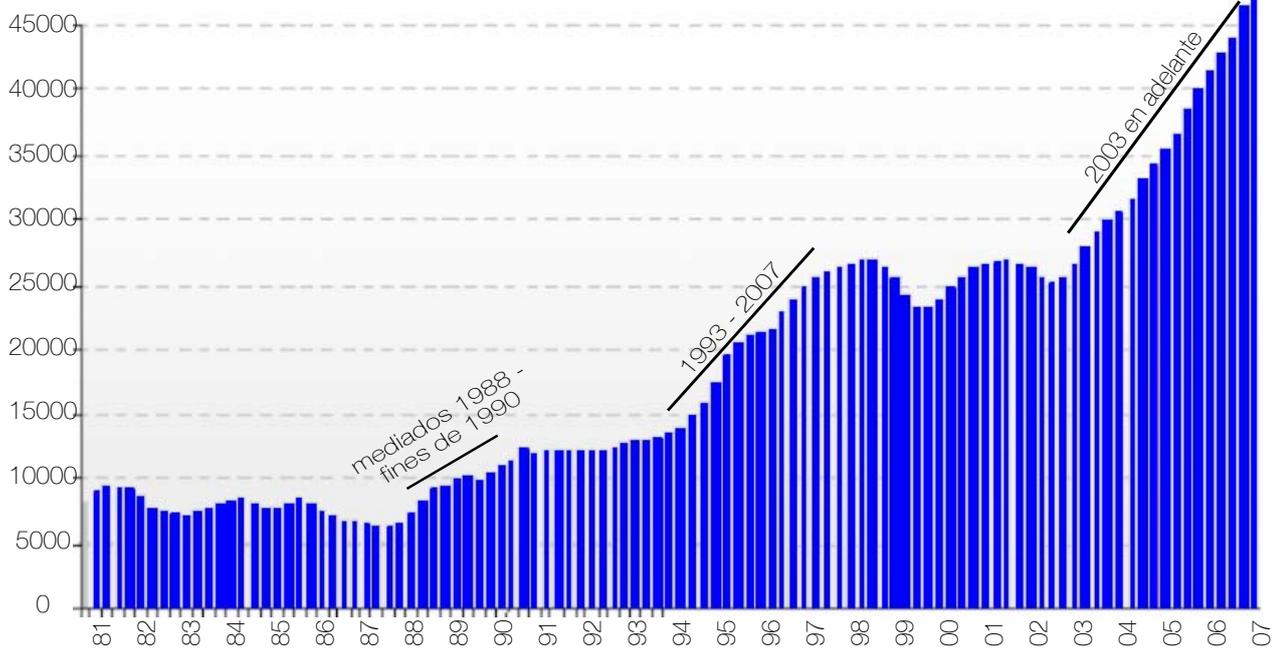
5 “En julio de 2002, la tasa de los depósitos a plazo fijo alcanzó 76%, y la de las Lebac a 14 días alcanzó el 115%” (Frenkel y Rapetti, 2007:8).

e. Origen de un proceso inflacionario que generó una fuerte caída del salario real y el costo laboral

3.1.1. Impacto en el comercio exterior

EXPORTACIONES TOTALES

En millones de U\$S



Fuente: Ministerio de economía

Como observamos previamente, los gobiernos post-convertibilidad han desarrollado, una política activa para mantener el tipo de cambio competitivo y alentar esta vía de recuperación económica a partir del crecimiento de las exportaciones, favoreciendo como estrategia de acumulación la inserción exportadora en el mercado mundial. El crecimiento de las exportaciones ha alcanzado un 121% tomando el período 2002-2007, participando de un fenómeno de carácter regional⁶. Además, como se observa en el siguiente gráfico, la salida exportadora abierta en la post-convertibilidad reviste una mayor intensidad en el crecimiento de las exportaciones que las fases expansivas anteriores.

Por otra parte, como señala un informe de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, la importancia que posee la evolución de las exportaciones queda evidenciada en que, desde 2002 a 2007, “su participación en el PBI aumento un 37.6%, mientras que la participación del consumo privado y público cayó alrededor de un 7%” (FISyP, 2009:4), y por otro lado, por la función que cumple en la configuración del modelo post-convertibilidad, ya que el impulso que ha cobrado esta orientación exportadora ha permitido alcanzar un considerable superávit comercial que junto al superávit fiscal, favorecido vía retenciones a las exportaciones, constituyen los dos pilares de estabilidad del modelo. Estos dos pilares se vinculan tanto a la entrada de divisas e incremento de las Reservas Internacionales que permitieron al Banco Central desarrollar la política de tipo de cambio competitivo, como a que la reinstauración de las retenciones permitieron fortalecer la recaudación de fondos públicos a partir de los cuales el Estado ha venido desplegando diversos mecanismos de transferencia de recursos con el fin de organizar y compensar los distintos intereses en pugna entre las fracciones de clase bajo el marco del nuevo modelo de acumulación.

⁶ Aunque Argentina está lejos de encabezar la dinámica exportadora regional, resaltamos este fenómeno como una clave fundamental para comprender cambios en el modelo de acumulación con particular énfasis en las relaciones de fuerzas entre fracciones de clase.

En este sentido retomamos la concepción de *autonomía relativa* del Estado frente a las fracciones de clase, ya que el Estado capitalista, sin dejar de representar de manera predominante los intereses de la clase o fracción hegemónica asegura el interés político general del conjunto del bloque en el poder, y procura la construcción de hegemonía respecto del conjunto de la formación social, tanto de las fracciones dominantes como subalternas (Poulantzas, 1981).

3.1.2. Impacto inflacionario

La salida devaluacionista ha implicado un proceso inflacionario que es necesario desentrañar para comprender el modelo de acumulación post-convertibilidad. La inflación se convirtió en una variable económica que, si bien muestra variaciones de intensidad en el periodo de estudio, vuelve a constituir una presencia regular y cuya prelación, en términos de jerarquía explicativa, se observa en la relevancia que la misma presenta para el abordaje de un amplio conjunto de fenómenos económico-sociales, ligado a los cambios en los precios relativos y a las relaciones de fuerzas que las disímiles evoluciones de los precios evidencian, en tanto representan las diferentes capacidades de apropiación del valor socialmente creado.

Para el abordaje de la inflación tomaremos la conceptualización sobre inflación desarrollada por Diamand en los años 70 para pensar dicho fenómeno en el marco del régimen de acumulación basado en la industrialización por sustitución de importaciones (ISI), reelaborando algunos de sus contenidos para interpelar el proceso inflacionario en la Argentina post 2001. Podemos pensar este proceso en clave de lo que Diamand denomina *inflación cambiaria*, un tipo de inflación que “*nace a raíz del estrangulamiento en la provisión de divisas, de un desequilibrio consecuente entre la oferta y la demanda en el mercado cambiario y de la devaluación que esta induce.*” (Diamand, 1973:116, énfasis en el original). Esta inflación se origina en una *devaluación obligada* a la que caracteriza como una devaluación por déficits externos causados por la divergencia permanente entre exportaciones e importaciones, que surge de las propiedades de la estructura productiva y que es independiente de una inflación previa (Diamand, 1973). La devaluación obligada por estrangulamiento, evidenciado en el desempeño de la balanza de pagos sobre el fin del modelo de la convertibilidad, actúa a través de lo que Diamand denomina el *efecto-ingreso*: provoca una recesión, una caída de las actividades del país y un consecuente descenso de las importaciones. El fenómeno recesivo se produce a través del aumento de precios que ocasiona la devaluación. Este efecto-ingreso, se encuentra constatado en la abrupta caída del PBI en 10,9% en el año 2002 originada en combinación con fuertes incrementos tanto en el IPC⁷ (41%) como en el IPIM⁸ (118%). Sin embargo, al producirse la devaluación no en un período de auge económico sino de recesión (iniciada en 1998) dio lugar hacia 2003 a una nueva fase expansiva a través de la recuperación de la tasa de ganancia empresaria relacionada con el nuevo tipo de cambio competitivo, la disminución del costo laboral, el aumento de la productividad y los elevados precios internacionales de los *commodities*, favorables a las exportaciones argentinas.

La inflación cambiaria se expresa a través de dos efectos característicos: el *efecto-propagación* y el *efecto-arrastre*. Según Diamand, el *efecto-propagación* se vincula a que en el proceso de devaluación obligada el tipo de cambio determina los costos en moneda nacional de los insumos importados, los combustibles y bienes de capital incidiendo directamente sobre los costos industriales, influencia que en mayor o menor medida se transmite a los precios y que acarrearía en cadena el alza de los servicios. Para pensar la post-convertibilidad, debemos señalar que este efecto-propagación ya no se vincula a la dinámica sustitutiva característica del régimen de acumulación basado en la ISI sino a que la creciente extranjerización y concentración económica profundizada en los años 90 fue regida por actores empresariales transnacionales que tendieron a dejar de adquirir insumos en el mercado interno para comprarlos a empresas de sus propios consorcios en el exterior, en el marco de una apertura comercial pronunciada. De este modo, la devaluación conllevó, junto al aumento de precios de los insumos importados y su impacto en los costos de producción y los precios de bienes finales, un efecto periférico de sustitución de importaciones relacionado a la barrera de protección que generó el nuevo

7 Índice de Precios al Consumidor. Indicador utilizado para medir oficialmente la inflación.

8 Índice de Precios Internos al por Mayor.

tipo de cambio, que se fue estacionando cerca de los 3\$ por 1US\$. Por otra parte, la propagación de la inflación a los servicios fue moderada a partir de las acciones estatales desplegadas en el marco de la *Ley de Emergencia Pública y Reforma del Tipo de Cambio*, donde se dictaminó el congelamiento de tarifas y se dispusieron recursos legales para que el Estado evaluara y negociara con las empresas de servicios privatizadas dichos aumentos. La limitación del efecto-propagación hacia los servicios gestaría un cambio sustancial en los precios relativos, favorable a la producción de bienes transables. Esto puede ser constatado en la comparación de los índices IPC e IPIM, en tanto el primero incluye una canasta de bienes y servicios, su incremento de 98,7% entre diciembre de 2001 y de 2006, presenta una elevada brecha con el IPIM, que incluye precios al por mayor sólo de bienes transables, y ha aumentado, en el mismo periodo, un 194,2%.

En segundo lugar, encontramos el *efecto-arrastre* de la devaluación. Este se vincula a que, como señala Diamand, las ventas para el mercado interno no se realizan a precios menores que los que se podrían obtener exportando la producción. Por esta causa, el tipo de cambio determina casi directamente el precio interno de los productos exportables. Al ocurrir la devaluación, sube el precio en el mercado local. Este efecto es fundamental para comprender el proceso inflacionario en el período post-convertibilidad por diversos motivos. En primer lugar, debemos observar cómo se compone la principal oferta exportadora, observando que el 52% de las ventas al exterior está protagonizado por la suma de manufacturas de origen agropecuario y productos primarios, bienes de *naturaleza dual* (Tolón, 2005), que al ser al mismo tiempo productos de exportación y de consumo masivo de la población incrementa el nivel de inflación, afectando particularmente las condiciones de vida de las clases subalternas. Si bien la inflación expresa un aumento generalizado de precios, este incremento se da de forma dispar, expresando cambios en la correlación de fuerzas. El fuerte incremento de los índices de precios se dio en un contexto de alta desocupación y congelamiento relativo de los salarios. De este modo, como señalan Costa, Kicillof y Nahón, “la inflación registrada (del 45%) bastó para reducir los ingresos reales de los trabajadores en un tercio en el período 2001-2003” (Costa, Kicillof y Nahón, 2004:83). Este brote inflacionario licuó el salario real con claros impactos sobre el costo laboral real en la industria manufacturera que, según el Ministerio de Trabajo, fue en el primer trimestre de 2003 un 61,7% inferior al de 1993⁹. Si bien debemos tener en cuenta que los salarios reales se han ido recuperando a partir de 2003 (principalmente los privados registrados en los sectores más dinámicos de la industria), estos aumentos lejos están de generar un estrangulamiento de la ganancia empresaria, en contextos de incremento de la productividad. Finalmente, el efecto arrastre posee otro alcance teórico relevante ya que nos convoca también a pensar el papel de las retenciones, otra política fundacional de la post-convertibilidad.

3.2. Retenciones

La implementación de retenciones, por un lado, procura limitar el impacto inflacionario del *efecto-arrastre*, morigerando el precio neto que consiguen los exportadores, intentando “**desacoplar**” **precios externos e internos; y por otro lado**, buscan gravar su renta extraordinaria, en tanto estos sectores no sólo se ven beneficiados por la renta diferencial (Marx, 2006) producto de la fertilidad pampeana y la abundancia de recursos naturales sino también por los altísimos precios internacionales de los *commodities*, que aumentaron constantemente durante todo el periodo.

Las retenciones han afectado distintamente a los productos exportados. En el caso del petróleo, cuyo precio aumentó de US\$32 en 2002 a US\$90 en 2007 por barril, las retenciones pasaron del 20% en 2002, al 25% en 2004, llegando a 45% en 2007, estableciendo a final de ese año un ingreso tope para las petroleras de US\$45 por barril. El caso de las mineras, las empresas instaladas en Argentina previo al 2002 gozaron durante todo nuestro periodo de estudio de la exención de las retenciones amparadas en una ley menemista, que recién se dejó sin efecto en diciembre de 2007. El resto de las mineras pagaban tan sólo entre el 5% y el 10% según el mineral explotado, al tiempo que usufructuaban múltiples beneficios tributarios y devoluciones impositivas, por lo que podría creerse que los minerales se extraen “gratuitamente” en Argentina. Este marco se agrava si observamos que los pre-

9 Datos tomados de Ministerio de Trabajo, empleo y seguridad social 2004.

cios de los productos minerales han aumentado un 482,10% (IPIM, dic. 2001- abril 2007) generando ganancias extraordinarias para las empresas del sector. Finalmente, las retenciones agropecuarias afectaron de modo diferente según el producto: para el caso de la soja las retenciones, entre 2002 y 2007 fueron del 27,5%, mientras el precio del grano rondó los US\$ 160 por tonelada promedio. Estas retenciones aumentaron en noviembre de 2007 al 35% cuando su valor superó los US\$ 240. A fines de 2007, las retenciones para trigo, girasol, y maíz fueron del 28%, 32% y 25% respectivamente. La carne y los lácteos partieron con una retención del 5% aumentando entre el 10% y el 15% en 2005. A pesar de las retenciones aplicadas sobre los productos agropecuarios, el rubro de alimentos y bebidas del IPC presentó un aumento del 135,2% entre 2001 y 2007 con un fuerte impacto negativo sobre el nivel de vida de las clases subalternas.

Nuevamente debemos resaltar que la aplicación de retenciones a las exportaciones constituyeron una medida fundamental en la articulación de los dos pilares de estabilidad del modelo, ya que permiten atraer recursos y divisas provenientes del superávit comercial para promover la consecución del superávit fiscal, el cual se alimenta también del conjunto del proceso de crecimiento económico iniciado a partir de 2003. Las retenciones representan una arista del sistema de transferencias de ingreso ya que, por un lado capta recursos de un sector de la fracción predominante en la post-convertibilidad, la fracción productivo-exportadora, para redirigirlo de forma compensatoria hacia otras fracciones, por ejemplo, al capital financiero a través del pago de deuda, a las empresas de servicios privatizadas a partir de subsidios y a las clases subalternas a través de políticas de ingresos. Al mismo tiempo actúa en beneficio de las clases subalternas al procurar moderar la inflación que corroe el salario real de los trabajadores.

3.3. La pesificación asimétrica de deuda privada.

La pesificación asimétrica de deudas con el sistema financiero local fue el mecanismo implementado durante el gobierno de Duhalde para resolver la problemática de los créditos y depósitos post-devaluación que culminaría en un masivo proceso de licuación de las deudas del capital. El régimen cambiario del modelo de los 90 al tiempo que fijaba el tipo de cambio, fue conllevando una creciente dolarización de la economía, expresada en que el sistema financiero tenía los depósitos y créditos dolarizados al 70 y 80% respectivamente. En el proceso de agotamiento del modelo de la convertibilidad, el aumento de la fuga de capitales provocó un fuerte drenaje de recursos que amenazaba con desestabilizar el sistema financiero local. Frente a este escenario el gobierno de la Alianza (1999-2001) dispuso diversas medidas entre la que se destacó la restricción de retiro de recursos del sistema bancario conocido como “corralito”. El gobierno de Duhalde debió enfrentar la resolución de dicha medida, que se había convertido en uno de los principales focos de protesta desde las capas medias. A pesar de declarar públicamente que su gobierno garantizaría la devolución de los depósitos en su moneda original, la ausencia de respaldo en divisas de los mismos fue gestando un panorama cruzado por fuertes disputas en torno a la resolución de dicha controversia. En este contexto emergió la política de pesificación asimétrica, como parte constitutiva del origen mismo del modelo de acumulación post-convertibilidad, con un fuerte correlato en el cambio de relaciones fuerzas entre fracciones de clase.

La pesificación asimétrica implicó que los bancos debieran devolver los depósitos en dólares a \$1,40 por cada US\$1, mientras que, como se determinó a partir de la *Ley de Emergencia Pública y Reforma del Régimen cambiario* en su artículo 6°, los deudores con la banca local vieron pesificadas sus deudas en dólares a \$1 por US\$1.

En dicho artículo, la Ley habilitó al Poder Ejecutivo Nacional a disponer medidas tendientes a disminuir el impacto producido por la modificación del régimen cambiario a los agentes endeudados en divisas extranjeras con el sistema financiero local. Pero las medidas desplegadas para ese fin fueron variando sustancialmente según el espectro de agentes considerados e incluidos para ser compensados y el modo en que esta compensación se realizaría. La política de pesificación asimétrica contuvo dos momentos principales que evidencian el avance de los agentes económicos concentrados en inci-

dir sobre las acciones estatales desplegadas. En un primer momento, la Ley fijó el siguiente espectro de compensación:

El Poder Ejecutivo nacional reestructurará las deudas con el sector financiero, estableciendo la relación de cambio *un peso* (\$ 1) = *un dolar* (us\$ 1), sólo en deudas con el sistema financiero cuyo importe en origen no fuese superior a *dolares cien mil* (us\$ 100.000) con relación a: a) Créditos hipotecarios destinados a la adquisición de vivienda; b) A la construcción, refacción y/o ampliación de vivienda; c) Créditos personales; d) Créditos prendarios para la adquisición de automotores; y e) A los de créditos de personas físicas o jurídicas que cumplan con los requisitos de micro, pequeña y mediana empresa (MlPyME). O hasta a esa suma cuando fuere mayor en los casos del inciso a) si el crédito fue aplicado a la adquisición de la vivienda única y familiar y en el caso del inciso e) (Ley 25.561, art.6).

Así, la política de pesificación que implicaba un alivio en las cargas de las obligaciones en moneda extranjera respecto de la banca local estuvo orientado a capas medias y agentes económicos ligados a la fracción de pequeñas y medianas empresas.

Sin embargo, el fuerte *lobby* empresarial de los agentes ligados al capital concentrado logró forzar al gobierno a derogar el techo impuesto inicialmente para la pesificación de deudas. Eliminado el límite de los US\$ 100.000, la política de pesificación asimétrica se convirtió en un mecanismo de licuación masiva de las deudas del gran capital productivo y de las privatizadas con la banca local. Se abrió así un segundo momento en el desarrollo de esta acción estatal gestado en dos pasos. Luego de pasar por una primera formulación de la pesificación asimétrica orientada a capas medias y agentes subordinados del capital, el primer paso hacia la licuación masiva de deuda se constituyó a partir de una resolución que dio habilitación para que las deudas superiores a US\$ 100.000, ahora sin techo de monto, serían fijadas a 1,40\$ por 1US\$. Sin embargo, la continuidad de las presiones gestaron un nuevo paso en el cual se consolidó entonces el segundo momento de la pesificación asimétrica, que cobró forma a través del decreto 214/02 en febrero de 2002.

El decreto 214/02 fija en su primer artículo la pesificación de todas las obligaciones en monedas extranjeras. En su artículo 2 ratifica la conversión y devolución de todos los depósitos en dólares u otras monedas extranjeras existentes en el sistema financiero, en pesos a razón de \$ 1,40 por cada dólar (o su equivalente en otra moneda extranjera) aclarando que la entidad financiera cumpliría con su obligación devolviendo pesos a la relación indicada. Una opción alternativa, fijada en el artículo 9, era la posibilidad de recibir bonos en dólares hasta 30.000 US\$¹⁰

Establecido de este modo el criterio definitivo de devolución de los depósitos, el segundo momento de la pesificación asimétrica como licuación masiva de deudas del gran capital quedó consolidado en su tercer artículo:

Art. 3º. Todas las deudas en *dolares estadounidenses* u otras monedas extranjeras con el sistema financiero, cualquiera fuere su monto o naturaleza, serán convertidas a PESOS a razón de UN PESO por cada DOLAR ESTADOUNIDENSE o su equivalente en otra moneda extranjera. El deudor cumplirá con su obligación devolviendo PESOS a la relación indicada (Decreto 214/02 art.3)¹¹.

De este modo, una política que inicialmente orientó una compensación a agentes subordinados en las relaciones de fuerzas se convirtió en un mecanismo de transferencias de recursos hacia el gran capital. Tanto la fracción productivo-exportadora como las empresas de servicios privatizadas fueron agentes privilegiados de dicha acción estatal, ya que al tiempo que mantenían ingentes masas de divisas fugadas en el exterior y valorizadas en términos locales por la nueva relación establecida por la modi-

10 “Art. 9º. Dispónese la emisión de un Bono en dolares estadounidenses, con cargo a los fondos del Tesoro Nacional, por el que podrán optar los depositantes en el sistema financiero, a los que se refiere el Artículo 2º del presente, en sustitución de la devolución de sus depósitos. Dicha sustitución alcanzará hasta la suma tope de dolares estadounidenses treinta mil (US\$ 30.000) por titular y por entidad financiera. Las entidades financieras obligadas con los depositantes que opten por la entrega de tales Bonos, deberán transferir al Estado Nacional activos suficientes para atender su pago.” Decreto 214/02

11 También se estableció la indexación de depósitos y deudas al coeficiente CER, vinculado al índice de inflación.

ficación del régimen cambiario, contenían, por su peso en la estructura, capacidad de haber afrontado dichas obligaciones. En este punto, la pesificación asimétrica se volvió una política que reforzó la concentración y, por un lado fortaleció a la fracción productivo-exportadora dominante en el escenario post-convertibilidad, mientras compensó a las empresas de servicios privatizadas, al punto que estas licuaron deudas por montos equivalentes, en general, a las ganancias obtenidas en el año 2000.

3.4. El “salvataje” al capital financiero

La pesificación asimétrica en su formulación final amenazaba con desestabilizar al sistema financiero local y ponía en debate quién asumiría los costos de las transferencias de recursos previamente mencionadas. Mientras que la fracción financiera del capital se había sumado, en términos generales, a la propuesta dolarizadora de salida de la convertibilidad con el fin de mantener sus activos en divisa y ganar competitividad internacional, el decreto 214/02 fijó en su artículo 10 que las entidades financieras debían depositar en el Banco Central todos los billetes en dólares u otras monedas extranjeras que tuvieran como disponibilidades, las que serían convertidas a pesos con la equivalencia establecida por el artículo 2 de dicho decreto. También establecía que todos los saldos existentes en dólares u otra divisa en el BCRA a favor de cada entidad financiera serían convertidos en idéntica relación. Esto parecía consolidar el papel de subordinación de la fracción financiera en el marco del naciente modelo de acumulación.

Sin embargo, el mismo decreto ratificó la perspectiva ya enunciada en la Ley de Emergencia Pública:

Art. 7°. Dispónese la emisión de un Bono con cargo a los fondos del Tesoro Nacional para solventar el desequilibrio en el sistema financiero, resultante de la diferencia de cambio establecida en el artículo 3° del presente Decreto (Decreto 214/02, art.7).

De este modo, el Estado no sólo se hizo cargo de los costos de compensación a los agentes provenientes de capas medias ligadas a las clases subalternas y de la fracción de pequeñas y medianas empresas, sino que asumiría la compensación a la fracción financiera del capital proveniente de la licuación masiva de deuda de los agentes más concentrados de la clase dominante. En este punto podemos observar cómo la política de pesificación asimétrica se torna en un mecanismo de licuación y estatización de deuda privada. Este mecanismo cobró status de ley en diciembre de 2003, mediante la Ley 25.820, que en su segundo artículo dispuso la eliminación del segundo párrafo del artículo 6° de la Ley 25.561 donde estaban consignados tanto el techo máximo de la pesificación asimétrica como los sujetos que abarcaba en primera instancia.

En este contexto el gobierno dispone el plan de “salvataje” al capital financiero, que ya aparecía previsto en la *Ley de Emergencia Pública*, que en el mismo artículo 6° definía: “El Poder Ejecutivo nacional podrá establecer medidas compensatorias que eviten desequilibrios en las entidades financieras comprendidas y emergentes del impacto producido por las medidas autorizadas en el párrafo precedente, las que podrán incluir la emisión de títulos del Gobierno nacional en moneda extranjera garantizados” (Ley n°25561, art. 6). En dicha ley también figuraba la indicación de establecer retenciones a los hidrocarburos con el fin de financiar las compensaciones. Sin embargo, este mecanismo sería rezagado por la presión ejercida por las petroleras y el Estado fue asumiendo el costo de las medidas devaluacionistas y pesificadoras, políticas cardinales en la fundación del modelo de acumulación post-convertibilidad. De este modo, se buscó generar una compensación de una fracción afectada por el modo de salida de la convertibilidad, transfiriendo recursos a través de endeudamiento público, en el marco de las nuevas relaciones de fuerzas entre las fracciones de clase.

Como señala Cobe, en la *Ley de Emergencia Pública* “quedó establecido el criterio de estatizar las pérdidas del sector financiero derivadas de las medidas para el tratamiento de las obligaciones pactadas en dólares. En definitiva, ello implicaba que la sociedad en su conjunto debería asumir una porción significativa de las pérdidas de ese sector proveniente de la caída del régimen de convertibilidad del cual fue uno de los principales beneficiarios” (Cobe, 2009:59). También es necesario aclarar que en una formación social que posee un sistema tributario fuertemente regresivo como es el de Argenti-

na, el peso de la financiación de estas políticas terminó recayendo con mayor énfasis sobre las clases subalternas.

En este camino, el “salvataje” al capital financiero cobró forma a partir de operaciones de diverso tipo destinadas a compensar a la fracción financiera del capital por las implicancias de la salida devaluacionista y la pesificación asimétrica, y que fueron cubiertas con la emisión de nueva deuda pública por un monto total de US\$ 14.386 millones, constituyendo el 51% de la deuda pública *post-default*. Este monto de endeudamiento se explicó por la emisión US\$ 5900 millones de compensaciones por la pesificación asimétrica, unos US\$ 2400 millones en “bonos cobertura” con arreglo al impacto generado por la devaluación, US\$ 6086 millones en bonos para canjear por los depósitos reprogramados¹². Por otra parte, el Estado Nacional apuntaló el sistema financiero absorbiendo las deudas que los Estados Provinciales mantenían con los bancos involucrando recursos por US\$ 9679 millones. De este modo, el Estado Nacional movilizó unos US\$ 24.065 millones en diversas operaciones destinadas a recomponer el sistema financiero, ya sea como transferencia directa hacia el capital financiero, asumiendo o no los bancos obligaciones con el Estado, o de forma indirecta, asumiendo los pasivos de los Estados provinciales con los bancos¹³.

Podemos señalar que la articulación de las políticas de pesificación asimétrica y “salvataje” al capital financiero involucraron transferencias de recursos en las siguientes direcciones: del capital financiero al capital productivo y las privatizadas vía pesificación asimétrica, y del conjunto de la sociedad hacia el capital financiero vía compensaciones estatales a través de mayor endeudamiento público. Como señala Cobe,

estas medidas produjeron una significativa redistribución regresiva del ingreso, al habilitar ingentes transferencias a favor del capital concentrado interno. En particular, beneficiaron a los grandes grupos económicos locales y conglomerados extranjeros con una inserción en actividades vinculadas a la exportación y sustanciales activos en el extranjero, que lograron licuar sus deudas en dólares contra el sistema financiero local. A la vez, favorecieron a las privatizadas con este tipo de deudas y coadyuvaron a la banca en términos a la banca en términos patrimoniales al asumir el Estado una porción de los pasivos de las entidades (Cobe, 2009:95).

Estos mecanismos de transferencia representan acciones estatales que, por un lado convalidan el predominio de la fracción productivo-exportadora del capital a través de la licuación de sus pasivos con el sistema financiero local, al mismo tiempo que instituyen medidas compensatorias hacia el núcleo de empresas de servicios privatizadas y la fracción financiera del capital, que desfavorecidas por la salida devaluacionista son objetos de políticas que buscan organizar el equilibrio inestable de compromisos promoviendo un nuevo momento de convergencia al interior de la clase dominante que aporte a suturar la crisis de hegemonía evidenciada sobre el fin de la convertibilidad.

3.5. *Default, canje y FMI*

El 23 de diciembre de 2001 el presidente Rodríguez Saá declaró la suspensión de pagos de la deuda, excluyendo los referidos a organismos financieros internacionales y otros préstamos garantizados¹⁴. El *default* fue mantenido por la posterior administración de Eduardo Duhalde y aparecía como uno de los principales desafíos que heredaba el gobierno de Néstor Kirchner. El análisis de la deuda

¹² Ver Damill, Frenkel y Rapetti 2005.

¹³ “Otra medida “asimétrica” afectó también el patrimonio de los bancos. El gobierno fijó diferentes mecanismos de ajuste por inflación de los depósitos y créditos pesificados. Se resolvió que los depósitos se ajustaran por un índice que sigue la evolución de los precios al consumidor (CER) y que los préstamos bancarios lo hicieran de acuerdo a otro que refleja el comportamiento de los salarios medios (CVS). Como la inflación minorista fue superior al aumento nominal de los salarios, los pasivos pesificados de los bancos crecieron a un mayor ritmo que los activos. El Congreso sancionó en octubre de 2003 una ley en la que se facultaba al Poder Ejecutivo a compensar a las entidades financieras por la “indexación asimétrica” con la emisión de títulos (BODEN 2013) por hasta \$ 2.800 millones. Hasta el momento el gobierno no ha concretado la emisión.” (Damill, Frenkel y Rapetti 2005:34). Según Cobe (2009) esta compensación finalmente sólo fue de 90 millones de pesos.

¹⁴ Es por esto que del total de los u\$s 178.000 millones a los que la deuda había alcanzado al momento de comenzar el canje en 2003, unos u\$s 79.000 nunca se dejaron de pagar.

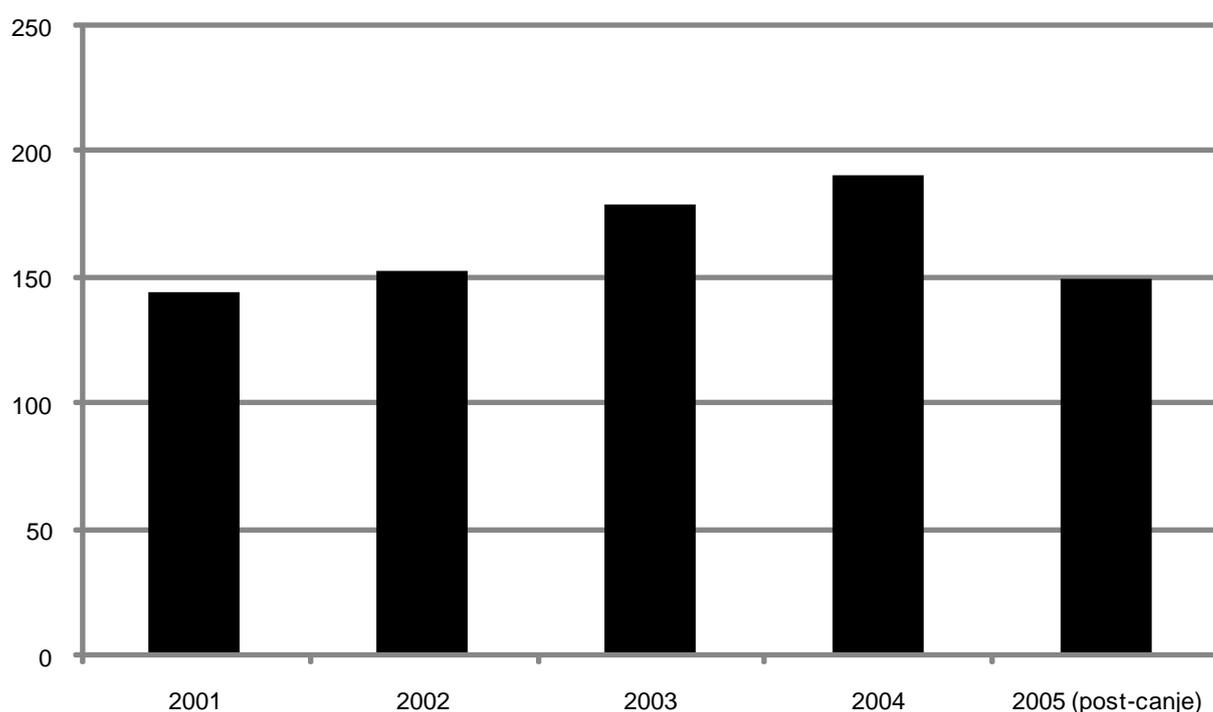
pública, implica indagar acciones estatales que tuvieron un alto impacto en la configuración del modelo en general y en las relaciones de clases en particular, en tanto una parte considerable de los bonos en *default* estaban en manos de los conglomerados financieros. Por ello, es un aspecto relevante para pensar la situación del capital financiero, que había visto perjudicadas sus posiciones relativas con la salida devaluacionista y pesificadora y que había comenzado a ser compensada ya en el gobierno de Duhalde a través de la emisión de nueva deuda implicada en la política de “salvataje”.

Debemos recordar que en el tercer objetivo especificado dentro del artículo 1° la Ley de Emergencia Pública se proponía “Crear condiciones para el crecimiento económico sustentable y compatible con la reestructuración de la deuda pública”.

En este camino, la salida del default¹⁵ comenzó a debatirse a partir de la propuesta oficial realizada por el ministro de economía Roberto Lavagna en la asamblea anual del FMI (2003) en Dubai, Emira-

EVOLUCIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ARGENTINA 2001-2005*

en miles de millones de dólares (2005: incluye deuda no ingresada al canje)



Elaboración propia en base a datos Lucita, E. 2005.

tos Árabes Unidos, proponiendo una quita del 75% sobre el valor nominal de los bonos, dando inicio a las negociaciones que concluyeron con el canje de deuda de 200.516.

Del total de los US\$ 81.800 millones que entraron en *default* en 2001 el canje sería aceptado en un 76,15%, de modo que US\$ 62.300 millones serían cambiados por los nuevos títulos elegibles según las proporciones señaladas previamente. Finalizado el canje estos US\$ 62.300 millones se redujeron a US\$ 35.300 millones, representando una quita del 43,4%. Un factor a tener en cuenta es que, finalizado el canje, si bien la magnitud de la deuda disminuyó, su monto total se mantuvo en niveles similares a los que poseía al momento del *default*, o mayor aún si se toma en cuenta la porción no ingresada a canje:

El canje concluyó con la incorporación de dos componentes dinámicos que merecen ser destacadas. Uno de los elementos más novedosos del canje y del endeudamiento posterior es el cambio

15 El análisis detallado del enfoque expresado sobre deuda pública puede verse en Varesi, 2008.

16 Como veremos en el capítulo siguiente cuando analicemos la fracción financiera del capital, los distintos tipos de bonos propuestos para la salida del default tuvieron distintas implicancias en los agentes económicos, así como también lo tuvo el criterio de no distinguir entre grande y pequeños tenedores de bonos.

de moneda: finalizado el canje el 41% de los bonos de deuda pública estaban en Pesos + CER. Esto significa un mayor peso de la deuda pesificada e indexada a la inflación, que año a año se acercó a los dos dígitos: se calcula que por cada cada punto de inflación los pagos por deuda aumentan en aproximadamente \$1.800 millones¹⁷¹⁸. La indexación de deuda a la inflación debe ser entendida como una medida que garantiza al capital financiero no verse mayormente perjudicado en la correlación de fuerzas respecto del capital productivo-exportador, principal beneficiario del ciclo inflacionario y la salida devaluacionista y pesificadora. Este mecanismo compensatorio puede ser vislumbrado también en el segundo componente dinámico que emergió del canje, las Unidades Ligadas al PBI¹⁹, cupones que, en las condiciones de crecimiento económico de los años posteriores al canje fueron arrojando rentas que se multiplicaron año tras año. Así, el Estado debió pagar en materia de las Unidades Ligadas al PBI \$1.242 millones adicionales de deuda en 2006, monto que se duplicaría en 2007, alcanzando los \$2.450 millones.

Las opciones adoptadas para la resolución del *default* construyeron un nuevo escenario. Los vencimientos de los tres títulos elegibles han permitido “patear” hacia adelante la amortización del capital de la deuda ingresada en canje entre unos 30 y 40 años. También el peso de la deuda sobre PBI disminuyó significativamente, pasando de representar el 127% del PBI en 2004 al 74% en 2005, cayendo al 56% en 2007, valor que aún se encontraba por encima del 54% en 2001, previo al *default*²⁰. También la relación deuda pública externa sobre reservas internacionales mejoró de forma sustancial: del pico más alto de 2002 en 823% se redujo al 135% en 2007. Otra mejoría considerable se observa en la relación deuda/exportaciones, de 281% en 2004, cayó con el canje a 131% en 2005 terminando en 94% en 2007.

Aún con la importante quita del canje y la mejora de las variables previamente mencionadas, quedó un pesado calendario de pagos que conllevaba vencimientos anuales de capital e intereses que variaban entre los US\$ 10 y 20 mil millones para los años subsiguientes. Asimismo, la magnitud del endeudamiento siguió siendo tal que ya en 2007, sólo dos años después de realizado el canje, el Estado pudo afrontar con los recursos del superávit fiscal solamente el 40% de los pagos, debiendo profundizar el endeudamiento con el sólo fin de pagar deuda. Esto nos suscita una doble evaluación:

a. Por un lado, el canje no rompió la continuidad del ciclo de endeudamiento en términos absolutos. El stock de deuda pública ha aumentado año a año; sin contar el monto no ingresado al canje, la deuda crece de US\$ 128.600 millones en 2005 a US\$ 136.700 millones en 2006, llegando a US\$ 144.700 millones en 2007. La clave explicativa se encuentra en que la resolución del *default*, si bien representó un alivio del peso de la deuda sobre los indicadores macroeconómicos, no logró romper el “círculo vicioso” del endeudamiento público. La estrategia de desendeudamiento tuvo por resultado aplazar vencimientos de capital, pero impuso una pesada carga de desembolsos. Si consideramos la magnitud de la quita argentina en la resolución del *default* como un caso histórico y que el gobierno de Kirchner ha sostenido puntillamente los criterios de superávit fiscal destinado a deuda, es difícil pensar bajo qué circunstancias un país deudor podría dejar de serlo. Esto puede verse en que el gasto primario real en la post-convertibilidad se mantuvo en promedio por debajo del de los últimos años del modelo de la convertibilidad: según el Ministerio de Economía, el gasto primario real promedio del período 2002-2006 representa \$ 44.745 millones, comportando un descenso del 15% del período recesivo 1999-2001, de \$ 52.165 promedio, lo que ha permitido privilegiar la derivación de recursos

17 Este es uno de los principales motivos por el cual el gobierno de Néstor Kirchner mantuvo intervenido al INDEC con el fin de manipular el índice de inflación buscando, entre otras cuestiones, limitar el impacto de la deuda sobre las cuentas públicas. Esto tiene consecuencias en la construcción de los indicadores sociales.

18 Esto ha implicado aumentos en los pagos de US\$ 5.000 millones anuales.

19 Los cupones otorgan dinero sólo si se cumplen determinadas condiciones: si el PBI real crece más del 3% y si supera al PBI “base”. Este PBI base se construye a partir del PBI de 2004, al que se le adiciona año a año un crecimiento de aproximadamente el 3%. Si estas pautas se cumplen, entonces el tenedor del cupón recibe un monto de pago del 5% del excedente del PBI a precios corrientes (excedente que expresa la diferencia de crecimiento entre el PBI y el PBI “base”) dividido por el tipo de cambio, con un tope máximo de 0,48 según la moneda vinculada al cupón.

20 Datos tomados de Secretaría de Finanzas, 2007.

al pago de deuda. Como señala el CENDA, “comparado con el quinquenio anterior a la crisis de 2001 (excluyendo este último año), durante el período 2002-2006 el gasto total ejecutado por el sector público fue en promedio un 5,1% menor como proporción del PIB, y un 17,3% más chico en términos absolutos si se toman los valores a pesos constantes. Asimismo, en 2006 el gasto público como porcentaje del producto era todavía un 10% más bajo que en 2001.” (CENDA, 2007:21)

De este modo, tanto por la quita histórica del canje como por los estrictos criterios de superávit destinados a deuda, se hace evidente que la función de la deuda no implica que esta sea finalmente pagada, sino que el endeudamiento es un circuito en sí de transferencia de ingresos. Esta transferencia de recursos, dada la estructura tributaria regresiva de Argentina, genera traspasos de las clases subalternas al capital financiero y se complementa con el mecanismo de la dependencia, en tanto los Estados deudores terminan priorizando el pago de deuda por encima de las necesidades de las clases subalternas, condicionando las políticas económicas. Esto puede observarse en que, como señala Lucita, los recursos fiscales que se han destinado a deuda superan a la suma de las partidas presupuestarias de Salud, Educación, Vivienda y Agua potable, es decir el gasto social que define la calidad de vida de los sectores populares, así “por cada peso que se utiliza para pagar la deuda, sólo 0,75 centavos para servicios esenciales para la comunidad” (Lucita, 2005:1).

b. Por otra parte, la deuda en la post-convertibilidad posee un papel profundamente distinto al que tenía en los años 90, ya que deja de ser el eje articulador del proceso de valorización financiera y fuga de capitales, característico del modelo de la convertibilidad. Esto puede observarse en las mejoras de los índices relativos a PBI y exportaciones, que hacen que la deuda post-canje no constituya una amenaza de corto plazo a la continuidad y regularidad del modelo post-convertibilidad. Asimismo permite visualizar un cambio en las relaciones de fuerzas, en detrimento, en términos relativos, del capital financiero, confirmando una mayor centralidad de los agentes productivos en el nuevo modelo de acumulación.

El análisis de la deuda nos abre paso para analizar una acción estatal que, sin ser fundacional, debe ser considerada como una política central del modelo post-convertibilidad: la cancelación de la deuda con el FMI, que se ligó a la suspensión del acuerdo firmado con el organismo y permitió ampliar márgenes de libertad para el desarrollo de las políticas económicas.

Según Chomsky la rigurosa adhesión al FMI que había tenido Argentina en los 90 fue una de las claves principales que llevó al país a un verdadero “desastre económico” (Chomsky, 2007). En este mismo sentido se orientaron numerosos discursos del presidente Kirchner, cuyo gobierno desplegó una doble estrategia: por un lado, mantuvo una mayor firmeza en la negociación de las exigencias en materia de políticas que el FMI pedía para la aprobación de la revisión del tratado vigente, que había sido suscrito por la administración Duhalde, y por otro lado, culminó las negociaciones con la suspensión del dicho acuerdo y el pago por adelantado de la deuda total con el Fondo.

El gobierno de Kirchner adoptó una postura de mayor intransigencia frente al FMI, en tanto no aceptó aplicar parte de las acciones estatales que este organismo reclamaba con el fin de aprobar la revisión del acuerdo en vigencia. El FMI presionaba principalmente por un aumento tarifario como vía de compensación a las empresas privatizadas por los efectos de la salida devaluacionista, y también exigía mejores condiciones para el canje de la deuda en default. El gobierno, amparado por el coyuntural aval del gobierno de los Estados Unidos y el crecimiento económico que experimentaba la economía nacional, tuvo mayor margen para disputar las exigencias del Fondo, optando finalmente por dejar virtualmente suspendido el acuerdo vigente. Asimismo, el propio FMI venía promoviendo que sus principales deudores cancelaran pagos con el fin de reducir sus riesgos financieros. Esto se debe a que el FMI tenía el 80% de sus préstamos colocados en sólo 5 países, que en caso de entrar en cesación de pago con dicho organismo le hubieran producido un desastre económico (AIPE, 2005). Esta estrategia puede visualizarse en tanto que tres de los principales cuatro deudores del FMI, Argentina, Brasil y Rusia, estaban efectivamente avanzado en el pago de sus deudas con este organismo.

La recuperación económica y el aumento de la recaudación pública permitieron al gobierno prescindir de los desembolsos del FMI y ganar mayores márgenes de negociación en la aplicación de polí-

ticas, pero el fin del acuerdo implicaba no poder seguir refinanciando la deuda con dicho organismo. Como señalan Bembi y Nemiña,

la progresiva cancelación de los créditos pendientes con el Fondo nunca había sido planteada por el gobierno como un fin en sí mismo, sino que, en realidad, era el resultado de la suspensión unilateral del acuerdo vigente, lo que obligaba a nuestro país a continuar cancelando sus créditos con el organismo sin recibir sus desembolsos. Esto implicaba que, lógicamente, el stock de deuda con dicho organismo comenzaría a reducirse de manera más acelerada. De este modo, la consecuencia de la suspensión del acuerdo era resignificada pocos meses después como un pilar central de la política económica nacional, por lo que un resultado colateral de una decisión se convertía en el objetivo central de la misma: lograr mayor autonomía en la definición de las políticas estatales en materia económica (Bembi y Nemiña, 2005:87-88).

Así, el gobierno de Kirchner fue construyendo una perspectiva que oficialmente sería denominada como política de “desendeudamiento”, cancelando por adelantado el total de su deuda de US\$ 9.810 millones, utilizando para esto el 35% de las Reservas Internacionales del Banco Central²¹. Si por un lado, el gobierno de Kirchner se convirtió en el que más deuda pagó a los organismos financieros internacionales en la historia argentina, por el otro, el fin del tratado con el Fondo marcó un punto de inflexión en las posibilidades de conquistar mayores márgenes de libertad para la acción estatal. Durante la década de los 90 el FMI había orientado la política económica a través de sus directivas exigidas para la aprobación de préstamos y procuraban seguir incidiendo en las acciones estatales mediante el mantenimiento de los acuerdos y las “evaluaciones” que el organismo realizaba para su sostenimiento. Ahora, estos nuevos márgenes de autonomía relativa del Estado nacional, tuvieron implicancias explícitas en el corto plazo sobre las relaciones de fuerzas: las exigencias del fondo promovían políticas orientadas a recomponer las relaciones de fuerzas a favor de las fracciones del capital financiero y de las empresas de servicios públicos (con su núcleo primordial de privatizadas), lo cual hubiera trastocado la correlación de fuerzas post-convertibilidad favorable al capital productivo-exportador en el marco de un nuevo esquema de precios relativos y el nuevo contexto macro-económico.

3.6. Renegociación de tarifas

Otro aspecto de las políticas aplicadas a evaluar, es su relación con las empresas de servicios, con su núcleo principal de privatizadas²², otros de los agentes económicos que vieron desfavorecidas su capacidad de apropiación del excedente económico con el fin de la Convertibilidad. De las seis políticas fundacionales, la devaluación, la pesificación asimétrica y el congelamiento y renegociación de tarifas tuvieron impactos destacados respecto de las privatizadas. Como señalamos, estas acciones estatales cobraron forma inicialmente a partir de la Ley de Emergencia Pública n° 25.561. En el artículo 8° se dejaron sin efecto las cláusulas indexatorias de tarifas a índices de precios de otros países, que habían beneficiado a las privatizadas durante el modelo de la Convertibilidad, y se desdolarizaron las tarifas, pesificándolas en relación 1\$ por 1US\$. También se habilitó, en el artículo 13°, al gobierno a regular transitoriamente los precios de insumos, bienes y servicios críticos, a fin de proteger los derechos de los usuarios y consumidores, de la eventual distorsión de los mercados o de acciones de naturaleza monopólica u oligopólica.

Por un lado, las privatizadas, que presentaban un origen de capital predominante extranjero, se vieron afectadas por la devaluación tanto por la disminución de las utilidades en divisas como por el encarecimiento de los insumos que adquirirían a través de empresas ligadas a sus holdings. Por otro lado, fueron beneficiadas por la pesificación asimétrica de deudas: “Entre los 50 mayores deudores privados que a comienzos de 2002 vieron licuados sus pasivos con el sistema financiero local (...) quedaron incluidas 25 empresas privatizadas que por ese medio obtuvieron un beneficio –del orden

21 Aunque debe señalarse que esto no significó una reducción neta de la deuda sino un cambio de acreedor, ya que el Estado entregó al Banco Central bonos por la misma cantidad. Claro que el endeudamiento intra sector público posee un carácter distinto de aquel sostenido con agentes externos al mismo.

22 Una ampliación de este tema puede ser leída en Varesi, 2009.

de los 2000 millones de dólares- prácticamente equivalentes a las ganancias obtenidas por las mismas en el año 2000” (Azpiazu y Schorr, 2003:77).

Como sostienen Azpiazu y Schorr (2003) la Ley de Emergencia Pública establecía un marco propicio para una reconfiguración profunda de las relaciones entre las privatizadas y el Estado posibilitando la revisión integral de los contratos y las contravenciones acumuladas de los años precedentes, por ejemplo para revisar el conjunto de ajustes tarifarios de dudosa legalidad desarrollados durante el modelo de la convertibilidad que les garantizaron a las privatizadas ganancias extraordinarias en contexto de nulo riesgo empresario o la investigación de las inversiones incumplidas. Sin embargo, rápidamente comenzó a notarse que las discusiones Estado-privatizadas se limitarían a las negociaciones tarifarias, creándose una Comisión de Renegociación para asistir al Ministerio de Economía en dicha tarea. Durante la administración Duhalde las renegociaciones avanzaron lentamente, con presiones tanto de gobiernos extranjeros como del FMI, pero mediada por la intervención del poder judicial que invalidaba los intentos de aumentos que pretendían vulnerar la Ley de Emergencia Pública. Esto nos permite pensar esta acción estatal en toda su dimensión, ya que trascendió la iniciativa a nivel del poder ejecutivo sino que comprendió en su estrategia otras instituciones estatales que permitían mostrar una voluntad política condescendiente con las presiones realizadas por las potencias extranjeras y los organismos financieros internacionales, pero que contaba con el resguardo de la Ley de Emergencia y la posibilidad de anulación por parte del poder judicial de los aumentos tarifarios que la vulneraban. Como concluyen Azpiazu y Schorr, el gobierno de Duhalde desplegó una estrategia de renegociación dual:

la de aquellas actividades en las cuales el gobierno implementó un conjunto de medidas fuertemente cuestionables en términos procedimentales y, más aún, legales, pero que resultaron plenamente funcionales al proceso de acumulación y reproducción del capital de las compañías prestatarias: vías fluviales por peaje, servicios aeroportuarios, correo postal, terminales del puerto de Buenos Aires, transporte ferroviario de pasajeros y puente Rosario-Victoria; y

* la de aquellos sectores en los que, a pesar de que las firmas que se desenvuelven en los mismos no lograron que se concediera buena parte de los desmedidos reclamos que presentaron al inicio del proceso de renegociación, la estrategia gubernamental consistió en focalizar prácticamente toda la “revisión contractual” en cuánto tendrías que incrementarse las tarifas, abandonando los distintos criterios establecidos de manera taxativa por la Ley de Emergencia (como, entre otros, las inversiones efectivamente realizadas, el grado de cumplimiento de los contratos originales, los niveles de rentabilidad empresarial, el impacto de los cuadros tarifarios sobre la distribución del ingreso y la competitividad de la economía, y la calidad de los servicios prestados), en dilatar todo lo posible aun esa acotada negociación tarifaria y, en síntesis, en dejar todo lo posible aun la renegociación global de los contratos –e incluso, la tarifaria en las áreas más sensibles socialmente- como una pesada herencia para la próxima administración gubernamental elegida por el voto popular” (Azpiazu y Schorr 2003: 267-268)

Durante el gobierno de N. Kirchner se desplegó una estrategia heterogénea consistente en tres acciones estatales diferenciadas: renegociación, “reestatización” y creación empresarial. Esta estrategia fue desplegada persiguiendo tres objetivos: 1) dismantelar los procesos judiciales que muchas privatizadas llevaban adelante en el CIADI²³, que a inicios del 2005 implicaban juicios por US\$ 17.000 millones; 2) evitar un “tarifazo”, procurando limitar la inflación y mantener el nuevo esquema de precios relativos favorable a la producción de bienes transables; y 3) aumentar la influencia del Estado en determinadas áreas.

El gobierno continuó utilizando la Ley de Emergencia Pública como herramienta fundamental. Ésta, en el artículo 9º, autorizaba al poder ejecutivo a renegociar los contratos de prestación de servicios públicos siguiendo los siguientes criterios: “1) el impacto de las tarifas en la competitividad de la economía y en la distribución de los ingresos; 2) la calidad de los servicios y los planes de inversión, cuando ellos estuviesen previstos contractualmente; 3) el interés de los usuarios y la accesibilidad de

23 Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones. Tribunal ligado al Banco Mundial.

los servicios; 4) la seguridad de los sistemas comprendidos; y 5) la rentabilidad de las empresas” (Ley n°25561, art.9).

En los casos en que se han llevado a cabo las renegociaciones que pusieron fin al congelamiento tarifario, éstas culminaron en aumentos entre el 15 y el 30%, (por ej. Edesur, Edenor, Gas Natural Ban, entre otros) muchos de los cuales se dirigieron principalmente a los grandes consumidores, evitando el “tarifazo” directo sobre las clases subalternas y buscando redireccionarlo hacia los agentes productores de bienes transables, principales beneficiarios del nuevo esquema de precios relativos, pero impactando igualmente en la población por la transferencia parcial del aumento de los costos a los precios que efectúan los agentes empresariales. Si bien en todos los casos los acuerdos implicaron el retiro de las demandas del CIADI, no se exigieron a las privatizadas las inversiones previamente incumplidas. Un ejemplo de esto es la negociación con la empresa Gas Natural BAN, a quien se le avaló un aumento del 27% para los medianos y grandes usuarios y un 17% para las casas de familia²⁴. Esta negociación se llevó a cabo a partir del retiro de la demanda judicial de la Gas Natural BAN en la CIADI. Otras negociaciones que culminaron en aumento tarifario fueron las de las autopistas del acceso Norte y Oeste, que presentaron un incremento del 15% que comenzó a cobrarse en abril del 2006.

Una importante renegociación es la llevada a cabo en el sector energético, que comenzó con los regímenes de “premios y castigos” implicando aumentos según la cantidad de consumo de energía y que continuó con la negociación de contratos y tarifas. En las negociaciones con Edenor y Edesur, el gobierno fue avanzando, logrando el retiro de las demandas judiciales en el CIADI y otorgando aumentos de tarifas a los medianos y grandes usuarios implicaron una mejora en los ingresos de las distribuidoras del orden del 28%. “Además del ajuste para los clientes no residenciales, los nuevos contratos contienen dos nuevas vías de actualización tarifaria. Por un lado, cada seis el ENRE verificará los costos operativos y si aumentan un 5%, determinará el ajuste correspondiente. Y por otro lado, las empresas podrá solicitar una revisión “extraordinaria” cada vez que sus costos se eleven más del 10%”²⁵. La renegociación con Edelap incluyó el retiro por parte de la empresa de una causa judicial contra el Estado argentino por US\$1.000 millones y el permiso para efectuar un 15% de aumento tarifario²⁶. Es de importancia remarcar que una de las principales problemáticas que el gobierno ha tenido que enfrentar es la crisis energética que por falta de inversiones y por el crecimiento que presentó la economía puso al sistema energético al límite de sus capacidades en momentos de fuerte aumento de la demanda. En este contexto el gobierno ha desplegado una fuerte política de subsidios transferencias superiores a los 9.000 millones de pesos al sector energético privado.

Otros agentes que se han convertido en beneficiario de los subsidios estatales han sido aquellos ligados al sistema de transporte público, principalmente los ferrocarriles concesionados. Esta política de subsidios puede ser apreciada en el aumento de la partida presupuestaria de servicios económicos “que en términos reales prácticamente se quintuplicó entre 2002 y 2005” (CENDA, 2007:27). En este sentido, la política de renegociación desplegada quedó fuertemente centrada en el control de las tarifas con el fin de mantener el nuevo esquema de precios relativos, aunque no avanzó en exigir a las privatizadas la realización de las inversiones incumplidas durante toda la década de los noventa.

Los gobiernos, si bien han asumido una postura de mayor firmeza frente a las privatizadas que los gobiernos anteriores, no han propuesto un plan integral de recuperación de los recursos estratégicos. Es importante señalar que en el modelo post-convertibilidad las privatizadas ocupan una posición subordinada respecto de la ocupada en los años 90, cuando representando sólo el 13% de las empresas de la cúpula empresaria, explicaba aproximadamente el 57% de las ganancias totales de la misma (Azpiazu y Basualdo, 2004). Si bien en el modelo actual las empresas de servicios públicos privatizadas (a diferencia de las privatizadas productivo-exportadoras como Repsol) han perdido posiciones al interior de la cúpula empresaria, se ha desplegado una política de subsidios que representa un mecanismo de transferencia de recursos de carácter compensatorio, con montos que alcanzaron, por

24 Clarín 18/9/2006

25 Clarín 26/12/2006. ENRE: Ente Nacional Regulador de Electricidad.

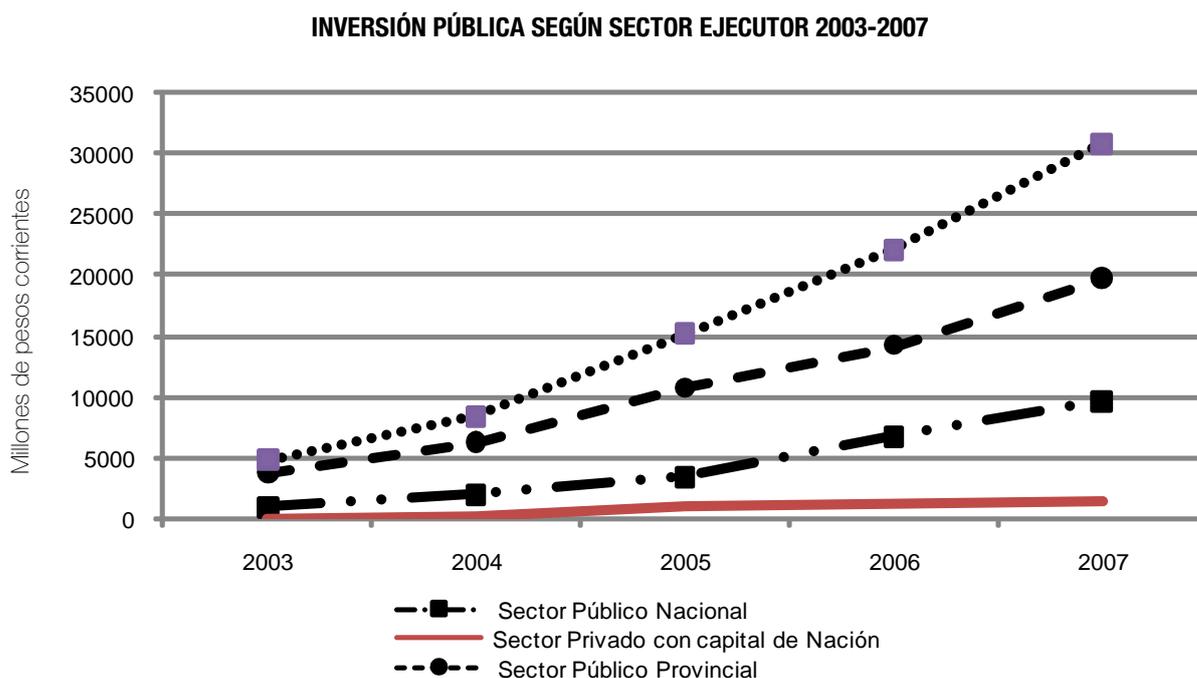
26 El Día 18/1/2005

ejemplo, los \$6.700 millones anuales para el sector transporte y más de \$9.230 millones al sector energético, en 2007, procurando armonizar las relaciones entre fracciones de clases en el marco de las nuevas relaciones de fuerzas, que confirmaban con el nuevo esquema de precios relativos mejores capacidad de apropiación del excedente económico por parte de los grandes agentes productores de bienes transables, ligados a la exportación.

3.7. *Obra pública*

Una acción estatal destacada dentro del modelo post-convertibilidad ha sido el incremento de la inversión pública principalmente orientada a la conformación de grandes planes de obra pública. Como sostiene el Ministerio de Economía (2008) la inversión pública consiste en el adelanto de recursos que se materializan principalmente en la incorporación al proceso productivo de activos especializados, y que viabilizan incrementos sistemáticos de productividad, al tiempo que integra la demanda de corto plazo, como un componente autónomo (o sea no dependiente del ingreso corriente de los individuos). A su vez, debe considerarse que la ejecución de proyectos de inversión pública requiere de períodos de tiempo considerables, por lo cual precisan de una política regular de modo de no comprometer el desarrollo de los mismos. Esta acción estatal si bien no constituye una política fundacional del modelo, se fue conformando desde 2003 en una constante de alta relevancia por los crecientes recursos involucrados. Por este motivo debe ser considerada como una política central en la configuración del modelo de acumulación.

La inversión pública total se compone de las inversiones ejecutadas tanto por el Sector Público Na-



Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía (2009). Se aclara que parte sustancial de la inversión ejecutada por el S.P. Provincial hasta 2006 corresponde a recursos transferidos desde Nación

cional, el Sector Privado mediante transferencias de capital de la Nación, y las ejecutadas por el Sector Público Provincial. Mientras la inversión pública había alcanzado el piso mínimo histórico en 2002, la misma comenzó a recobrar creciente dinamismo desde 2003 mostrando una expansión del 539% al año 2007. Debe notarse que el financiamiento hasta 2006 fue desarrollado ampliamente con recursos del Sector Público Nacional, año en que llegó a aportar aproximadamente la mitad de los fondos de inversión totales ejecutados por las provincias. Sin embargo en 2007 se revirtió esta situación, y las provincias aportaron cerca de dos tercios de la inversión ejecutada por ellas mismas, evidenciando la

recuperación económica fiscal de los Estados provinciales y su mayor capacidad de desarrollar inversiones en línea con la tendencia observada nacionalmente.

La inversión pública nos permite visualizar algunos componentes novedosos que comenzaron a conformarse en rasgos significativos de esta acción estatal. Por un lado, los fondos presupuestarios nacionales y provinciales destinados a inversión pública (o sea aquellos que excluyen las inversiones realizadas por las empresas públicas, universidades y fondos fiduciarios, entre otros) cobraron creciente relevancia por su tendencia a explicar mayores porcentajes de la Inversión Bruta Interna Fija (IBIF), partiendo de representar sólo el 6,4% de la misma en 2002 y terminando en 2007 por explicar 10,7% de la misma. En este camino, puede observarse que la Inversión Pública total en la post-convertibilidad, como componente de la IBIF, haya crecido a mayor ritmo en el periodo 2003-2007 que la inversión privada.

A su vez, la inversión presupuestaria muestra su componente más dinámico en las Inversiones Reales Directas (IRD), es decir los proyectos de inversión pública ejecutados directamente por el gobierno nacional, que mostraron un aumento, en valores corrientes, del 734% entre 2003 y 2007²⁷. La IRD tuvo dos instancias de gestión principales: la Dirección Nacional de Vialidad, que administró el 56,3% de los fondos administrados y el Ministerio de Planificación, con el 9,4% (año 2007). Si por un lado más de la mitad de la IRD se orientó a distintos proyectos viales, los fondos manejados por el Ministerio de Planificación se concentraron en tres programas de infraestructura: Programa de Desarrollo Integrador del Norte Grande, Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte Automotor y Ferroviario y, por último, Formulación y Conducción de Políticas Portuarias.²⁸ Asimismo, las transferencias de capital hacia las provincias tuvieron un destino principal en la construcción de viviendas y desarrollo urbano (40%), mientras que las transferencias de capital hacia el sector privado se orientaron preferentemente, aunque con distintos porcentajes según el año, al sector energético.

Por otra parte, un componente que marca una clara ruptura con el modelo de los años 90 es la reaparición de la inversión pública por parte de empresas estatales. Las mismas fueron cobrando relevancia con las reestatizaciones de empresas de servicios previamente privatizadas y la creación de nuevas empresas estatales durante el gobierno de Néstor Kirchner. En este proceso se observa un superlativo aumento porcentual del 1832%, pasando de tan sólo \$59 millones invertidos por las empresas estatales en 2003 a los 1140 millones en 2007.

Estos distintos elementos nos permiten visualizar como desde el Estado Nacional se lidera la inversión como acción estatal de creciente peso, convirtiéndose en una variable económica regular del modelo de acumulación post-convertibilidad. De este modo, la inversión pública comenzó a ser considerada como una intervención tendiente a sostener e impulsar el proceso de crecimiento económico que comenzó a experimentar Argentina desde 2003.

4. CONCLUSIONES

El modelo de acumulación actual tiene su origen en el contexto de crisis integral que marcó el agotamiento del “modelo de la convertibilidad” (1989-2001), el cual encarnó la forma más acabada de profundización de la ofensiva del capital efectivizada con la instauración del régimen de acumulación neoliberal (1976-2001). El modelo post-convertibilidad comenzó a configurarse a partir de seis políticas fundacionales: 1) la devaluación, 2) la implementación de retenciones a la exportación, 3) la pesificación asimétrica de deuda privada, 4) el “salvataje” al capital financiero, 5) el default, 6) el congelamiento y renegociación de tarifas. Estas políticas, que tuvieron en su mayoría un lugar destacado en la Ley de Emergencia Pública del 6 de enero de 2002, fueron dando origen a un nuevo modelo de acumulación que, presentando rupturas y continuidades respecto del modelo de los años 90, se vincularon a cambios particulares en la correlación de fuerzas, definiendo un reparto diferencial de cargas y beneficios.

27 De \$800 millones en 2003 a \$6673 en 2007. Datos tomados de Ministerio de Economía 2009.

28 Especificaciones de inversión pública del 2006 tomados de “Plan Nacional de Inversiones Públicas 2006-2008. Resumen Ejecutivo” del Ministerio de Economía. En 2007 se incrementaron los fondos para proyectos portuarios.

La devaluación generó un tipo de cambio internacionalmente competitivo que permitió a los agentes del capital productivo la dinamización de las exportaciones, y a través de su gravamen mediante retenciones y el aumento de la recaudación tributaria, dio lugar a la recomposición de las cuentas públicas. Esta vía de recuperación económica ha conllevado un aumento de la producción manufacturera, incluyendo un fenómeno incipiente de sustitución de importaciones producto de la protección que generó la modificación del tipo de cambio al aumentar el costo de las importaciones. La política cambiaria se constituyó en una acción estatal clave en el ordenamiento del modelo de acumulación, y fue orientada al sostenimiento de un tipo de cambio real multilateral competitivo. Por otra parte, el efecto inflacionario ligado a la devaluación redujo sustancialmente el salario real disminuyendo de forma significativa el costo laboral, y junto al congelamiento relativo de las tarifas de servicios, los precios internacionales favorables y el nuevo tipo de cambio, permitieron a los agentes productivo-exportadores generar elevados márgenes de ganancia y recuperar niveles de actividad económica. El impulso que ha cobrado esta orientación exportadora ha permitido alcanzar un considerable superávit comercial que, junto al superávit fiscal, favorecido vía retenciones, configuran los dos pilares de estabilidad del modelo.

A su vez, la estructura exportadora posee un fuerte componente de bienes exportados que son al mismo tiempo productos de consumo masivo de la población, repercutiendo negativamente en el nivel de inflación y socavando el salario real, debido a la tendencia del empresariado a “dolarizar” el precio de estos productos para equipararlos con los precios netos de exportación. Es ante esta circunstancia que las retenciones procuraron, por un lado, limitar la inflación, desdoblado precios internos y externos, y por otro, constituir una herramienta de recaudación fiscal.

La pesificación asimétrica implicó que los bancos debieran devolver los depósitos en dólares a \$1,40 por cada US\$1, mientras que los deudores con la banca local vieron pesificadas sus deudas en dólares a \$1 por US\$1. Si bien en un primer momento fue formulada con el fin de dar respuesta a las capas medias y las pequeñas y medianas empresas, cuando el lobby empresarial logró forzar al gobierno a derogar el techo impuesto inicialmente para la pesificación de deudas (US\$ 100.000), la pesificación asimétrica se convirtió en un mecanismo para “socializar” y licuar las deudas del gran capital.

En este contexto, el gobierno dispuso un plan de “*salvataje*” al capital financiero destinado a compensar a los capitales de dicho sector por los efectos de la salida devaluacionista y pesificadora a través de la emisión de nueva deuda pública por un monto total de US\$ 24.065 millones. El capital financiero se encontraba afectado por el *default* en tanto los conglomerados financieros eran poseedores de una parte importante de los bonos en cesación de pagos. El canje desarrollado en 2005 exhibió una significativa quita y mejora sustancial de los indicadores de deuda/PBI y deuda/exportaciones, aunque muestra también una férrea voluntad de pago por parte del Estado destinando al pago de deuda partidas que superan el gasto social en salud, educación y vivienda, con el fin de afrontar un arduo calendario de pagos entre los US\$ 10 mil y 20 millones anuales. A su vez, la salida del canje dejó una reestructuración de la deuda pública que incluye nuevos elementos dinámicos tales como las Unidades Ligadas al PBI y la indexación de la deuda en pesos a la inflación, que forman parte de una acción estatal que procura compensar a la fracción financiera del capital ahora subordinada al interior de la clase dominante. Una política central desplegada en materia de deuda pública se vinculó al cancelamiento de deuda con el FMI que implicó el fin del acuerdo con el organismo y la limitación de su injerencia sobre las políticas económicas, permitiendo reforzar la autonomía relativa del Estado argentino.

Otra de las políticas fundacionales señaladas es el congelamiento y renegociación tarifaria que afectó a las privatizadas. Si bien la Ley de Emergencia Pública poseía un alcance suficiente como para modificar profundamente la relación entre el estado y estos agentes del capital, las negociaciones se limitaron durante el gobierno de Duhalde a la discusión de las tarifas. Esta política se complejizó en el gobierno de N. Kirchner a través del desarrollo de una estrategia heterogénea consistente en tres acciones estatales: renegociación, reestatización y creación de empresas estatales, persiguiendo tres objetivos: 1) dismantelar los procesos judiciales que muchas privatizadas llevaron al CIADI; 2) mantener el nuevo esquema de precios relativos favorables a la producción de bienes transables; y 3)

aumentar la influencia del Estado en determinadas áreas. Los gobiernos post-convertibilidad, si bien han asumido una postura de mayor firmeza frente a las privatizadas, no han desplegado un proyecto de recuperación de los recursos estratégicos. El cambio en los precios relativos favorables a la producción de bienes transables evidencia modificaciones en las relaciones de fuerzas en detrimento de las empresas de servicios, quienes conformaban parte del núcleo “ganador” de los años 90, aunque han sido parcialmente compensadas por una política de subsidios.

Finalmente, una política central de la Argentina post-convertibilidad es el crecimiento, desde 2003, de la inversión pública. Esta política marca una novedad respecto de los años 90 en tanto el Estado comenzó a ocupar un papel de creciente importancia a través de la inversión con el fin de estimular la actividad económica y desarrollar vastos planes de obra pública reforzando la presencia del Estado en la economía.

Observamos, en síntesis, que en el periodo 2002-2007 se configura un nuevo modelo que procura saldar la crisis de 2001, en el que el Estado emerge como un actor fundamental en la movilización de recursos a través de diversos mecanismos de transferencias, que si bien se enlazan con cambios en la correlación de fuerzas entre las distintas fracciones de clase, busca organizar los “equilibrios inestables de compromiso” gestando un nuevo momento conciliatorio en la administración de la fase expansiva del ciclo económico. En este camino, las seis políticas fundacionales señaladas tuvieron claras incidencias, junto a otras políticas centrales, en la configuración del modelo de acumulación estableciendo algunos de sus rasgos constitutivos.

5. BIBLIOGRAFÍA:

- AIPE (Agencia Interamericana de Prensa Económica). 2005. En Diario de América, http://www.diariodeamerica.com/front_notas_detalle.php?id_noticia=929
- Azpiazu, Daniel y Basualdo, Eduardo. 2004. “Las privatizaciones en la Argentina. Génesis, desarrollo e impactos estructurales”. En Petras, J. Y Veltmeyer, H. comp, *Las privatizaciones y la desnacionalización en América Latina*. Buenos Aires, Prometeo.
- Azpiazu, Daniel y Schorr, Martín. 2003. *Crónica de una sumisión anunciada. Las renegociaciones con las empresas privatizadas bajo la administración Duhalde*. Buenos Aires, Siglo XXI Editores.
- Basualdo, Eduardo. 2001. *Sistema político y modelo de acumulación en la Argentina*. Bernal, Universidad Nacional de Quilmes-FLACSO-IDEP.
- BCRA. 2005. “Índice del Tipo de Cambio Real Multilateral”, Resumen ejecutivo de mayo, Subgerencia General de Investigaciones Económicas, Argentina.
- Bembi, Mariela y Nemiña, Pablo. 2007. *Neoliberalismo y desendeudamiento. La relación Argentina-FMI. Claves para todos*, Capital Intelectual, Buenos Aires.
- Castellani, Ana G. y Szkolnik, Mariano. 2005. “Devaluacionistas y dolarizadores. La construcción social de las alternativas propuestas por los sectores dominantes ante la crisis de la Convertibilidad. Argentina 1999-2000”. En <http://www.argiropolis.com.ar>.
- CENDA. 2007. “El gasto público en la post-convertibilidad: quiebres y continuidades” en Notas de la economía Argentina 04, diciembre 2007.
- Chomsky, Noam. 2007. “La imposición de libre mercado como misión imperial: de Reagan a Bush” [CLASE]. En: Curso virtual La Economía mundial y el imperialismo. Programa Latinoamericano de Educación a Distancia, Centro Cultural de la Cooperación, Buenos Aires, Setiembre 2007.
- Cibils, Alan. 2006. “La política monetaria 2003-2006”, Serie *Análisis de Coyuntura* n° 11, CIEPP, Argentina.
- Cobe, Lorena. 2009. *La salida de la convertibilidad. Los bancos y la pesificación*. Colección Claves Para Todos (Nun coord.). Capital Intelectual. Buenos Aires.
- Costa, Augusto, Kicillof, Axel, Nahón, Cecilia. 2004. “Las consecuencias económicas del Sr. Lavagna. Dilemas de un país devaluado” en *Realidad Económica*, n° 214, Buenos Aires.
- Damill, Mario, Frenkel, Roberto y Rapetti, Martín. 2005. “La deuda argentina: historia, default y reestructuración” en *CEDES* n°16, Buenos Aires.
- Diamand, Marcelo 1973. *Doctrinas Económicas, Desarrollo e Independencia*. Paidós. Buenos Aires.

- FISyP. 2009. "Informe de coyuntura. Primer trimestre 2009", Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, Buenos Aires. [<http://www.fisyp.org.ar/webfisyp/infcoy.doc>].
- Frenkel, Roberto y Rapetti, Martín. 2007. "Política Cambiaria y Monetaria después del Colapso de la Convertibilidad" en *Ensayos Económicos* n°46, BCRA, Argentina.
- Lucita, Eduardo. 2005. "Nueva reestructuración de la deuda". En website de argenpress.info. Publicado el 28/5/2005.
- Marx, Karl. 2006. *El Capital*. Tomo III, Libro Tercero, Siglo XXI, México.
- Ministerio de Economía 2006. "Plan Nacional de Inversiones Públicas 2006-2008. Resumen Ejecutivo" elaborado por la Dirección Nacional de Inversión Pública.
- Ministerio de Economía 2008. "Plan Nacional de Inversiones Públicas 2008-2010", elaborado por la Dirección Nacional de Inversión Pública.
- Ministerio de Economía 2009. "Plan Nacional de Inversiones Públicas 2009-2011". elaborado por la Dirección Nacional de Inversión Pública.
- Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 2004. "Costos laborales en la Argentina 2003. Un análisis comparativo" Serie de documentos de trabajo n°1.
- Poulantzas, Nicos. 1981 (1976). *Las clases sociales en el capitalismo actual*. México D.F, Siglo XXI Editores.
- Rapetti, Martín. 2005. "La Macroeconomía Argentina durante la Post-convertibilidad: evolución debates y perspectivas", en *Policy Papers* n°5, Observatorio Argentina, New School University, EEUU.
- Schorr, Martín y Wainer, Andrés. 2005. "Argentina: muerte y resurrección? Notas sobre la relación entre economía y política en la transición del 'modelo de los noventa' al del 'dólar alto'". *Realidad Económica*, n° 211, Buenos Aires.
- Secretaría de Finanzas 2007. "Estrategia y Programa Financiero 2008". Ministerio de Economía.
- Tolón, Gaspar 2005. "El crecimiento del complejo agroalimentario" en *Datos & Opinión de la coyuntura cooperativa* N° 58.
- Varesi, Gastón. 2008. "La actualidad de deuda argentina. Resolución del default, actores y políticas en el modelo post-convertibilidad, 2002-2007." en *Periferias Revista de Ciencias Sociales* n°16, Buenos Aires.
- Varesi, Gastón. 2009. "Empresas privatizadas y acciones estatales en el modelo post-convertibilidad, 2002-2007". Ponencia presentada al XXVII Congreso ALAS, Buenos Aires.

ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LA CUESTIÓN DEL NEODESARROLLISMO Y LA ALTERNATIVA POLÍTICA AL NEOLIBERALISMO.

*Germán D. Pinazo**

INTRODUCCIÓN.

La industria no es solamente producir “fierros” o tener obreros; producir, ser industrial es apostar al valor agregado, es apostar a tener cada vez más trabajadores, más calificados y mejor pagos que además impulsen el mercado interno, el consumo, y entonces construyan lo que es el círculo virtuoso de la economía y del verdadero capitalismo.

Cristina Fernández, marzo 2009)

Se puede decir que los gobiernos latinoamericanos que en estos últimos años han roto con el discurso y las políticas neoliberales pueden ser englobados en dos grandes grupos: aquellos para quienes la ruptura con el neoliberalismo consiste, esquemáticamente, en devolverle un rol central al Estado en lo que tiene que ver con el diseño de una política de desarrollo industrial (Brasil y Argentina podrían ser incluidos aquí), y aquellos que han llevado adelante una política de corte más radical, que incluye el cuestionamiento mismo de los pilares del Estado democrático liberal (Venezuela, Ecuador y Bolivia).

Esquemáticamente, desde el punto de vista de los primeros, la disputa política central sería entre un modelo (es una palabra poco feliz, pero comúnmente utilizada) basado en la especulación financiera, y otro basado en la producción de bienes, especialmente industriales. El primero es sinónimo de desocupación, miseria y sometimiento a los capitales internacionales (cuya expresión máxima es el Fondo Monetario Internacional), mientras que dentro del segundo es posible pensar en cierto “virtuosismo” que consistiría en la complementariedad de intereses entre cierta burguesía local productivista, y una clase trabajadora cada vez más numerosa que funcionaría como motora del consumo y la producción.¹

A nuestro entender esta dicotomía tiene su fundamento en una imagen particular del capitalismo de mediados del siglo XX, donde, a raíz de varios procesos históricos económico-político complementarios (segunda postguerra, economías cerradas, tamaño de los mercados, costos de transporte, etc), casi cualquier proceso de crecimiento industrial estaba asociado a un mejoramiento relativo en las condiciones de vida de los sectores populares, y a cierta posibilidad de alianza política entre el capital transnacional y las burguesías locales.²

Aquí nos parece interesante pensar en qué medida las condiciones históricas de hoy son distintas de las de antaño, porque es desde aquí de alguna manera que podemos pen-

* Investigador y docente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas (FISyP) y de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS).

1 Ver por ejemplo el trabajo de Frascina (2009), o la siguiente nota: “En este sentido, el modelo económico kirchnerista no sólo significó un progreso desde el punto de vista histórico al sustituir el modelo neoliberal, sino que además significa un avance desde el punto de vista de los modelos en disputa donde las entidades agrarias añoran volver al modelo agroexportador en contraposición a la profundización del proceso de industrialización con inclusión social.” Nota publicada en BAE el 28 de mayo de 2010, tomada del sitio Grupo de Estudio de Economía Nacional y Popular. <http://www.geenap.com.ar/articulosperiodisticos52.html>.

2 Sobre este tema ver Basualdo (2006).

sar en la viabilidad y los límites de los proyectos políticos alternativos al neoliberalismo. Además, entendemos que es a partir de los límites de los proyectos neodesarrollistas³ que pueden entenderse el sentido de las alternativas políticas más radicales. En términos concretos, consideramos que en contextos históricos radicalmente distintos los de antaño, las viejas recetas del desarrollo podrían ser ineficaces para solucionar los actuales problemas de los sectores populares y, en este sentido, podrían ser necesarias medidas que entren en contradicción con algunos de los principios “fundantes” del Estado liberal.⁴

A su vez, nos parece que el análisis del conflicto reciente ocurrido en la empresa autopartista Paraná Metal, es útil para pensar estas problemáticas. Básicamente porque entendemos que pone en evidencia ciertas transformaciones estructurales que han ocurrido en el sector industrial en las últimas décadas, que ponen en cuestión la capacidad “inclusiva” de un esquema de desarrollo como el que viene teniendo lugar en la Argentina.

La idea de este trabajo es entonces abordar brevemente las transformaciones ocurridas en el negocio automotriz, entendidas como paradigmáticas de las transformaciones estructurales mencionadas,⁵ para luego abordar la especificidad del caso Paraná Metal, intentando formular a partir de allí reflexiones en torno al período de crecimiento reciente de la historia argentina. Es decir, es un trabajo que intentará moverse desde ciertas particularidades de algunos sectores y actores centrales de estructura económica argentina, hacia cuestiones generales que terminen abordando el problema de la alternativa política al neoliberalismo.

UNA INTRODUCCIÓN AL PROBLEMA DE LOS CAMBIOS EN LAS LÓGICAS PRODUCTIVAS DE CIERTOS EMPRESARIOS INDUSTRIALES: UNA VISIÓN DESDE EL SEGMENTO TERMINAL DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ.

El caso de una empresa autopartista como Paraná Metal es sumamente interesante a los fines de estas páginas, porque muestra claramente ciertos límites del pensamiento político que ve en las alianzas políticas de antaño una posibilidad actual. Básicamente el caso de la empresa en cuestión muestra en toda su magnitud las consecuencias de ciertas transformaciones que han alterado radicalmente la estructura económica argentina y con ella, en una parte sustantiva, la de las distintas fracciones de clase.

Muy esquemáticamente, los profundos desarrollos tecnológicos acaecidos durante al menos los últimos 35 años (fundamentalmente aquellos vinculados a la informática, y al desarrollo en las comunicaciones), aplicados tanto a procesos de producción, como de gestión y comercialización, han redefinido el lugar de las estructuras periféricas como la Argentina en la división internacional del trabajo. En este sentido, las reformas neoliberales no tuvieron sólo que ver con transformaciones superestructurales, fácilmente reemplazables por un gobierno que pretenda “re-orientar la economía” desde los servicios y el sector financiero, a la industria. Hoy, a partir de ciertas transformaciones tecnológicas, económicas y políticas, una parte importante de la actividad industrial tiene más que ver

3 Con este nombre se designa comúnmente, y de manera un tanto difusa podríamos agregar, al primer grupo de críticas. Sobre este tema, ver Bresser-Pereira (2007) por ejemplo. En esta línea nos parece que pueden entenderse muchas de las tensiones que se han producido incluso en la Argentina en los últimos 2 años. El ejemplo paradigmático es el de la reestatización de los Fondos de Jubilaciones y Pensiones que, claramente, entra en tensión con la idea de continuidad jurídica del Estado. El sector automotriz fue, como veremos, en varios sentidos el motor del desarrollo industrial argentino de mediados del siglo XX. A partir de una estrategia particular del capital transnacional ubicado en el segmento terminal de dicha industria, la producción de automóviles lideró el crecimiento de gran parte de la actividad industrial de aquel entonces. Como veremos, también supo ser uno de los principales motores del actual escenario de crecimiento económico. Al respecto, se puede consultar a Santarcángelo y Pinazo (2009).

4 En esta línea nos parece que pueden entenderse muchas de las tensiones que se han producido incluso en la Argentina en los últimos 2 años. El ejemplo paradigmático es el de la reestatización de los Fondos de Jubilaciones y Pensiones que, claramente, entra en tensión con la idea de continuidad jurídica del Estado.

5 El sector automotriz fue, como veremos, en varios sentidos el motor del desarrollo industrial argentino de mediados del siglo XX. A partir de una estrategia particular del capital transnacional ubicado en el segmento terminal de dicha industria, la producción de automóviles lideró el crecimiento de gran parte de la actividad industrial de aquel entonces. Como veremos, también supo ser uno de los principales motores del actual escenario de crecimiento económico. Al respecto, se puede consultar a Santarcángelo y Pinazo (2009).

con los viejos enclaves exportadores vinculados al aprovechamiento de recursos naturales, que con una actividad a partir de la cual construir un ciclo de “crecimiento con empleo”, como el que supo transitar la Argentina (y otros países periféricos) a mediados del siglo pasado.

La actividad automotriz es el ejemplo paradigmático de esa nueva industria. Si antaño el “modelo” de producir y vender para los mercados internos suponía el desarrollo de toda una gama de empresarios que, al amparo de una industria fuertemente protegida, se dedicaban al abastecimiento de piezas para la naciente gran industria terminal, hoy eso ha cambiado radicalmente. Agotada la gran expansión que arrancó en los ´60, el tamaño del mercado interno fue un fuerte limitante para esa gran industria, que ha finales de los ´80 se modificó sustantivamente. La renovación de plataformas de ensamble en el segmento terminal, la utilización de la robótica, la baja en los costos de transporte y la estandarización regional de productos vinculada a lo primero, “revolucionaron” el modo de producir automóviles, justamente en un momento donde los márgenes de ganancia se vieron estrangulados por estancamientos por el lado de la demanda y por los “altos” costos salariales. Allí, el cambio en las escalas de producción y comercialización, tanto de productos finales como de insumos y, fundamentalmente la posibilidad de reducir costos a partir de una reducción en el número de proveedores de estos últimos, no sólo dieron un nuevo empuje a la industria en latinoamérica, sino que fueron el final de la industria automotriz nacionalmente integrada, y de la complementariedad de intereses entre el gran capital transnacional ubicado en el segmento terminal y la burguesía local ubicada en el segmento autopartista. Y desde allí, el final del círculo virtuoso que vinculaba el crecimiento económico de las empresas transnacionales al de un amplio conjunto de la burguesía local. Las palabras del conocido texto de Sourrouille sobre son elocuentes sobre lo que la industria automotriz supo ser y ya no es: “La industria terminal (del sector automotriz) *es el mercado final para casi todos los sectores en los que se ha englobado la actividad económica interna*”. (Sourrouille, 1980).

Esta última cuestión es sumamente interesante desde distintos puntos de vista. Fue la particular estrategia del capital transnacional, durante lo que se conoce como el período de industrialización por sustitución de importaciones, tanto lo que permitió el desarrollo del sector autopartista, como el que condicionó, casi de un modo determinante, su estancamiento posterior. La estrategia de sobre-amortizar capital cuasi obsoleto (en términos del centro) en mercados periféricos protegidos (donde se diagnosticaba, con razón, una profunda brecha de demanda insatisfecha) fue lo que estimuló el desarrollo de la industria nacional de motores, cajas de cambio, y otros insumos para el armado final de automóviles, los cuales, además, eran el vínculo excluyente entre esta actividad y el resto de la estructura industrial. Retomando algunos términos del primer pensamiento estructuralista, la industria autopartista era el vínculo excluyente entre el sector moderno más importante de la estructura económica argentina de aquel entonces,⁶ el segmento terminal de la industria automotriz, e industrias locales como la del caucho, el vidrio, el acero y el plástico. De hecho, fue el particular dinamismo de la primera la que, gracias a estos estímulos, motorizó el período de mayor crecimiento de la actividad industrial de la historia argentina, en un contexto donde estos vínculos garantizaron niveles cercanos al pleno empleo de la fuerza de trabajo.

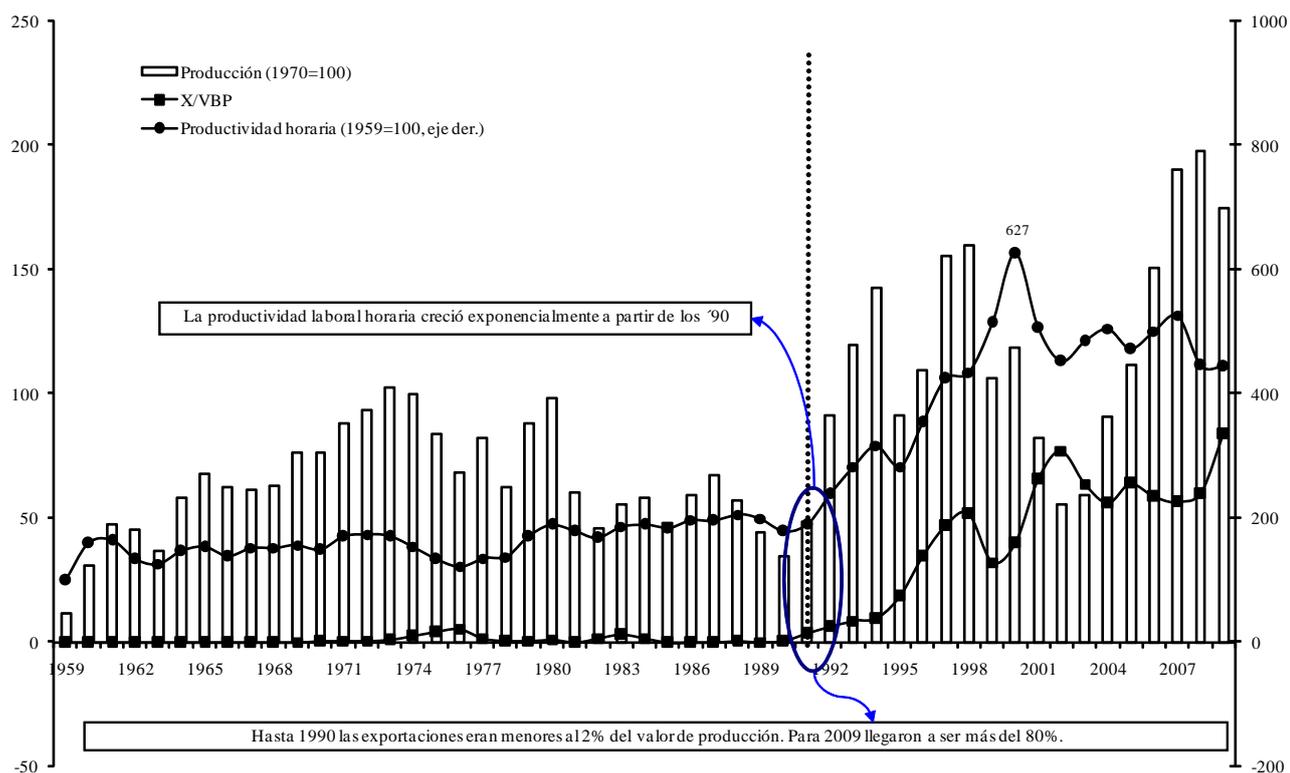
La pequeña “revolución” en el modo de producir automóviles, no fue otra cosa que un cambio en las estrategias de valorización de las empresas terminales a escala global, frente al agotamiento del esquema, recién descrito, de producir y vender fronteras adentro de los países periféricos. Ahora bien, en términos de lo que aquí nos interesa, esto redefinió la relación entre el capital extranjero y el empresario local. La adopción de escalas transnacionales y/o regionales en lo que tiene que ver con el abas-

6 La contracara del esquema, fue el poco estímulo al desarrollo autopartista. Mientras en países desarrollados las empresas autopartistas se constituían en los pilares del progreso técnico del conjunto de la cadena automotriz, en Argentina su supervivencia dependió de la decisión de pocas empresas extranjeras, que, en contextos de fuerte protección, poca intención tenían de seguir los estándares internacionales en la materia. Tanto la enorme capacidad ociosa con la que operó la industria durante todo el período (estimada en alrededor del 30% tanto de la industria terminal como autopartista para 1967, según ADEFA), como la sobreabundancia de modelos en función del tamaño del mercado (Parellada 1970), o la relación entre los costos locales de producción y los internacionales (aproximadamente dos veces y medio según las estimaciones de Sourrouille), dan cuenta de las profundas limitaciones que exhibía el esquema” (Santarcángelo y Pinazo, 2009.49).

tecimiento de insumos, dejó al grueso del empresariado autopartista local, acostumbrado a abastecer terminales poco “estimuladas” a la innovación tecnológica en contextos de fuerte protección, obligado a competir con burguesías muchos más desarrolladas como lo son sus pares brasileñas. En pocas palabras, hoy las transnacionales que antes eran proteccionistas son liberales, en virtud de su nueva lógica de reducir costos, y el resto de la burguesía local que no se “modernizó”, busca cómo sobrevivir.⁷

La burguesía nacional es, en este caso, la contracara de este proceso particular de modernización y el resultado es, entre otras cosas, una actividad manufacturera que se ha convertido, en ciertos sectores líderes como el automotriz, en una actividad de enclave. Como vemos en los gráficos que siguen, los cambios a los que hemos hecho mención han supuesto un crecimiento exponencial de la productividad laboral, cuya contracara es tanto el nivel de exportaciones, como los bajos salarios, y el abastecimiento a partir de la importación de productos. En efecto, si entre 1959 y 1990 la primera creció en el segmento terminal alrededor de un 2% anual acumulativo, de 1990 a la actualidad lo hecho a más de un 30%. Esto hace que la industria de ensamble tenga hoy, gracias a la posibilidad de trasladar plataformas “de punta” en términos tecnológicos, la misma productividad de industrias como la surcoreana. La diferencia es que los salarios siguen siendo periféricos⁸ y, gracias a la estandarización de productos y la baja en los costos de transporte, es posible importar autopartes a un menor costo del que se derivaría del desarrollo de la burguesía local.

GRÁFICO 1.
INDICADORES DEL SEGMENTO TERMINAL DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ. PRODUCCIÓN, PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES EN LA PRODUCCIÓN, PRODUCTIVIDAD LABORAL HORARIA. 1959-2009



Fuente: Elaboración propia sobre la base de ADEFA y Barbero et al (2007).

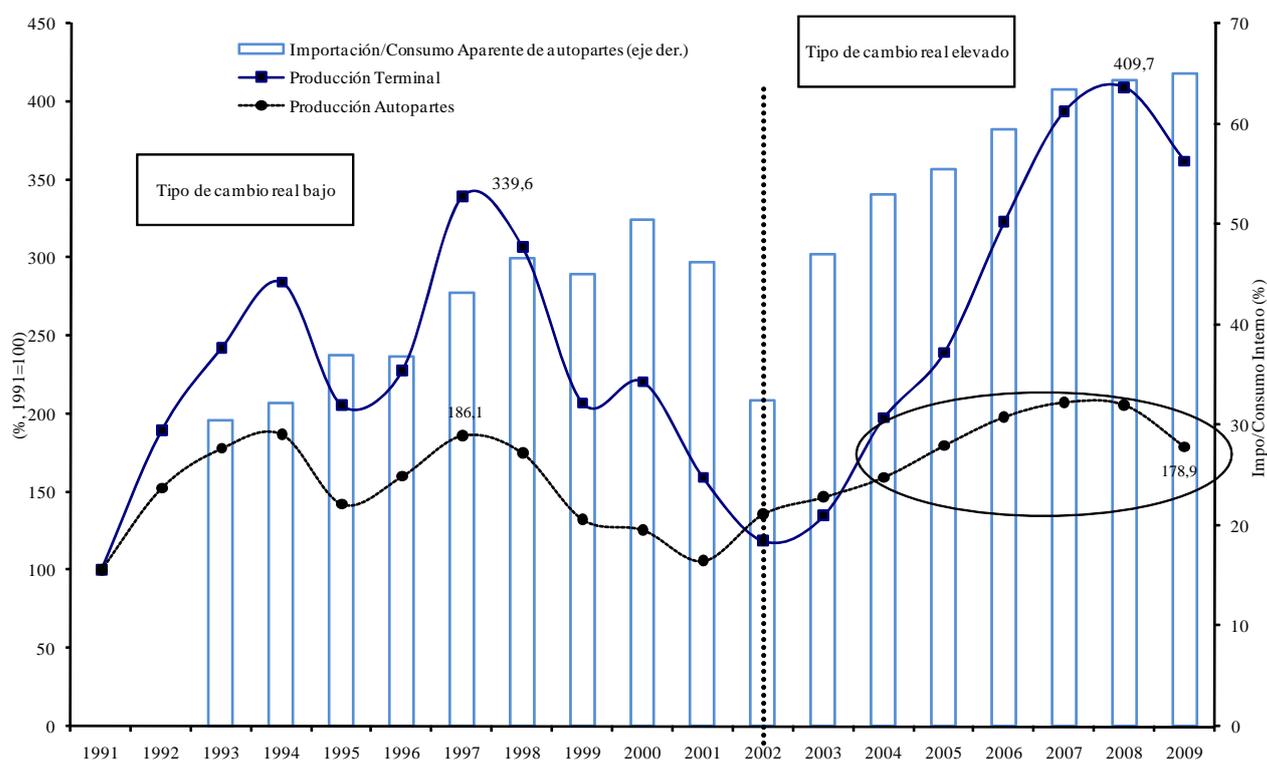
7 Las siguientes palabras de Minian (2009, p. 21, énfasis propio) parecen pensadas para el caso del empresariado autopartista argentino frente a los peligros de la competencia brasileña: “aún más complejos son los problemas que enfrentan los países que intentan insertarse en un patrón de especialización más avanzado. No sólo los requerimientos de inversión, de tecnología, de capital humano y de nuevas instituciones son exigentes, sino que a ello se agrega las dificultades que surgen de la existencia de países de nueva industrialización ya consolidados en este nuevo paradigma”.

8 El salario horario medio de un trabajador de la industria en Argentina era, en ese año, apenas un 40% del de Corea, y casi cuatro veces menos que el de Estados Unidos. La comparación surge de los datos de ADEFA (Asociación De Fabricantes de Automóviles; Argentina) y la Oficina de Estudios Laborales de EEUU.

Esto explica el crecimiento en las exportaciones de productos terminados como parte de la producción total (X/VBP) que viene teniendo lugar desde 1990. Antes, la exportación casi cercana a cero tenía que ver con la lógica particular antes descrita de las empresas extranjeras, hoy el hecho de que la industria exporte casi el 70% de su valor de producción tiene que ver con que el negocio es totalmente otro: *con productos estandarizados, parámetros de productividad e insumos del centro, y salarios periféricos, existe un especial atractivo para trasladar segmentos productivos de escaso valor agregado para luego exportar productos terminados.*

El peso de las autopartes importadas en el consumo nacional de las mismas, y la baja participación de los salarios en el valor agregado de la actividad, son los dos elementos que terminan de definir el cuadro general. Como vemos en el gráfico que sigue, independientemente de los estímulos macroeconómicos más importantes (es decir, de la protección efectiva derivada de la apreciación/devaluación del tipo de cambio real, o de los esquemas de créditos específicos), el peso de los productos importados viene creciendo sistemáticamente desde principios de los '90 a esta parte; es decir, desde que esta "nueva industria" viene teniendo lugar. Esto no es otra cosa que la contracara de la baja asociación entre el valor de producción del segmento terminal y el de la industria autopartista que podemos encontrar especialmente en el período de la postconvertibilidad.

GRÁFICO 2.
RELACIÓN ENTRE EL SEGMENTO TERMINAL Y AUTOPARTISTA. VALOR DE PRODUCCIÓN Y PESO DE LOS PRODUCTOS IMPORTADOS EN EL CONSUMO APARENTE DE AUTOPARTES. 1991-2009

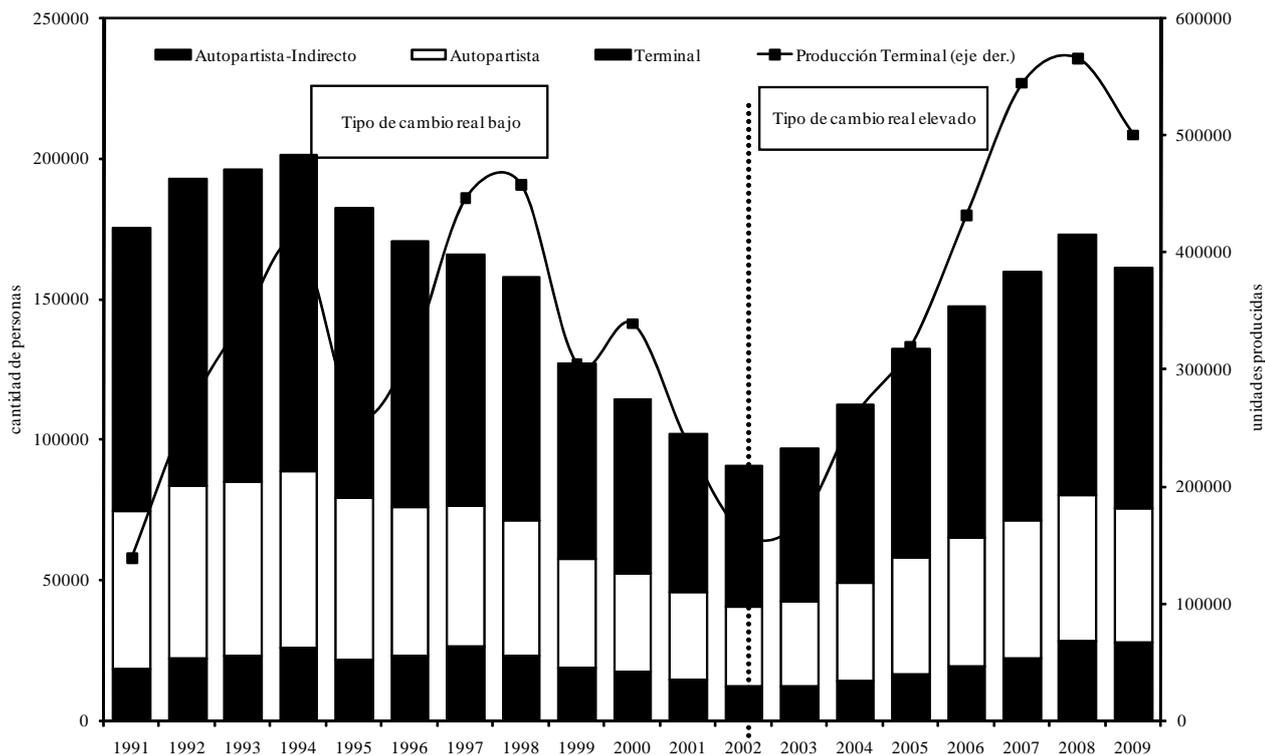


Fuente: Elaboración propia sobre la base del CEP (2010).

Ahora bien, lo importante de esta dinámica, es que el sector autopartista ha sido históricamente, y aún lo es, el vínculo excluyente entre el segmento terminal de la industria automotriz y el resto de la estructura económica.⁹ En este sentido, la (des)vinculación con dicho sector, no sólo es un elemento clave a la hora de tener en cuenta posibles efectos de transferencia tecnológica sobre el resto de los empresarios argentinos, sino que es central para entender los efectos cada vez menores que el crecimiento del sector automotriz tiene sobre la generación de empleo en nuestro país (gráfico n° 3).

⁹ Para 1991 se estimaba que el 46% de las compras del segmento terminal estaba orientado al sector autopartista, mientras que ningún otro sector superaba el 5% de las mismas (Kosacoff, et al, 1991: 19).

GRÁFICO N° 3.
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN FINAL DE AUTOMÓVILES //S A //S LA EVOLUCIÓN DEL EMPLEO EN EL CONJUNTO DE LA TRAMA AUTOMOTRIZ* 1991-2009



Fuente: Elaboración propia sobre la base del CEP (2010) y Matriz Insumo-Producto (1997)

* Dicha trama incluye, siguiendo a Motta et al (2007), al segmento terminal y autopartista como elementos centrales, pero, a diferencia de dicho artículo, incluye el empleo indirecto generado por el segmento autopartista en función de su centralidad, partir de los datos de la Matriz Insumo-Producto de 1997.

Como vemos, en momentos donde se vienen registrando año a año records históricos en materia de producción final de automóviles, y donde la industria en su conjunto viene siendo cada vez más significativa en términos del PBI,¹⁰ la trama ha disminuido significativamente su aporte al empleo asalariado¹¹, en un proceso íntimamente vinculado a la disociación observada en el gráfico 3. En efecto, lejos de ser el significativo aumento de la productividad laboral en el segmento terminal el factor determinante a la hora de comprender dicha disminución, es la desvinculación con el segmento autopartista local (a raíz tanto de su aporte directo al empleo asalariado, pero fundamentalmente de su aporte indirecto al mismo) lo que explica la significativa caída.

En resumidas cuentas, la industria automotriz argentina en la actualidad parece más a una actividad de enclave (que, en lugar de aprovechar la productividad diferencial de los recursos naturales, aprovecha el precio relativamente barato de la fuerza de trabajo) que una actividad que pueda contribuir a una proyecto de desarrollo, en *cualquiera* de los sentidos con que pueda utilizarse el término.

Lo interesante de esta problemática, es que hecha luz sobre varios indicadores curiosos que podemos encontrar en años recientes en economías periféricas. Según distintas fuentes, las economías latinoamericanas en particular, y subdesarrolladas en general, han incrementado en los últimos años significativamente su participación en las exportaciones mundiales de productos manufacturados, incluyendo en mercancías con un alto contenido tecnológico. La clave, como bien señalan autores como E. Arceo (2009, 2010) o Astarita (2006), es que esto no se traduce en un aumento de su participación en el valor agregado mundial. ¿Qué es lo que sucede? Justamente lo que podemos observar a partir

¹⁰ Según el Estimador Mensual Industrial, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, la “nueva” industria automotriz exportadora ha explicado el 31% del crecimiento de la industria manufacturera entre 2003 y 2008, siendo en 2003 apenas el 5% del PBI Industrial.

¹¹ En 1994, en pleno proceso de consolidación de la “nueva industria” global, la producción final de 408 mil unidades (record histórico en esa fecha) estaba asociada al empleo de 200 mil trabajadores asalariados. En 2008, con una producción de 560 mil unidades, el empleo asalariado total fue de 170 mil personas.

del análisis de la industria automotriz argentina. En un contexto histórico donde la tecnología así lo permite, el capital transnacional traslada a la periferia actividades fundamentalmente de ensamble, aprovechando los bajos costos laborales de estas últimas, se abastece desde sus casas matrices o desde determinados centros de operaciones puntuales (en el caso de los insumos de autopartes para Latinoamérica éste claramente es Brasil), y exporta. Esto mejora los indicadores de balanza comercial, pero no tiene ninguna repercusión en su estructura económica interna. De hecho, como veremos en el caso de Paraná Metal, es una estrategia que puede ser contradictoria a los intereses de ciertas burguesías nacionales previamente existentes. Las palabras de Giovanni Arrighi (1997: 188) son interesantes en relación al impacto de estas transformaciones sobre la división internacional del trabajo: según él, asistimos “a una división del trabajo donde el centro es predominantemente el lugar de emplazamiento de las actividades cerebrales del capital corporativo y la periferia el locus de los músculos y los nervios”.

PARANÁ METAL, ENCLAVES EXPORTADORES Y BURGUESÍA NACIONAL.

La empresa Paraná Metal es la contracara del éxito industria que todos los días es tapa de los diarios (incluidos los diarios no ubicados a la extrema derecha del espectro ideológico), es la contracara del nuevo éxito industrializador. La industria terminal rompe récords históricos de producción año tras año desde la devaluación a esta parte, y exporta más que nunca, pero, casualmente, con salarios que están por el piso, una parte importante de la producción nacional de insumos está en quiebra.

Como dijimos en el apartado anterior, desde la transformación de los '90 a esta parte, el negocio de las terminales pasa, entre otras cosas, por reducir el número de proveedores y, en ese escenario, las autopartistas brasileñas por distintos motivos (históricos y presentes), aparecen como la mejor alternativa para abastecer a la región. A medida que las terminales consolidan con éstas distintos vínculos estrictamente económicos y no tanto (logísticos, técnicos), cada vez es más difícil para el grueso del empresariado argentino mantener, o ampliar su vínculo con las primeras.

El ejemplo que traemos a colación es más elocuente que las varias páginas que podríamos seguir escribiendo en términos abstractos. Paraná Metal es una empresa que tiene su historia en los orígenes del crecimiento industrializador de mediados del siglo pasado, particularmente, nace como una de las tantas ramificaciones del grupo económico que hoy es dueño de Acindar en Villa Constitución.

Ya desde 2003 comienza a exhibir los primeros síntomas de estancamiento. Habida cuenta de su centralidad en términos de empleo (la empresa, que se dedica a la fabricación de blocks para motor, emplea casi 1200 trabajadores asalariados) el gobierno de Nestor Kirchner decidió enviar a un hombre de su confianza para que “la haga funcionar”. Y el negocio de este último pasó por utilizar al máximo las instalaciones existentes, pagando los menores salarios posibles. La pregunta a esta altura es, ¿qué pasa que no hay otro empresario nacional que quiera tomar la empresa en un contexto donde la industria automotriz crece como nunca?

El conflicto actual puede dar una pista al respecto. Ford, el principal destino de la producción de Paraná Metal, le ha comenzado a exigir a esta última dos cosas en los últimos años: que le provea de un motor terminado y testeado (lo cual significa transferirle una parte importante de los costos de ensamblado) y, en el último año, que renueve la producción de blocks para motor a partir de la utilización de aluminio en vez de acero. En términos concretos, esto significa para, cualquier empresario, un aumento significativo en los niveles de inversión en relación a sus ingresos corrientes, lo que se ve agravado por los riesgos que corren sus posibles ingresos futuros, frente a los siempre imprevistos deseos de las terminales¹² y la amenaza de la competencia brasileña.

En otras palabras, el caso de Paraná Metal parece expresar algo más que la desidia de un empresario amigo del gobierno (la cual, sin embargo, no deja de ser grave). Muestra las dificultades estructurales de un negocio que es central en términos de una industria que pretenda “derramar”, aunque más no

12 Existe un cierto consenso en gran parte de la literatura en cuanto a que la relación asimétrica poder entre terminales y autopartistas es un fuerte limitante para el desarrollo de estas últimas. Sobre este tema ver Gereffi (2001) o Yoguelet et al (2007).

sea, algunas gotas de progreso sobre la clase trabajadora. Muestra los límites en términos distributivos de un crecimiento industrial cuyo pilar es, hoy como antaño, la producción final de automóviles.

Si partimos del supuesto de que existe algo similar a la movilidad de capitales, es lógico que existan pocos capitalistas dispuestos a invertir altas suma de dinero en un negocio tan riesgoso y tan poco rentable en términos relativos como la industria autopartista. El negocio autopartista, con sus fuertes niveles de inversión y su lento retorno, compite con negocios de altísima rentabilidad y enorme laxitud en términos de entrada y salida como pueden ser los grupos inversores sojeros o los fideicomisos financieros. La burguesía amiga es, en este sentido, una expresión farsesca de la historia trágica de la vieja burguesía nacional. El gobierno identifica la centralidad distributiva del segmento industrial, pero a falta de algún capitalista con capacidad y disposición de correr el riesgo (y frente al estancamiento y caída de los existentes), negocia con su socio del juego, ciertos términos para que lo “haga andar” como sea.

Lo anterior no significa, bajo ningún punto de vista, que Paraná Metal no haya valorizado el capital invertido por sus empresarios. Simplemente intenta mostrar los límites específicos de esta lógica particular de valorización, y la diferencia radical con algo parecido a una burguesía nacional industrial que existe en el imaginario como referencia de un posible proyecto de “desarrollo nacional”.¹³ La racionalidad económica de los empresarios de Paraná Metal, al identificar la posible inviabilidad del negocio en el mediano plazo, fue básicamente especulativa. “Gastar” las instalaciones existentes sin realizar siquiera inversiones mínimas en mantenimiento, y negociar lo más a la baja posible el costo salarial.

Y este problema no necesariamente tiene que ver este gobierno particular. Este gobierno puede tener, y de hecho ha tenido, un discurso y unas políticas que son claramente distintas a las imperantes en los años de neoliberalismo profundo. Pero esta “parado” sobre estructuras políticas, económicas y mediáticas que se han consolidado durante esos años, y sobre las cuales parece ser necesaria la aplicación de políticas de corte radical. Es decir, podemos suponer que no alcanza con ofrecer créditos blandos a los pequeños capitalistas industriales, o algún otro tipo de pequeño incentivo económico, para combatir años de atraso local como a los intereses más generales del capital transnacional. Esto no quiere decir que estas políticas macroeconómicas no sean un quiebre con respecto al neoliberalismo puro y duro, simplemente intenta llamar la atención sobre las profundas asimetrías al interior de lo que comúnmente se engloba dentro de la idea de capital productivo. Siguiendo con esta idea, en lo que sigue trataremos de analizar los años de crecimiento reciente, en base a una particular caracterización de la estructura económica argentina, inspirada en las heterogeneidades de que nos muestra la industria automotriz.

ALGUNOS REFLEXIONES VINCULADAS AL CRECIMIENTO ECONÓMICO RECIENTE.

La reflexión precedente sobre el caso particular de Paraná Metal nos puede servir para observar ciertas particularidades del sector industrial que nos permitirán comprender un poco más sobre algunas cuestiones vinculadas al crecimiento económico reciente. Decimos esto porque, a primera vista, llama muchísimo la atención cómo la devaluación de la moneda de 2002 pareció, como por arte de magia, revertir las características macroeconómicas centrales de la década de los '90. De pronto, no sólo la industria comenzó a exhibir un comportamiento que no había mostrado en décadas, sino que su crecimiento motorizó además una dinámica agregada que no se registraba desde hace casi un siglo, acompañada de techos históricos en materia de empleo y superávits en términos comerciales.

Ahora bien, si en base a la discusión precedente agrupamos a los sectores en los que puede dividirse la actividad económica interna según sus parámetros de productividad (como una forma de aproximarnos a la competitividad heterogénea del aparato industrial argentino¹⁴), encontraremos va-

¹³ Es muy elocuente en este sentido la nota publicada por el diario Página 12 en el día domingo 8 de agosto de 2010. A. Zaiat, “en busca del sujeto perdido”.

¹⁴ Siguiendo el texto y la metodología de Lavopa (2007), en lo que sigue analizaremos el desempeño reciente de la economía argentina desagregando por tipo de actividad económica (industria manufacturera, producción primaria, cons-

rias cuestiones interesantes. En primer lugar, podremos ver que el dato novedoso en el período actual pasa, casi de manera excluyente en materia de crecimiento y empleo, por el comportamiento de las industrias de baja productividad; y que esto, en realidad, poco tiene de sorprendente. En segundo, y más importante aún, *que parece haber una identidad muy fuerte entre las actividades más competitivas que desarrolla el país y un reducido número de grandes empresas*. En efecto, si bien la comparación entre lo que hemos denominado como actividades de alta productividad (ver anexo) y las actividades que figuran en el informe que produce el INDEC sobre grandes empresas,¹⁵ es dificultosa (básicamente por el nivel de agregación de este último), es interesante señalar que la casi totalidad de grandes empresas está (y estuvo) dedicada a este tipo de actividades. Por otro lado, cuando comparamos los datos sobre valor agregado, vemos que lo producido por las casi 180 empresas dedicadas a la producción de alimentos, bebidas y tabaco, y químicos, combustibles y plásticos, es el equivalente a entre el 60 y 70% de todo lo producido por los estratos de alta productividad de 2002 a 2009. Es decir que, agregando las 8 empresas terminales automotrices y quitando las empresas dedicadas a la producción de plástico, estamos hablando de un conjunto de actividades de alta productividad que *es explicado casi con absoluta seguridad por menos de 200 empresas en el país*. Esto es fundamentalmente lo que permite comprender el desempeño de dichos sectores incluso durante años macroeconómicamente adversos para la industria como fueron los '90, y la gran similitud en términos de productividad entre ambos tipos de recorte.

Hablando ahora de la postconvertibilidad, específicamente del período el período 2002-2007,¹⁶ lo que vemos en el gráfico 2 es que éste no sólo se caracteriza por sus altas tasas de crecimiento económico agregado, sino por el particular dinamismo de la industria en general, y de las industrias de baja productividad en particular. En efecto, este es el hecho fundamental que distingue al período que estamos analizando de su predecesor en materia de crecimiento. Las industrias de baja productividad, que en 2002 explicaban apenas el 5% de PBI total, explicaron en el período 2003-2007 cerca del 12% del crecimiento económico (y, de hecho crecieron durante estos años en alrededor de un 150%). Este hecho específico es el que permite comprender porqué durante el período que analizamos la industria creció por primera vez en décadas por encima del PBI agregado, llegando a ubicarse en sus techos históricos a precios constantes de 1993.

Por otro lado, este particular dinamismo está vinculado a otro de los elementos centrales del período: la generación de empleo. Ateniéndonos particularmente a la generación de empleo asalariado,¹⁷ debemos decir que las industrias en general, y particularmente los estratos de baja productividad, son los sectores destacados en la materia. No sólo por la contribución directa que tuvieron durante los años de crecimiento (particularmente, como vemos en el cuadro 1, en los momentos donde el tipo de cambio se encontraba particularmente elevado en términos reales, años 2003-2006), sino por su particular efecto multiplicador sobre el resto de la estructura económica (Cuadro 3).

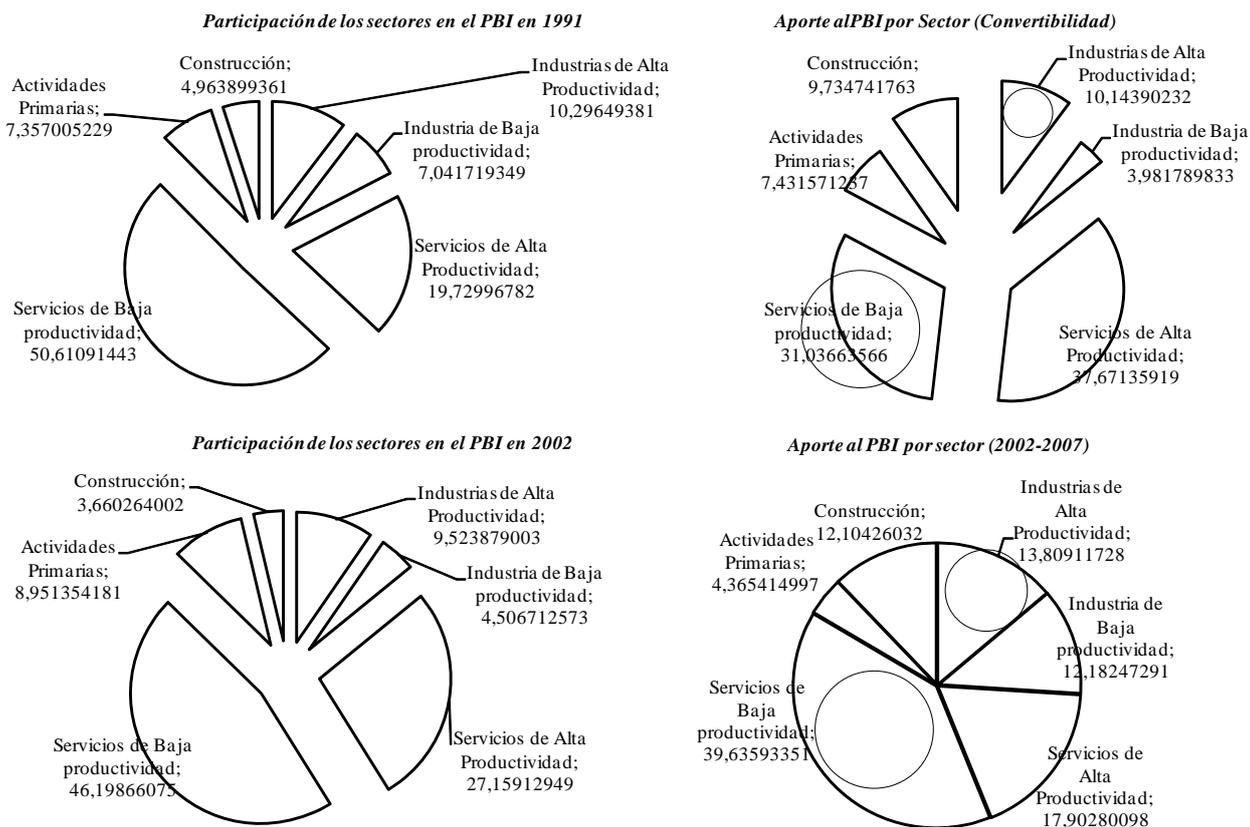
trucción y servicios) y estrato de productividad (alta o baja productividad). La idea es que la desagregación por estrato de productividad nos permita aproximarnos al carácter heterogéneo de la estructura productiva de nuestro país, y que esto nos permita contribuir a clarificar aquello que nos habíamos propuesto en la introducción, es decir, qué tipo de transformaciones se encuentran detrás del actual desempeño agregado de la economía argentina. Debemos decir por último que hemos denominado como estratos de alta productividad a aquellas ramas que, según la clasificación del CIUU rev. 3 a dos dígitos del Censo Económico de 1994, presentan parámetros de productividad por obrero ocupado iguales o superiores al doble de la media, y que al resto de los sectores los llamaremos estratos de baja productividad. Las diferencias con la metodología utilizada por Lavopa es que hemos distinguido a la construcción de los servicios de baja productividad, y que consideramos a la industria alimenticia como estrato de alta productividad, en función de su vinculación con recursos naturales de alta productividad en términos internacionales.

15 Para las comparaciones mencionadas se puede consultar el Anexo de este trabajo y los distintos informes públicos que figuran en la página oficial del indec: <http://www.indec.gov.ar/>.

16 La separación en la postconvertibilidad entre en período 2002-2007 y 2007-2009 tiene que ver con que, a raíz del fuerte proceso inflacionario de 2007, el tipo de cambio real se apreció sustantivamente a partir de enero de 2007, incidiendo sobre la dinámica de crecimiento de los sectores.

17 El empleo asalariado ha representado históricamente, y representa, alrededor del 80% del empleo total. Su estudio específico tiene que ver con el intento de vincular la dinámica de empleo con la del crecimiento de los estratos de baja productividad.

GRÁFICO Nº 4 APORTE DE LOS DISTINTOS SECTORES PRODUCTIVOS AL PBI DURANTE LOS AÑOS DE CRECIMIENTO DE LA CONVERTIBILIDAD Y EL PERIODO 2002-2007



Fuente: Elaboración propia sobre la base de Lavopa (2007) y el Ministerio de Economía

CUADRO Nº 1 DISTRIBUCIÓN DEL NUEVO EMPLEO ASALARIADO SEGÚN SECTORES PRODUCTIVOS (2003-2007)						
Años	Industrias de Alta Productividad	Industrias de Baja Productividad	Servicios de Alta Productividad	Servicios de Baja Productividad	Sector Público	Construcción
Distribución del empleo asalariado por sector (2003)						
2003	5,6	8,0	8,1	50,0	23,2	5,1
Aporte al nuevo empleo asalariado generado por sector						
2003-2007	5,6	17,1	14,9	40,4	6,3	15,6
2003-2006	5,9	18,0	12,2	42,7	3,4	17,8
2003-2005	5,5	21,8	20,4	39,2	-7,0	20,1
2003-2004	2,7	17,1	23,3	45,6	-7,0	18,3

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la EPH (INDEC).
 (Por ser una encuesta que se realiza en aglomerados urbanos, la EPH no refleja adecuadamente lo que sucede con el empleo en el sector primario en general, y agropecuario en particular. Por tal motivo, en los cuadros donde nos referimos al empleo, no tenemos en cuenta lo acontecido en dichos sectores, y agregamos al sector público que no era de nuestro interés al referimos a lo acontecido con el PBI).

CUADRO N° 2 REQUERIMIENTOS DIRECTOS DE PRODUCCIÓN Y EFECTOS MULTIPLICADORES DE EMPLEO POR ESTRATO PRODUCTIVO, SEGÚN LA MATRIZ DE INSUMO-PRODUCTO DE 1997						
	Sectorés Productivos *2					
	Primario	Industrias Alta Productividad	Industrias Baja Productividad	Servicios Alta Productividad	Servicios Baja Productividad	Construcción
Requerimientos directos de producción*	0,37	0,45	0,52	0,31	0,3	0,47
Multiplicadores de Empleo*1	2,02	4,34	2,96	1,50	1,7	1,64

* En pesos por peso producido en el sector
*1 En cantidad de veces por las cuales se multiplica el empleo en el conjunto de la economía, por cada 1000 puestos de trabajo que se crean en el sector
*2 Promedio del conjunto de ramas a 5 dígitos incluidos en cada sector según la Matriz de Insumo-Producto de 1997

Ahora bien, si la reactivación de las industrias de baja productividad son una de las claves para comprender la reactivación en el empleo, en las antípodas, y como veremos en los gráficos que siguen, tanto la novedosa participación de las exportaciones en el valor bruto de producción industrial (que permite explicar los renovados superávits comerciales que acompañan el crecimiento del PBI), como los incrementos sostenidos en los parámetros de productividad laboral en la industria manufacturera, son explicados en gran medida, tanto en los '90 como ahora, por un reducido número de actividades competitivas que habían sobrevivido (y crecido) durante la fuerte apreciación cambiaria de la década anterior.¹⁸

En otras palabras, los “éxitos” de la postconvertibilidad son una combinación de fenómenos históricos y coyunturales, que no necesariamente pueden ser atribuidos a un cambio “estructural” inducido por transformaciones en la política económica. La transformación en los modos de producir manufacturas, a los que hicimos mención en el apartado anterior, son los que se encuentran en última instancia detrás de la nueva penetración de manufacturas argentinas en el comercio internacional. Ya en la convertibilidad, con una fuerte apreciación cambiaria, no sólo las industrias de alta productividad habían logrado explicar el 10% del crecimiento económico total, sino que habían logrado incrementar significativamente sus volúmenes exportables, y sus parámetros de productividad. En este sentido, es interesante señalar que ya en esos años comenzaron a registrarse techos históricos en materia de participación de las exportaciones en el valor bruto de producción industrial (VBP).

Lo que intentamos mostrar con estos datos, es la transformación estructural de un aparato industrial que durante la postconvertibilidad parece exhibir varios signos de profundización. Es decir, un aparato industrial que puede ser dividido en dos grandes sectores. Por un lado, y vinculado a la idea de enclave exportador mencionada en el apartado anterior, un sector de alta productividad (parte de la siderurgia, petróleo, alimentos y automóviles) con capacidad de insertar sus manufacturas en el mercado mundial, y por el otro, un sector de baja productividad, con menor capacidad exportadora, pero central en términos de empleo asalariado.

18 Es interesante observar el comportamiento combinado de las Industrias de Alta Productividad tanto en los '90 como ahora, a partir de la evaluación conjunta de los gráficos 4, 5 y 6. Pese a la fuerte apreciación cambiaria, los sectores no sólo tuvieron un impacto significativo en el crecimiento, sino que lograron aumentar sus parámetros de productividad y sus exportaciones. De hecho, la participación de las exportaciones en el VBP de estos sectores, paso del 6% aproximadamente en 1993, al 13% en 2000, en contextos de una fuerte apreciación del tipo de cambio real.

**CUADRO 3
EXPORTACIONES INDUSTRIALES SEGÚN ESTRATO DE PRODUCTIVIDAD**

Años	Exportaciones industriales (millones de dólares corrientes)	Industrias de Alta Productividad			Industrias de Baja Productividad		
		Participación del estrato en el total de X (%)	Participación de las exportaciones en el VBP (%)	Participación en el VBP Industrial (%)	Participación del estrato en el total de X (%)	Participación de las exportaciones en el VBP (%)	Participación en el VBP Industrial (%)
1993	9711,1	61,2	6,6	32,6	38,8	5,0	67,4
1994	11359,9	61,3	7,6	32,8	38,7	7,0	67,2
1995	15036,9	62,1	9,9	34,4	37,9	8,4	65,6
1996	16245,3	66,3	10,2	35,0	33,7	7,2	65,0
1997	18868,2	66,9	12,3	33,9	33,1	8,7	66,1
1998	18600,9	67,8	12,3	34,8	32,2	7,9	65,2
1999	16608,1	63,6	11,8	36,4	36,4	9,0	63,6
2000	17993,0	60,5	12,8	35,9	39,5	12,1	64,1
2001	17905,7	58,8	15,5	38,6	41,2	15,5	61,4
2002	17843,1	60,2	41,0	33,1	39,8	22,5	66,9
2003	20932,8	60,9	20,2	32,9	39,1	16,2	67,1
2004	24901,8	59,7	18,9	31,7	40,3	15,7	68,3
2005	28840,5	60,7	19,5	32,3	39,3	15,5	67,7
2006	34570,9	62,6	25,3	31,8	37,4	16,7	68,2
2007	41102,6	65,3	27,6	31,0	34,7	14,8	69,0
2008	50786,9	66,6	32,9	31,4	33,4	15,8	68,6

Fuente: Elaboración propia sobre la base del Ministerio de Economía y el Centro de Estudios para la Producción (2010)

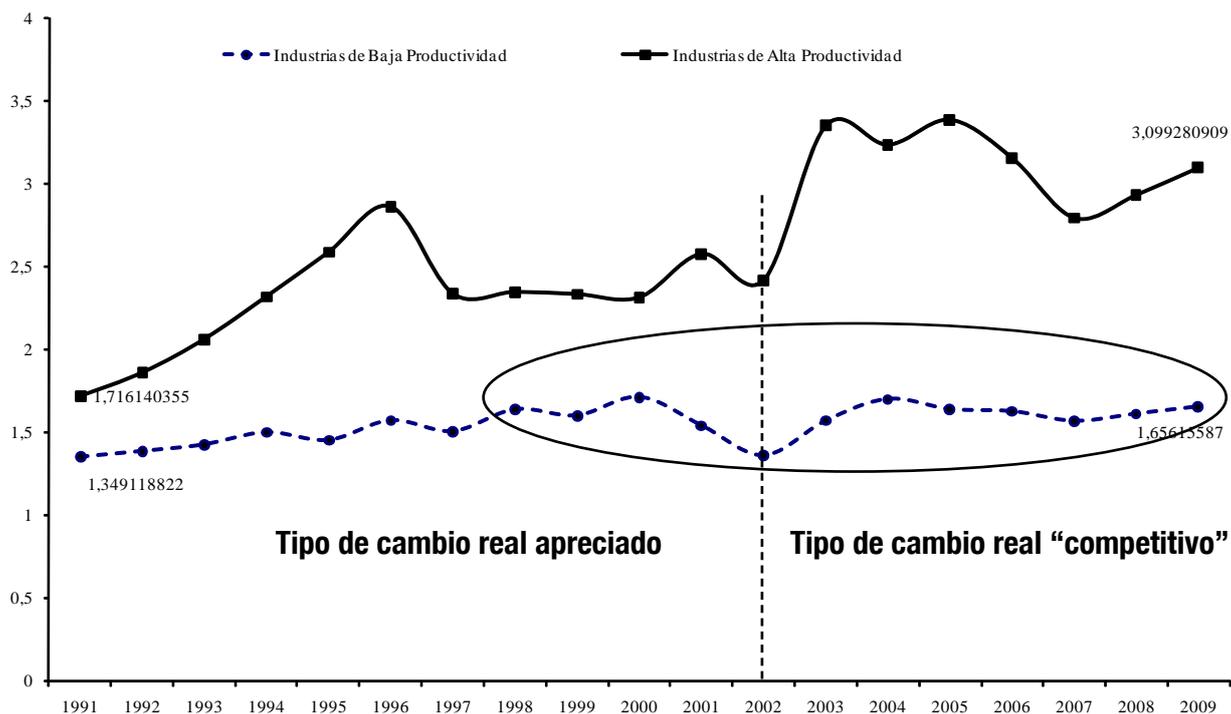
De manera complementaria, si hacemos el corte por “tamaño del establecimiento empresario” en lugar de por estrato productivo, encontramos signos que parecen corroborar la anterior afirmación. En este sentido, el comportamiento exportador de lo que podríamos denominar como el segmento de pequeñas y medianas empresas es sumamente elocuente: *para 2008, sólo el 11% del gran universo empresario que emplea entre 1 y 200 trabajadores había logrado exportar más del 5% de su VBP.*¹⁹ Como contrapartida, y según la Encuesta Nacional a Grandes Empresas (INDEC), las primeras 200 empresas explicaban para 2005 alrededor de las ¾ partes de las exportaciones industriales totales. Es más, según un artículo reciente de Azpiazu y Schorr (2010, p. 134), el superávit comercial de las 100 empresas industriales más grandes de nuestro país era en 2007 de unos 15.800 millones de dólares, es decir 4 mil millones de dólares más que el superávit comercial total de la economía argentina, y el equivalente al 30% de las exportaciones totales del país.

Como en el caso de Paraná Metal, las industrias de baja productividad y las Pymes, no sólo participan marginalmente del gran crecimiento exportador de las manufactureras, sino que están desarticuladas entre sí, y evidencian, en promedio, parámetros de productividad que se encuentran estancados casi desde la década pasada. Estas industrias además, como mencionáramos en otro artículo de la revista Periferias (Fal et al, 2009), no parecen ser la consecuencia necesaria del desarrollo de los sectores modernos. Éstos, como en el caso de las terminales automotrices, están muchas veces vinculados a lógicas de abastecimiento global y/o regional, y no demandan insumos a las pequeñas y medianas empresas locales. Si estas últimas pudieron crecer en los últimos años, es gracias básicamente al abaratamiento de la fuerza de trabajo. Aunque esquemática, esta interpretación permitiría comprender el desigual impacto que supuso el régimen cambiario sobre uno y otro estrato de productividad. Ade-

¹⁹ Este dato surge de la Fundación Observatorio PYME. Para mayor información, véase “Informe 2007/2008. Evolución reciente, situación actual y desafíos futuros de las PYME industriales”. El dato ha sido extraído de Fal, Pinazo y Lizuáin, 2009.

GRÁFICO 5
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN FÍSICA POR OBRERO OCUPADO*
EN LAS INDUSTRIAS DE ALTA Y BAJA PRODUCTIVIDAD. 1991-2009.

Expresada en millones de pesos de 1997 por trabajador

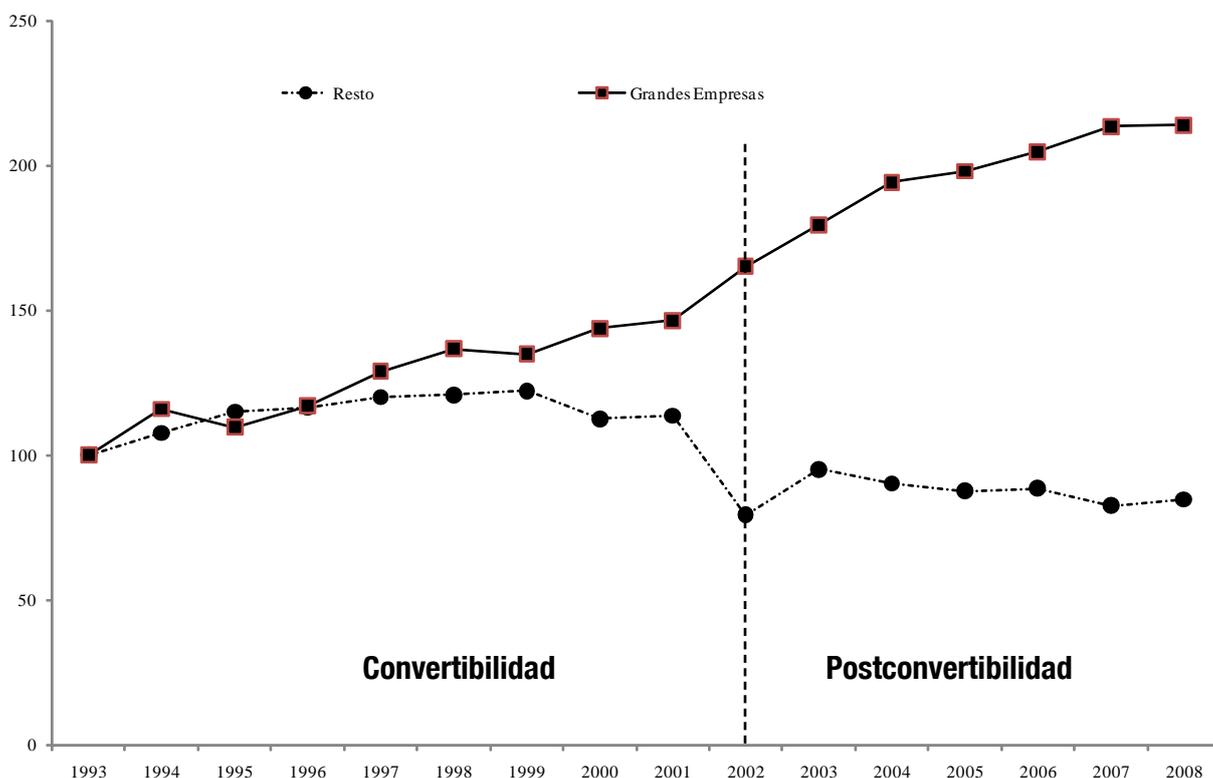


Fuente: Elaboración propia sobre la base del CEP (2010) y la Encuesta Industrial (INDEC).

* Para los datos de productividad laboral hemos utilizado un método similar al del cálculo de los salarios, con la salvedad de que hemos utilizado como insumo los datos absolutos de valor de producción y obreros ocupados por rama para 1997, que surgen de la Encuesta Industrial (INDEC).

GRÁFICO 6
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN FÍSICA POR OBRERO OCUPADO
EN GRANDES EMPRESAS INDUSTRIALES Y EL RESTO. 1993-2008

Valores índice (1993=100).



Fuente: Elaboración propia sobre la base de INDEC y Ministerio de Economía

más, y como intentaremos mostrar, es a partir de este análisis que podremos entender el particular limitante que este esquema de crecimiento parece suponer en términos de salarios.

Para tener una idea de la magnitud del abaratamiento que supuso la devaluación, sirve como indicador el siguiente dato: el salario real promedio a valores de 1993 fue en el período 2003-2007 casi un 30% más bajo al promedio del período 1947-2007 (CEPED, 2008). Esta última cuestión está íntimamente vinculada al comportamiento particular que han exhibido los datos de empleo durante este último período. El exitoso techo alcanzado por la tasa de empleo en 2007, un 42% de la población total, si bien estuvo motorizado fuertemente por este renovado crecimiento en las industrias de baja productividad,²⁰ también tuvo que ver, fundamentalmente, con estos magros ingresos de las ocupaciones, que obligan a una parte cada vez mayor de la población total a buscar empleo para satisfacer sus necesidades materiales. En efecto, la tasa de actividad se ubicó durante la postconvertibilidad, por lejos, en sus valores más altos desde 1974 (poner dato). Esto explica que con tasas de empleo aproximadamente un 20% superiores a la media histórica, la desocupación apenas rompiera el alto piso al que nos tenía acostumbrados, desde mediados de los '90, del 10% de la fuerza de trabajo.

En resumidas cuentas, parece existir un modo problemático en el que esta nueva estructura productiva se vincula con el problema del empleo y la distribución. Mientras una pequeña parte del aparato productivo genera una parte significativa de la riqueza y emplea a una minoritaria porción de la población, otra parte, la que sigue siendo “periférica”, emplea a una parte significativa de la población, pero con salarios que se encuentran en los pisos de la historia argentina. Ahora bien, una de las particularidades de este último sector es que, con parámetros de productividad estancados, difícilmente pueda absorber incrementos significativos de salario (salvo que éste se produzca como contrapartida de reducciones significativas en los márgenes de ganancia, lo cual, la historia argentina muestra que es poco probable). De hecho, entendemos que aquí deben buscarse no solo algunas de las causas de la aceleración inflacionaria de 2007-2009, sino también las causas de la desaceleración de las industrias de baja productividad en el mismo período y su impacto sobre el empleo.²¹

En efecto, en el año 2008, por primera vez desde la devaluación y tras sólo tres años donde el salario creció a un ritmo levemente superior al de los precios minoristas, el costo salarial ajustado por productividad en las industrias de baja productividad registró niveles superiores a los imperantes durante la segunda mitad de la convertibilidad.²² De allí que, según las mismas fuentes de información mencionadas, en el año 2008 las industrias de baja productividad hayan explicado apenas el 5% del crecimiento económico, y que, para el tercer trimestre de 2008 hayan expulsado en relación al mismo período de 2007, *al 17% del empleo asalariado*.

*En términos agregados, esto se tradujo en el primer descenso interanual de la tasa de empleo desde la devaluación (medida en los terceros trimestres de cada año). En resumidas cuentas, son los particulares limitantes de la estructura económica argentina los que parecen encontrarse detrás de la imposibilidad de sostener al mismo tiempo altos niveles de empleo con procesos de mejora en los salarios.*²³

20 Según los datos que se desprenden de la EPH (INDEC), las industrias de baja productividad eran en el I trimestre de 2003 alrededor del 8% del empleo asalariado, y explicaron, entre este período y el I de 2007, el equivalente al 18% del nuevo empleo asalariado generado, en contextos donde este rompía año a año sus records históricos.

21 La inflación minorista, según surge de una combinación de los datos provistos por el CENDA y el INDEC, pasa de un ritmo de crecimiento de un poco más del 1% mensual entre enero de 2002 y enero de 2007, a un ritmo mayor al doble entre febrero de 2007 y diciembre de 2009. Esto se produce, no casualmente, exactamente en momentos donde el salario real comienza a recuperar el poder adquisitivo de diciembre de 2001. Al respecto es elocuente la nota de Eduardo Crespo en Página 12 del 10 de mayo de 2010.

22 Esto surge de una agrupación de las ramas industriales siguiendo la metodología antes mencionada, a partir de la información provista por el CEP (2010).

23 Nos parece que, por ejemplo, es útil analizar políticas paradigmáticas de este período histórico como la Asignación Universal por Hijo en este contexto. Es decir, si en momentos donde el empleo toca sus techos históricos, sigue siendo necesaria (oportuna y contraria al modo que tenían de hacer política los gobiernos neoliberales en la argentina) una medida de este estilo, es justamente porque los ingresos y las condiciones de las ocupaciones existentes son sumamente pobres. Y este es uno de los indicadores más elocuentes de las diferencias entre este período histórico y otros de la economía argentina.

CUADRO Nº 4 APORTE DE LOS DISTINTOS SECTORES PRODUCTIVOS AL PBI Y AL EMPLEO ASALARIADO DURANTE EL PERÍODO 2007-2008							
Años	Industrias de Alta Productividad	Industrias de Baja Productividad	Servicios de Alta Productividad	Servicios de Baja Productividad	Sector Primario/Público	Construcción	Total
Aporte al crecimiento económico.							
2007-2008	6,8	5,8	32,0	54,5	-2,0	3,7	8,8
Variación del empleo asalariado por estrato.							
2007-2008	8,1	14,7	2,1	-0,7	-2,8	5,4	0,9

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Lavopa (2007), el Ministerio de Economía y la EPH (INDEC).

ALGUNAS REFLEXIONES FINALES EN TORNO A LOS LÍMITES DEL DESARROLLISMO Y LA ALTERNATIVA POLÍTICA.

Siguiendo el planteo de la introducción, la principal pregunta que se desprende del texto parece ser la siguiente, ¿en qué medida esta estructura económica puede ser la base de un proyecto de desarrollo inclusivo, que incluya mejoras *sustantivas* en las condiciones de vida de los sectores populares? Y aquí es donde nos parece que comienza a tener cada vez más sentido la idea de una alternativa *radical* al neoliberalismo. Los procesos de nacionalización de empresas privadas en países como Venezuela, Bolivia o Ecuador por ejemplo, que obligaron a poner en cuestión y a reformular los fundamentos mismos de las constituciones nacionales liberales, no son gestos populistas, demagogos, o irracionales; son el resultado de una disputa política que tiene como horizonte el mejoramiento en las condiciones de vida de una parte mayoritaria de la población. Las estructuras económicas sobre las cuales operan los gobiernos abiertamente críticos a las recetas neoliberales, son justamente el producto de años de ese neoliberalismo, y confrontar con ellas supone ir a contramano del accionar que el Estado desarrolló en estos últimos largos años. Es decir, en muchos de estos países no alcanza con que el Estado tenga un rol *activo* en la economía, es necesario que se ponga en cuestión una parte misma de sus fundamentos.

Y sobre este último punto no es necesario ir tan lejos como a las nacionalizaciones que el gobierno venezolano está llevando adelante hoy en día. La privatización de empresas públicas en la Argentina que permitió, entre otras cosas, el despegue de Repsol a nivel mundial, está amparada, hoy en día, por tratados de inversión firmados durante los '90 que poseen en nuestro país rango constitucional. Esto significa no sólo que no pueden ser regulados por nuestras leyes (puesto que poseen un estatus jurídico superior a las mismas) sino que las disputas entre el Estado Argentino y las empresas amparadas por los mismos deben, teóricamente, ser resueltas por tribunales arbitrales internacionales.

En otras palabras, en la medida en que los intereses de estas fracciones del capital están amparados por una compleja y profunda red de instituciones estatales, y en la medida también en que en la mayoría de los casos dichos intereses son incompatibles con aquellos de cualquier proyecto medianamente inclusivo (aquí el caso de Paraná Metal es paradigmático de dicha incompatibilidad *aún* en el caso de una fracción del denominado capital productivo²⁴), la crítica al neoliberalismo supone necesariamente un arduo proceso de disputa política, que necesariamente obliga a poner en cuestión el principio de continuidad jurídica del Estado.

24 Vale la pena agregar que específicamente dicho capital productivo es uno de los principales beneficiarios de las transferencias estatales en concepto de promoción industrial.

ANEXO

RAMAS INCLUIDAS DENTRO DE CADA UNO DE LOS ESTRATOS PRODUCTIVOS	
Producción de Bienes Excepto Industria (Primario)	Servicios de Alta Productividad
Agricultura, ganadería, caza y servicios conexos	Hoteles
Silvicultura, extracción de madera y servicios conexos	Transporte por vía acuática
Pesca	Transporte por vía aérea
Explotación de minas y canteras	Correo y Telecomunicaciones
Suministro de electricidad, gas, vapor y agua caliente	Intermediación Financiera, excepto seguros y de pensiones
Captación, depuración y distribución de agua	Actividades inmobiliarias
Industrias de Alta Productividad	Servicios de Baja Productividad
Elaboración de productos alimenticios y bebidas	Comercio
Elaboración de productos de tabaco	Restaurantes
Fabricación de coque, refinación del petróleo y combustible nuclear	Transporte por vía terrestre; Transporte por tuberías
Fabricación de sustancias y productos químicos	Act. De transporte complementarias y auxiliares
Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática	Seguros y de pensiones, excepto seg. Soc. de afiliación obligatoria
Fabricación de equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	Servicios empresariales
Fabricación de metales comunes	Enseñanza
Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques	Servicios sociales y de salud
Industrias de Baja Productividad	Eliminación de desperdicios y aguas residuales, saneamiento
Fabricación de productos textiles	Actividades de asociaciones N.C.P
Fabricación de prendas de vestir; terminación y teñido de pieles	Actividades de esparcimiento y actividades culturales y deportivas
Curtido y terminación de cueros; bolsos y calzado	Otras actividades de servicio
Producción de madera y productos de madera, excepto muebles	Hogares privados con servicios domestico
Fabricación de papel y de productos de papel	Organizaciones y órganos extraterritoriales
Actividades de edición e impresión y grabaciones	Adm. Pública y Defensa; Seguro Social de Afiliación Obligatoria
Fabricación de productos de caucho y plástico	Construcción
Fabricación de otros productos minerales no metálicos	Construcción
Fabricación de productos de metal, excepto maquinaria y equipo	
Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.	
Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p.	
Fabricación de inst.s médicos, ópticos, de precisión y relojes	
Fabricación de otros tipos de equipo de transporte	
Fabricación de muebles; industrias manufactureras n.c.p.	

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Lavopa (2007) y el Censo Económico (1994).

BIBLIOGRAFÍA.

Azpiazu, D., Schorr, M. (2010). “La industria argentina en la postconvertibilidad: legados del neoliberalismo”. Problemas del Desarrollo. IIEC-UNAM, vol 41 n° 161.

Arrighi, G., (1997), A ilusao do desenvolvimento, Petrópolis, Editora Voces.

Basualdo, E. (2006), “Estudio de historia económica. Desde mediados del siglo XX a la actualidad”, Flacso-Siglo XXI, Buenos Aires.

Barbero, M., Motta, J. (2007). “Trayectoria de la industria automotriz en la Argentina desde sus inicios hasta finales de la década de 1990”, en Delfin, M., Luggones, M., Rivero, I., Dubbini, D. (comp), Innovación y Empleo en tramas productivas de Argentina. Prometeo-UNGS.

Centro de Estudios para la Producción (2009), “Fichas Sectoriales 2008”. www.cep.gov.ar.

Bresser-Pereira, L. (2007). “Estado y mercado en el nuevo desarrollismo”. Nueva Sociedad, n° 210.

Centro de Estudios para la Producción (2010), "Fichas Sectoriales 2009".

Fal, J., Pinazo, G. y Lizuaín, J., (2009), "Notas sobre la postconvertibilidad: los límites a la mejora en las condiciones de vida de los sectores populares". Revista Periferias, año 13, n° 18.

Fernández Bugna, C. y Porta, F., (2008), "El crecimiento reciente de la industria Argentina. Nuevo régimen sin cambio estructural", en Revista Realidad Económica, N° 233, Buenos Aires.

Fundación observatorio PYME, (2008), "Informe 2007/2008. Evolución reciente, situación actual y desafíos futuros de las PYME industriales", en Fundación Observatorio PYME, Buenos Aires.

Lavopa, A. (2007). "Heterogeneidad de la estructura productiva argentina: impacto sobre el mercado laboral durante el período 1991-2003". DT n° 9. CEPED-UBA.

Matrices Insumo-Producto (1997).

Minian, I. (2009). "Nuevamente sobre la segmentación internacional de la producción". Proyecto PAPIIT-UNAM.

Nahon, C., Rodríguez K., Schorr M., (2006) "El pensamiento latinoamericano en el campo del desarrollo del subdesarrollo: trayectoria, rupturas y continuidades", en Crítica y teoría en el pensamiento social latinoamericano. CLACSO.

Santarcángelo, J. y Pinazo G., (2009), "Análisis crítico de la reindustrialización en la posconvertibilidad: una mirada desde el sector automotriz". Revista Realidad Económica, N° 247, IADE, Buenos Aires.

Sztulwark, S (2005). El estructuralismo latinoamericano. Ediciones Prometeo-UNGS.

Yoguel, G, Motta, J., Roitter, S., Milesi, D., Delfini, M., (2007). "Articulación y desarrollo de competencias en la trama automotriz argentina: morfología, innovación y empleo". En Delfin, M., Luggones, M., Rivero, I., Dubbini, D. (comp), Innovación y empleo en tramas productivas de Argentina. Prometeo-UNGS.

